¡Espabilemos!

ARGUMENTOS DESDE EL 15-M

Carlos Taibo (coord.), Jeromo Aguado, Mariano Aragonés García, Raúl Asegurado Pérez, Ángel Calle, Jordi Calvo, Sonia Campo, Antonio Carretero, Ada Colau, Ángeles Díez, Enric Duran, Iolanda Fresnillo, Javier García, Yayo Herrero, Ana Jiménez, Marta Jiménez, Sara López, Patricia Manrique, Salvador Martí, Bibiana Medialdea, Paloma Monleón, Ángeles Ramírez, Raquel Ramírez, Enrique del Río, María Rodríguez, Manoel Santos, Gemma Ubasart-Gonzàlez, Ana Velázquez, Raimundo Viejo

CATARATA

¡Espabilemos!

ARGUMENTOS DESDE EL 15-M

Carlos Taibo (coord.),

Jeromo Aguado, Mariano Aragonés García,

Raúl Asegurado Pérez, Ángel Calle,

Jordi Calvo, Sonia Campo,

Antonio Carretero, Ada Colau,

Ángeles Díez, Enric Duran,

Iolanda Fresnillo, Javier García,

Yayo Herrero, Ana Jiménez,

Marta Jiménez, Sara López,

Patricia Manrique, Salvador Martí,

Bibiana Medialdea, Paloma Monleón,

Ángeles Ramírez, Raquel Ramírez,

Enrique del Río, María Rodríguez,

Manoel Santos, Gemma Ubasart-Gonzàlez,

Ana Velázquez, Raimundo Viejo

CATARATA

CRÉDITOS

DISEÑO DE CUBIERTA: ESTUDIO PÉREZ-ENCISO

© JEROMO AGUADO, MARIANO ARAGONÉS GARCÍA, RAÚL ASEGURADO PÉREZ, ÁNGEL CALLE COLLADO, JORDI CALVO RUFANGES, SONIA CAMPO MACHO, ANTONIO CARRETERO, ADA COLAU, ENRIQUE DEL RÍO, ÁNGELES DÍEZ RODRÍGUEZ, ENRIC DURAN, IOLANDA FRESNILLO, JAVIER GARCÍA RABOSO, YAYO HERRERO, MARTA JIMÉNEZ CARRILLO, ANA JIMÉNEZ TALAVERA, SARA LÓPEZ MARTÍN, PATRICIA MANRIQUE, SALVADOR MARTÍ I PUIG, BIBIANA MEDIALDEA, PALOMA MONLEÓN, ÁNGELES RAMÍREZ, RAQUEL RAMÍREZ, MARÍA RODRÍGUEZ BAJO, MANOEL SANTOS, CARLOS TAIBO, GEMMA UBASART-GONZÀLEZ, ANA VELÁZQUEZ PAREJÓN, RAIMUNDO VIEJO VIÑAS, 2012

© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2012

FUENCARRAL, 70

28004 MADRID

TEL. 91 532 05 04

FAX. 91 532 43 34

WWW.CATARATA.ORG

¡ESPABILEMOS!

ARGUMENTOS DESDE EL 15-M

ISBN digital:978-84-8319-758-5

ISBN libro en papel:978-84-8319-736-3

creative commons ESTA LICENCIA PERMITE COPIAR, DISTRIBUIR, EXHIBIR E INTERPRETAR ESTE TEXTO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

AUTORÍA-ATRIBUCIÓN: SE DEBERÁ RESPETAR LA AUTORÍA DEL TEXTO. SIEMPRE HABRÁ DE CONSTAR EL NOMBRE DEL AUTOR.

NO COMERCIAL: NO SE PUEDE UTILIZAR ESTE TRABAJO CON FINES COMERCIALES.

NO DERIVADOS: NO SE PUEDE ALTERAR, TRANSFORMAR, MODIFICAR O RECONSTRUIR ESTE TEXTO.

LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA DEBERÁN CONSTAR DE UNA MANERA CLARA PARA CUALQUIER USO O DISTRIBUCIÓN DEL TEXTO. ESTAS CONDICIONES SOLO SE PODRÁN ALTERAR CON EL PERMISO EXPRESO DEL AUTOR. ESTE LIBRO TIENE UNA LICENCIA CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NODERIVS-NONCOMMERCIAL. PARA CONSULTAR LAS CONDICIONES DE ESTA LICENCIA SE PUEDE VISITAR: HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-ND-NC/1.0/ O ENVIAR UNA CARTA

PRÓLOGO

La idea de que el momento presente, sea cual sea éste, es el adecuado para repensar la condición del movimiento del 15 de mayo y disponer su futuro lleva camino de convertirse en un genuino lugar común. Se repite una y otra vez, de cualquier modo, en este tórrido verano de 2012, cuando se dan cita las inercias que, en lo que hace al movimiento, vienen del pasado y el sinfín de agresiones que el propio 15-M padece.

El verano de 2012 es un momento tan apropiado como cualquier otro para reflexionar sobre el movimiento del 15 de mayo. No me gustaría dejar de lado, sin embargo, lo que se suele colar de rondón al calor de esa demanda de reflexiones urgentes que nos acosa por todas partes. Me refiero a la idea, rara vez enunciada con rotunda claridad, de que el movimiento no está a la altura de lo que cabría esperar. Confesaré rápidamente que disiento. Sin ninguna voluntad de ocultar las carencias del 15-M, me parece que sus activos son mucho, muchísimo, más importantes. Enuncio varios de ellos: ha permitido forjar una nueva, y orgullosa, identidad contestataria; ha rescatado discusiones que el *pensamiento único* había conseguido arrinconar; ha perfilado a su alrededor un sugerente espacio que ha hecho posible el reencuentro de muchas personas; ha conferido dignidad a la asamblea y a la democracia directa; ha dado alas a las iniciativas protagonizadas por otros

movimientos, y, por si poco fuera, ha logrado que muchas gentes descubran que pueden hacer cosas que en apariencia no estaban a su alcance.

Creo que no está de más que formule aquí, brevemente, algunas de las intuiciones que, sobre el 15-M, he manejado a lo largo del último año. He señalado en repetidas oportunidades que en origen en el movimiento había dos almas: mientras la primera la configuraban las gentes de los movimientos sociales alternativos, la segunda la constituían lo que, con escasa fortuna, hemos dado en llamar *jóvenes indignados*. Pronto se hizo evidente que en la mayoría de los lugares se producía una vivificación mutua de esas dos almas, cuyos perfiles diferenciadores al poco dejaron de ser manifiestamente claros. Más allá de ello, el abandono de las acampadas y el redespliegue del 15-M en forma de asambleas populares en barrios, ciudades y pueblos perfiló una composición más compleja del movimiento, con la llegada, en particular, de muchos trabajadores asalariados. Creo que en términos generales ese proceso de diversificación se vio acompañado de una deriva ideológica muy estimulante: muchos de los sectores del 15-M que en el momento inicial defendían propuestas de cariz meramente ciudadanista —contestaban en singular algún elemento preciso del sistema que padecemos— transitaron rápida y espontáneamente hacia posiciones francamente anticapitalistas —pasaron a contestar el sistema como un todo—. De resultas, y por añadidura, pronto se hizo evidente que esta deriva ideológica reclamaba por necesidad el asentamiento de una instancia con franca vocación de permanecer en el tiempo.

A mi entender, y aun con todo lo anterior, en el 15-M de estas horas perviven dos percepciones diferentes. La primera, que mantiene conexiones obvias con el ciudadanismo, considera que la prioridad mayor del movimiento debe consistir en formular propuestas en la confianza de que antes o después serán escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda estima, en cambio, que el 15-M debe volcar el grueso de sus energías en la creación de espacios de autonomía en virtud de los cuales, sin necesidad de pedir autorizaciones, procedamos a aplicar reglas del

juego diferentes de las que hoy nos atenazan. Ejemplos de esos espacios los aportarían las cooperativas integrales, los grupos de consumo, las ecoaldeas, las incipientes redes de banca ética y social, o las pulsiones autogestionarias en las empresas. Aunque las dos percepciones que acabo de glosar desarrollan a menudo relaciones fluidas, obligado parece subrayar que remiten en último término a proyectos distintos: si el primero se muestra más vinculado con la vida política tradicional, y con fórmulas de democracia representativa, el segundo bebe de una vena libertaria y preconiza el despliegue de mecanismos descentralizados que en buena medida se basan en la democracia directa, en la desmercantilización y —ya lo he adelantado— en la autogestión.

Tampoco está fuera de lugar —parece— que subraye que el movimiento arrastra sus carencias. No podía ser de otra manera. Su presencia en el mundo del trabajo sigue siendo testimonial, y al respecto no ha acabado de clarificar el panorama de sus relaciones con los sindicatos, mayoritarios o alternativos; las tareas pendientes en estos terrenos son tanto más urgentes cuanto que, por muchos conceptos, la lógica laboral que se nos impone está recuperando rasgos propios de tiempos muy alejados. Tampoco se ha hecho valer con fuerza el 15-M en el campo, y eso que buena parte de las demandas que surgen de aquél conduce inevitablemente a un designio de revitalización de una vida rural hoy claramente postergada. Hay quien adivina, en fin, una posible deriva tecnocrática en un movimiento que debe mucho a novísimas tecnologías pero que haría bien en no dejarse atrapar por ellas. Las cosas como fueren, y más allá de estas discusiones, el 15-M debe colocar en primer plano tres dimensiones decisivas, como son las que se refieren al género —en recuerdo consciente y permanente de la marginación, material y simbólica, que padecen las mujeres—, al medio natural —ahí están los derechos de las generaciones venideras y, con ellos, los de las demás especies que nos acompañan en el planeta— y a los habitantes de los países del Sur —no vaya a ser que reconstruyamos nuestros maravillosos Estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de explotación y exclusión—.

A todas, o a muchas, de estas cuestiones remiten los textos que se incluyen en este librito colectivo. Como el lector inmediatamente apreciará, acoge dos docenas de reflexiones que se interesan tanto por el 15-M y sus deberes, como por el escenario general en el que nos movemos. Creo que no me equivoco cuando afirmo que todas las materias tratadas son relevantes aun cuando, y por lógica, falten otras que también lo son. Los textos expresan muy a menudo, por lo demás, percepciones y sensibilidades distintas, desplegadas con opciones terminológicas también diferentes. Esas percepciones y sensibilidades, más moderadas o más radicales, se emplazan unas veces —las menos— en la línea de la formulación de propuestas y otras —las más— en la de la mentada construcción de espacios de autonomía y desmercantilización. Con frecuencia identifican, por añadidura, carencias evidentes del movimiento del 15 de mayo, como es el caso de las que hacen referencia a las mujeres, a los inmigrantes y a nuestra actitud ante las diferentes deudas que hemos contraído con los habitantes del Sur del globo.

Debo llamar la atención, para terminar, sobre la ironía que se revela a través de lo de *¡Espabilemos!*, un título que no deja de ser un remedo de un tipo de literatura que ha proliferado, con razonable éxito, en los últimos tiempos. No parece osado concluir que lo que singulariza a este texto son dos hechos. Si el primero nos habla de su gestación en la base del propio movimiento del 15 de mayo, el segundo identifica una rotunda vocación de cambiar radicalmente, y de nuevo desde abajo, este triste mundo en que vivimos.

CARLOS TAIBO
Agosto de 2012

CAPÍTULO 1
LOS JÓVENES: LA GENERACIÓN PERDIDA

MARÍA RODRÍGUEZ BAJO[1]

Un señor trajeado entra en un mercado. Colgando del brazo lleva una bolsa donde se lee “Empleo”. Se acerca a un quiosco de colores rojigualdas y da los buenos días. Enfrente, el ministro de Empleo le contesta: “Buenos días, ¿qué puedo hacer por usted?”. “Pues mire”, responde el ejecutivo, “estoy buscando trabajadores para una empresa líder en el sector. Pero quiero algo baratito, con buena relación calidad-precio”. “Verá, tengo aquí unos ingenieros con un currículum brillante y más de diez años de experiencia. Bien es verdad que llevan más de un año en el paro, pero se los dejo un poco más barato y listo.”

Entonces el delegado ministerial baja la voz y prosigue en tono de confidencia: “Pero si está buscando usted una ganga de verdad, hay un excedente de jóvenes a los que no estoy dando salida. Y no crea, que muchos de ellos tienen estudios universitarios. ¿Le he comentado que si se los lleva usted, con estudios o no, recibirá una bonificación de hasta 3.600 euros en sus cuotas de la Seguridad Social?”. “¡No me diga!”, exclama el hombre de terno. “Sí”, continúa el vendedor, “y además tienen garantía. Si no le gusta cómo trabajan o las perspectivas económicas no van como planeaba,

puede echarlos a la calle durante el primer año sin previo aviso y sin compensación alguna. Un pequeño mal a cambio de un gran bien, como es el fin del desempleo juvenil". Parece una oferta tentadora, piensa el hombre de la bolsa. "¡Qué diablos, me los llevo! Puedo llevarme a un licenciado por la mitad que en el puesto de al lado."

Éste es el sueño de los creadores de la reforma laboral aprobada por decreto ley —como el 77 por ciento de las medidas tomadas hasta la fecha por el actual Gobierno—, de 10 de febrero de 2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. ¿Se hará realidad? Ahora es cuando empieza la pesadilla de los jóvenes, de la *generación perdida* —y eso que la mayoría lleva GPS incorporado en el móvil—, como gentilmente ha convenido en llamarla la Organización Internacional del Trabajo en su informe "Tendencias mundiales del empleo juvenil 2012". Será la primera generación que no vivirá mejor que sus padres. ¿Cómo es posible?

Los menores de 29 años han crecido rodeados de abundancia, segundas casas en la playa, videoconsolas y televisión. No conocen otra cosa que no sea la democracia y el derecho a tener internet. Además, es la generación que mejor preparada está de la historia española —actualmente un 39 por ciento de la población entre 24 y 35 años posee un título universitario y al 56 por ciento de los estudiantes de la ESO les gustaría cursar estudios superiores—. Si un alto nivel educativo aleja las posibilidades de quedar en paro o encontrarse en una situación precaria, ¿por qué desconfían tanto de su futuro?

Primero de todo quizás sea útil recordar que la última década de crecimiento económico en España se ha basado en el espejismo del sector inmobiliario: lo llamaban riqueza pero querían decir especulación. Un desarrollo basado en cimientos tan ficticios tenía todas las posibilidades de venirse abajo. ¿Y quién iba a pagar las facturas? Los jóvenes. Ellos son los que, en su mayor parte, van a tener que hacer malabares con la sociedad que dejemos.

Según los datos de julio de 2012, el paro ha alcanzado el 53,28 por ciento entre los menores de 25 años. Es un triste récord histórico pero no una sorpresa en las estadísticas de un país cuyo mercado laboral arrastra un mal estructural. En 1984 los

desempleados de esas edades comenzaron a amontonarse, raspando la barrera del 50 por ciento, pico que volvió a producirse a mediados de la década de 1990. Ya entonces el mercado español era *muy rígido*, esto es: puestos de trabajo fijos, prestaciones por desempleo e indemnizaciones por despido *muy generosas*, convenios colectivos poderosos... Reglas del juego que ofrecían una seguridad al trabajador y con ello la posibilidad de planificar un futuro. Pero, ¡imposible que un país alcance el pleno empleo con esas características! Hay que flexibilizar. Se acabó eso del trabajo para toda la vida. Y ésta ha sido una de las obsesiones de la troika, que ha presionado a los Gobiernos —el español entre ellos— para adoptar medidas de austeridad que favorezcan la precariedad laboral y potencien la desigualdad social.

Si actualmente un 60 por ciento de quienes cuentan entre 15 y 24 años tiene un contrato temporal (Eurostat, 2012), lo dramático es que el porcentaje correspondiente sigue siendo muy elevado, entre un 40 y un 50 por ciento, pasados los 30 años de edad. Hablamos de un proceso de flexibilización que se inició en 1984, con la extensión del contrato temporal a todas las actividades, y continuó en el decenio siguiente con la creación de las ETT o de los famosos *contratos basura*.

La sobrecualificación es otro de los trastornos actuales. Cerca del 40 por ciento de los jóvenes desarrolla trabajos por debajo de su preparación. En la década de 1990 el 17,7 por ciento de los universitarios trabajaba en un puesto para el que no se requería estudio superior alguno, frente al 7,7 por ciento de la media europea. El acceso de la mujer a la universidad y la mejora del nivel adquisitivo de las familias, junto con la proliferación de centros y del sistema público educativo, hicieron que creciese año tras año el número de estudiantes en las universidades. Si en el curso 1977/1978 había 714.000 estudiantes matriculados en las diferentes facultades, el 2009/2010 vio entrar por las puertas de aquéllas a más del doble de alumnos. El problema va a ser, al final, que sobran universitarios. La última subida de tasas en los centros de educación superior —podrían suponer un incremento de hasta 10 euros por crédito— quizás resuelva ese problema y logre polarizar aún más el

grado de estudios de la población juvenil y, por tanto, dilatar la brecha social y generar más desigualdades.

Ahora bien: el mercado de trabajo incide en otras dimensiones que van más allá de lo puramente laboral. La inseguridad afecta a la salud —el estrés es una enfermedad ligada a la presión en el trabajo — y pone en peligro la integridad física y mental de las personas. ¿Qué confianza ofrece un sistema sanitario que se quiere presentar como un lujo en lugar de un derecho universal? Para empezar, cierto número de medicamentos han quedado fuera ya de la Seguridad Social. Así las cosas, ni hablemos de las pensiones para los que ahora tienen menos de 30 años.

La precariedad en el trabajo influye también en el poder adquisitivo de los jóvenes que, incapaces de desarrollar su propio proyecto personal, alargan su partida de casa de la mano de una responsabilidad más que asumen las familias, por no mencionar los efectos negativos de la emancipación tardía. La percepción de posibilidades de futuro es un bastión fundamental en el desarrollo de las personas. Por tanto, no es de extrañar que casi el 70 por ciento de los jóvenes esté dispuesto a emigrar ante la falta de perspectivas laborales (Eurobarómetro, 2011). Hemos vuelto a la década de 1950.

¿Qué alternativas se entreabren entonces para esta generación? Expatriarse o continuar estudiando son dos de las opciones más socorridas. Pero, ¿suponen realmente una elección capaz de cambiar el rumbo de las cosas? Tenemos ya la generación más preparada y con más paro: exigirles que sigan estudiando parece una irresponsabilidad. Es a las instituciones a las que hay que empezar a exigir obligaciones para con la sociedad. En cuanto a la opción migratoria, aunque perfectamente comprensible, si bien supone un remedio instantáneo para el individuo, a largo plazo se descubre que tanto la sociedad de acogida como la de origen continúan presentando las mismas desigualdades e injusticias de las que hemos huido.

¿Por dónde empezar entonces? Replantear el paradigma empleado hasta ahora es una de las posibilidades. Es una falacia tratar de regresar al estado de las cosas anterior a 2007. Ni la

economía ni mucho menos el medio ambiente son capaces de sostener una fantasía como ésa. La rebeldía contra las oligarquías que pretenden someter al conjunto de la población es necesaria para comenzar a cambiar el presente. Hay que mirar a la cara a la realidad y enfrentarse a ella. Y los jóvenes sólo tienen que echar un ojo a su alrededor para darse cuenta de que las cosas no son como la tele las cuenta. De este modo sí que es posible transformar el futuro. Y en este sentido el 15-M puede desempeñar un papel fundamental.

Desde la transición no se producía en España un movimiento civil como el 15-M, capaz de sacar a la calle a millones de personas sin necesidad de líder alguno y sin intervención de los sindicatos. Un movimiento impulsado por la autonomía personal y la responsabilidad social. Si bien es verdad que, hasta ahora, la ausencia de adolescentes ha sido notable en las asambleas, quizás con los recortes en educación, que comenzarán a hacerse notar a partir de septiembre de 2012, los más jóvenes se sientan amenazados y decidan tomar parte en la acción colectiva. Dicen que la desafección política los corroe —la mayoría cree que las decisiones políticas no les afectan en su vida diaria y, a sus ojos, todos los políticos *catean*, con un 2,8 sobre 10— y que éste es el mayor de los males, pues la falta de una sociedad civil consciente y reivindicativa deja la puerta abierta a los abusos y desmanes de los diversos poderes. Pero la llave para hallar un nuevo paradigma está al alcance de esos jóvenes sin curro y sin casa, pero sin miedo.

CAPÍTULO 2
MUJERES, FEMINISMO Y 15-M

YAYO HERRERO[2]

Lejos queda ya aquel 19 de mayo de 2011 en el que alguien arrancaba en la Puerta del Sol de Madrid una pancarta que decía “la revolución será feminista o no será”, mientras desde la plaza se abucheaba a las mujeres que habían subido a colgarla y se aplaudía a quien la había retirado. Fue la única pancarta que se arrancó aquellos días.

Lo importante de aquel acto fue la reacción: se convocaron varios talleres de feminismo para principiantes a los que asistieron muchas personas. En ellos se intentó clarificar qué es el feminismo, se detectaron los conflictos y resistencias que existen hacia un movimiento que no se comprende, se comenzó a tender puentes y se hizo palpable el complejo camino que todavía hay que recorrer desde las estructuras patriarcales que empapan cada rincón de la sociedad hasta otro modelo en el que las miradas y prácticas de los diversos feminismos tengan encaje.

A pesar de las contradicciones, aquellos días se vivieron avances en las plazas. El lenguaje inclusivo se extendió con rapidez y las falsas fronteras entre el cuidado de los cuerpos y el trabajo político se disolvieron temporalmente. Estar al tanto de la comida y

la sed de otras personas, respetar el sueño o vigilar que la gente no se quemase con el sol convivían en el espacio y en el tiempo con el debate, la denuncia o la articulación de propuestas. Se rompía así, durante las acampadas, la dicotomía entre el espacio de lo público y el de lo privado.

Desde el 15 de mayo de 2011 hasta hoy, en diferentes ciudades y municipios, las comisiones de feminismo han ido presentando sus propuestas, que en muchos casos han conseguido influir en el trabajo de otras comisiones temáticas, como han sido las de economía o política. Las feministas indignadas del 15-M de Barcelona exponían los puntos fuertes en un manifiesto (http://revolucionmatriarcal.blogspot.com.es/2011/05/feministas-indignadas-del-15-M-en.html) coincidente, en buena medida, con los de otras compañeras en otros lugares del Estado.

Ese manifiesto está hoy más vigente que nunca. En él se postulaba una sociedad que situase en el centro el bienestar de las personas y no los mercados. Por ello, se reclamaban servicios públicos gratuitos como la educación, la salud y la atención y el cuidado a la infancia y a las personas con necesidades especiales; se pedía un compromiso social para eliminar la violencia machista en cualquiera de sus expresiones; se reivindicaba el derecho a decidir libremente sobre el cuerpo y a disfrutar de él con quien se quiera; se exigía aborto libre y gratuito, y educación afectiva y sexual, el respeto a las múltiples formas de vivir la sexualidad y la despatologización de las identidades *trans*.

Se destacaba la necesidad de incorporar una mirada feminista y un papel protagonista de las mujeres en la transformación del modelo económico y social, de modo que éste se pusiese al servicio de las personas y no destruyese el planeta que las sostiene. Se concedía un importante papel al reconocimiento de las tareas de cuidado de las personas. Se consideraba crucial que las trabajadoras domésticas tuviesen garantizados derechos laborales parejos a los de otros sectores profesionales. Y se reclamaba el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales. El manifiesto concedía mucha importancia, también, al reconocimiento de derechos ciudadanos a todas las personas y a la eliminación de

la Ley de Extranjería y de los centros de internamiento de extranjeros. Finalmente, se mencionaba la necesidad de repartir todos los trabajos —remunerados y no remunerados— y la riqueza.

Acometer estas propuestas es, un año después, mucho más urgente. Si cuando nació el 15-M se podía intuir la que se venía encima —extremo que por otro lado se venía anunciando desde algunos movimientos sociales y sectores del pensamiento crítico desde hacía mucho tiempo—, ahora nos encontramos de lleno en el principio de la aplicación de la doctrina del *shock*. Si el ataque a las condiciones básicas de la vida de las personas es feroz, la clase política que ejecuta los designios de los que se hallan detrás de esa enigmática etiqueta de *los mercados* se ha quitado la careta de lo políticamente correcto y asesta los golpes de una forma brutal y obscena.

Es preciso visibilizar que las mujeres son probablemente las mayores amenazadas por esta declaración de guerra a las personas. Además de verse afectadas como funcionarias, migrantes, dependientes, consumidoras o pensionistas, y en general como parte de los colectivos que sufren de modo directo los recortes, también sufren los ajustes en los lugares en los que no se ven, en aquellos lugares que, invisibles para el discurso económico, actúan como amortiguadores de la crisis social: los hogares. Cuando se eliminan las ayudas para cuidar a las personas dependientes —aunque en realidad dependientes somos todas las personas, sobre todo en algunos momentos de nuestro ciclo vital—, cuando las familias son desahuciadas de sus casas, cuando desaparecen los ingresos, son las redes familiares y los núcleos cercanos de convivencia los que acogen a todas esas personas precarizadas. Son los hogares los que se ocupan de aquellos a quienes expulsa el mercado y es allí en donde se trata de aliviar las tensiones sociales que provocan los recortes y el paro.

Y en los hogares están las familias, las corporaciones del patriarcado. En ellos, son las mujeres las que cargan con la mayor parte de las tensiones: buscan cómo ahorrar en la comida, reducen los gastos a costa de realizar más trabajos dentro del hogar, acogen a las personas de la familia que se quedan sin casa o empleo,

cuidan a los mayores cuando ya no cuentan con servicios públicos que los apoyen, complementan la renta doméstica con pequeños empleos fuera del hogar… Son trabajos invisibles que no cuentan en ningún lugar y que explican cómo es posible que la gente pueda seguir viviendo cuando el sistema les deja sin nada. Tal y como se señala en la campaña "Desmontando Mentiras", "para las mujeres, la desaparición del empleo y los recortes, lejos de dejarlas sin trabajo, lo multiplican de una forma insostenible. Aunque estén en paro, no paran" (http://revolucionmatriarcal.blogspot.com.es/2011/05/feministas-indignadas-del-15-M-en.html).

Este papel de las mujeres en los hogares es bien conocido por el capitalismo patriarcal. Por ello, no es casual el renacimiento de un añejo discurso de la domesticidad. Estamos asistiendo a un intento de volver a naturalizar las desigualdades y los estereotipos femeninos que responsabilizan en exclusiva a las mujeres del trabajo de cuidados, liberando a los hombres, al Estado y a la sociedad de asumirlos corresponsablemente. La tendencia a considerar la reproducción social y el cuidado de las personas como un asunto privado que se resuelve en el ámbito del hogar supone una regresión en el proceso de emancipación de las mujeres.

La noción de *ideología del género* que se ha comenzado a esgrimir con fuerza desde los ámbitos de la iglesia más conservadora contribuye a criminalizar el feminismo y cualquier pretensión de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, sobre la reproducción y sobre el papel que quieren desempeñar en la reproducción social. Según la historiadora Silvia Federeci, la caza de brujas en la edad media fue instrumental a la construcción de un orden patriarcal en el que los cuerpos de las mujeres, su trabajo y su capacidad reproductiva fueron colocados bajo el control del Estado y transformados en recursos económicos. Según Federeci, los cazadores de brujas, además de querer castigar cualquier transgresión específica, pretendían eliminar formas generalizadas de comportamiento femenino que no les eran funcionales y que debían resultar reprobables a los ojos de la población

(http://eljineteinsomne2.blogspot.com.es/2011/04/silvia-federici-la-globalizacion-y-la.html).

Hoy parece que la nueva brujería la encarna el movimiento feminista. Su pretensión de emancipación en términos de igualdad para todas las personas pone en riesgo una condición necesaria para que funcione el sistema económico en el marco neoliberal de los recortes actuales: que el imprescindible trabajo que permite la reproducción social sea realizado de forma no libre por las mujeres en los hogares.

Por ello, ante este proceso de ajuste el movimiento feminista, sus denuncias y propuestas, cobra una importancia enorme, no sólo para el bienestar de las mujeres, sino para el de todas las personas.

CAPÍTULO 3
LOS MAYORES Y EL 15-M

MARIANO ARAGONÉS GARCÍA[3]

Mi nombre es Mariano Aragonés. Y lo confieso: soy mayor. Soy parte de un problema. A 1 de julio de 2011, último censo de población consolidado del Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas mayores de 65 años —y hasta 103— éramos casi ocho millones. Según la proyección del INE para julio de 2012, ahora somos 8.105.920 quienes superamos los 65. Bastante más del 17 por ciento de la población española. Más que el segmento entre 0 y 14 años. Y esto, para la economía terrorista financiera, es un grave problema: consumimos poco, provocamos más gasto sanitario, generamos más gasto en servicios sociales. Eso es lo que opina la economía *oficial*.

El gasto en pensiones del Estado español fue en 2011 de 112.215,76 millones de euros. Para este año aumentará en un 4,3 por ciento, acercándose a los 116.000 millones. Esto para todo tipo de pensiones, contributivas y no contributivas, de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares. La cantidad en cuestión es el 9 por ciento del producto interior bruto, uno de los porcentajes más bajos de los países a los que España pretende equipararse. Como es bajo, en general, el gasto social. A

pesar de lo mucho que lloran los economistas neoliberales. Aunque ellos no cobren una pensión media de jubilación de 947,33 euros, ni una pensión media de viudedad de 801,98, ni una pensión media del conjunto del sistema de 830,51. Todas ellas, entre las más bajas de *nuestra* Europa.

Pero no somos un problema tan grande como para que el sistema colapse, como llevan años prediciendo estos economistas de pensiones —privadas— millonarias. El superávit de la Seguridad Social en junio de 2012 fue de 8.515.023 euros. Ciertamente, este superávit se ha visto reforzado por las transferencias contempladas en los presupuestos generales del Estado, a los que también contribuimos los pensionistas. Es conveniente saber que tales aportaciones se destinan al pago de las pensiones no contributivas, es decir, las de aquellas personas que no han cotizado, o no lo han hecho en cantidad suficiente, para tener derecho a una pensión *normal*. Personas que perciben las prestaciones más bajas.

¿Somos los mayores un problema? No lo éramos cuando teníamos un empleo remunerado y una parte de nuestro salario se difería para pagar las pensiones de los jubilados y de los incapacitados. El problema no somos nosotros. El problema son los practicantes de la economía de la avaricia.

La salud, en general, bien. Ha mejorado mucho desde que a disposición de los mayores se han puesto medios para practicar lo que se ha venido a llamar *envejecimiento activo*. Cuando la economía daba para la creación de centros municipales de mayores, para subvencionar actividades deportivas, viajes, estancias en balnearios, visitas culturales, conferencias, cursos universitarios, y otras actividades, además de para alimentar a la legión de corruptos que pululan por ayuntamientos y comunidades, y para dar satisfacción a los mercados financieros.

Practicamos, en un número significativo, un ocio creativo. Y algunos, por primera vez o de vuelta, hacemos estudios en la universidad. Unos pocos realizan cursos de grado, *carreras*, que se ha dicho toda la vida. Bastantes más están inscritos en los programas universitarios de mayores (PUM), que hace diez años se empezaron a impartir en las universidades públicas españolas.

Decenas de miles de mayores hemos pasado por ellos en toda España. Hasta ahora. Al menos en la Comunidad de Madrid, en la que vivo, los recortes en la enseñanza han llegado hasta los PUM, que el próximo curso ya no estarán subvencionados y no serán asequibles a los perceptores de pensiones más bajas. Y también han llegado al Imserso: a finales de julio de 2012, el Gobierno anunciaba un recorte del gasto en pensiones de 10.000 millones de euros, orientado, eso sí, a garantizar la sostenibilidad del sistema, y, cómo no, a reducir el déficit. Lo va a hacer a pesar del "gigantesco coste político" de la medida. Del coste humano no se acuerdan. Aún queda en pie la promesa de no tocar la cuantía de las pensiones. ¿Será la única que cumplan? De lo que sí estoy seguro es de que podemos decir adiós a las prestaciones del Imserso: a las clases de informática, a las de gimnasia de mantenimiento, a las estancias en balnearios, a las visitas a exposiciones, a las entradas asequibles a cines y teatros… Al envejecimiento activo, en suma.

Otra cuestión es la atención sanitaria. La reducción de personal, el cierre de camas o de plantas hospitalarias enteras, el de ambulatorios en zonas rurales, el de servicios de urgencias, la anulación de los servicios de ambulancias, el repago de los medicamentos, y otros muchos *ajustes* en un servicio social esencial. Ciertamente, éste es un problema de toda la ciudadanía. Nuestro, de los mayores, y de los hijos y nietos, lo que hace que nos indigne doblemente. Como doblemente nos indignan los recortes en enseñanza, desde la escuela infantil hasta la universidad.

Si somos una carga, también somos una solución. No hay datos concretos, pero la percepción general es que la solidaridad de los abuelos está permitiendo que muchas personas, especialmente las desempleadas, sobrevivan. Para muestra baste un botón: 84.000 familias extremeñas tienen como principal sustento la pensión del abuelo. Así lo demuestra un estudio realizado por la sección extremeña de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados.

Quiero destacar tres problemas que sufrimos los mayores, los más mayores, y a los que creo se les presta poca atención. El primero es la falta de residencias públicas, de precio asequible, para quienes no tienen capacidad económica para pagar una carísima

residencia privada. Un problema que afecta al conjunto de la familia, y que sufre especialmente el anciano o anciana. Entre 11 y 15 meses puede tardar la concesión de plaza en una residencia pública, según informa la página *web* solomayores.net. La espera se realiza a veces en una institución privada en la que se funden los ahorros de toda la vida. También se puede recurrir a una residencia ilegal, casi clandestina, y barata.

Y aquí salta una segunda cuestión: la de la alarma del descuido y de los malos tratos. Por las características del problema, se sabe de su existencia cuando hay una denuncia y las autoridades cierran un establecimiento. Tampoco hay datos sobre el maltrato que afecta a los más pequeños y a los más mayores en el seno familiar. Tan sólo se conocen los casos de maltrato denunciados en los centros de atención primaria o en servicios de urgencia, o por los vecinos de la familia maltratadora. Y no me olvido del maltrato a las mujeres, mucho más publicitado. Creo que éste es un problema, un drama, que el solidario 15-M, sobre todo las asociaciones de vecinos y las asambleas de barrio y de pueblo, debe debatir con más ahínco.

El tercer drama es el de la muerte de ancianos en soledad. De nuevo faltan datos de la generalidad del Estado. El diario *El País*, en su edición de 30 de abril de 2011, informaba de que “más de un centenar de ancianos han muerto solos en sus casas durante el último año”. La cifra es de la ciudad de Madrid, en la que vivían solas —informa también el reportaje— el 31 por ciento de las casi 180.000 personas de más de 80 años que entonces habitaban la capital.

Los mayores estuvimos desde el principio en la gestación del 15-M. Ya estábamos en las organizaciones de la sociedad civil que lo promovieron. En asociaciones de vecinos, en movimientos sociales, en sindicatos alternativos... Pero estábamos como ciudadanos, sin tener en cuenta cuestiones específicas. Ciertamente, éramos pocos en un movimiento que en general contaba con pocos efectivos. La presencia de mayores en el 15-M ha ido creciendo hasta hacernos claramente visibles en manifestaciones, asambleas generales y temáticas, de barrio y de pueblo, en asociaciones de vecinos… Incluso se han creado grupos

como Mayores por el 15-M, en Madrid, o los Yayoflautas, en varias comunidades del Estado. No —repito— para actuar sobre problemas exclusivos, sino para luchar, junto a nuestros hijos y nietos, por una sociedad en la que prime el bienestar —no confundir con el *Estado del bienestar* capitalista— de todas y cada una de las personas que la componemos, y por el respeto por el planeta Tierra.

CAPÍTULO 4
AUSENCIAS SILENCIOSAS: LA INMIGRACIÓN EN EL 15-M

ÁNGELES RAMÍREZ[4]

La inmigración tiene una modesta presencia en el 15-M. Como sujetos, los y las inmigrantes —se entiende que de origen extranjero y pobre— no tienen una gran presencia en el 15-M y como objeto la inmigración no ha formado parte de las preocupaciones principales del movimiento. Las personas inmigrantes parecen habitar un mundo ajeno a la militancia y el activismo de las asambleas populares. En este sentido, el 15-M ha tendido a reproducir las (no) relaciones de los movimientos sociales con la población inmigrante, ya que la temática de la inmigración se hace apenas presente en reductos concretos y coyunturales.

Comencemos por la reconstrucción de los debates sobre inmigración en el 15-M. Al contrario de lo que ocurre con economía o acción política, que fueron objeto de comisiones o de grupos de trabajo desde el primer día, la inmigración no ha disfrutado de ese lugar. Este vacío es evidente tanto en las redes sociales convencionales como en las alternativas. Incluso las comisiones de diversidad funcional parecen ser más frecuentes y activas. En

Valencia se creó una comisión de migración, centrada en la lucha contra el racismo institucional, de la que pronto se pierde el rastro; en Sevilla, la Plataforma contra la Violencia Institucional hacia los inmigrantes terminó por desembocar en la creación de una comisión de inmigración permanente, dentro del 15-M, de la que no hay más datos. Las comisiones o grupos de trabajo sobre inmigración son muy escasas y, cuando existen, reflejan muy poca actividad. Incluso en contextos que incorporan en los últimos años un volumen importante de población inmigrante y que cuentan con una larga tradición de activismo ciudadano, la inmigración encuentra dificultades para ser tratada como asunto de interés o para que las y los inmigrantes participen en las diferentes acciones. En otro nivel, tampoco las asambleas generales, como el encuentro transversal de julio de 2012, incluyeron la inmigración en sus discusiones. Como excepción hay que señalar la asamblea de Lavapiés, en Madrid, que a partir del grupo de trabajo relativo a migración y convivencia, se ha interesado fundamentalmente por la denuncia de los abusos de que son objeto las personas inmigrantes por parte de la policía. La explicación de este tipo de activismo está no sólo en la invasiva presencia policial en este barrio, sino en la acción de movimientos previos al 15-M.

Muchas personas que militan en el 15-M aducirían que no es necesario trabajar desde un grupo específico, ya que las cuestiones migratorias son de índole transversal. Sin embargo, otros planteamientos relativos a la igualdad también lo son, como la diversidad funcional o de género, y su trabajo desde comisiones concretas se percibe como razonable tanto en aras de una mayor sistematicidad en la conceptualización como de su proyección en acciones directas desde la propia asamblea. El riesgo de la condición de transversalidad de una materia es que puede conducir a que, a la larga, nunca se hable de ella.

En el 15-M la inmigración ha tendido a representarse como una situación de injusticia social generadora de una serie de problemas urgentes que requieren también, a su vez, de acciones rápidas, como la elaboración de los protocolos antirredadas, la presión para exigir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros

después de muertes dramáticas o la movilización para evitar los desalojos en asentamientos de inmigrantes. Las mujeres inmigrantes, especialmente, han estado presentes como víctimas de los desahucios que el 15-M, junto con Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha conseguido parar. La inmigración aparece también vinculada a las discusiones sobre servicios sociales, reproduciendo la imagen de las y los inmigrantes como personas asistidas y dependientes. La explicación al hecho de que la inmigración en el 15-M no se manifieste como objeto relevante fuera de estos estereotipos debe buscarse en la propia naturaleza del movimiento, que con frecuencia incorpora a personas que se integran por primera vez en grupos activistas y asumen las ideas sociales dominantes. Desde esta perspectiva, hay resistencias a la elaboración de un discurso crítico que ponga en cuestión las construcciones que consideran a los inmigrantes exclusivamente como víctimas de la violencia o clientela de los servicios sociales. En general, lo mismo podría decirse de las comisiones de feminismo y sus dificultades para consolidarse en el ámbito del 15-M. Pero, a diferencia de éstas, la inmigración no ha contado con activistas que trabajen la necesidad de situar en primer plano la cuestión.

Ello nos lleva a la segunda parte de la reflexión, que se pregunta por la invisibilidad de las personas inmigrantes como sujetos del 15-M, es decir, como integrantes de las asambleas. Hay varias razones. La primera es la fundamental y radica en su condición de clase: la población trabajadora autóctona más precaria, y no movilizada previamente, tampoco está presente en las asambleas, conformadas por personas de clases medias. Ello explicaría la presencia de *otro tipo* de población inmigrante procedente de Chile o Argentina, de grupos sociales que no son los mayoritarios en la inmigración y que incluso adquieren protagonismo en momentos determinados. Las nuevas formas de colaboración y participación, especificidades del 15-M, como bancos de tiempo, cooperativas de consumo o huertos comunales (CSA), surgen de las demandas y el universo cultural de las clases medias urbanas y neorrurales, y son de momento impensables entre las clases trabajadoras, incluidas las personas inmigrantes.

La segunda razón de esta ausencia viene dada por las escasas relaciones que inmigrantes y población autóctona mantienen fuera de los ámbitos institucionales de encuentro. Sin embargo, hay algunas excepciones de participación de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en movimientos activistas previos al 15-M, como la iniciativa de Territorio Doméstico que, dentro de Eskalera Karacola, aglutina a algunas trabajadoras extranjeras en el servicio doméstico en Madrid.

La tercera razón es que, a diferencia de otras minorías, no hay redes asociativas importantes que propongan un debate sobre la inmigración en el 15-M. De hecho, es poco habitual que las asociaciones de inmigrantes mantengan lazos permanentes con los movimientos sociales, lo cual no impide que haya relaciones con foros sociales o plataformas proderechos humanos.

Un cuarto motivo remite al hecho de que el 15-M está fuertemente basado en las redes sociales construidas en internet, del tipo que sean. Ello impide que haya una participación directa de muchas personas que no tienen acceso a la red, lo que puede ser el caso de una buena parte de la población inmigrante. Por todo lo dicho, la participación de las temáticas de inmigración en la gestación y el desarrollo del 15-M no ha sido relevante hasta el momento, como tampoco lo ha sido la integración de las personas inmigrantes en las asambleas.

¿Cómo podemos trabajar entonces? Conceptualmente, hay que tender hacia una reflexión que integre los procesos migratorios como un pilar fundamental del proyecto de sociedad neoliberal, y no como un subproducto. Debemos trabajar desde la idea de que las migraciones, tal y como se construyen en las sociedades neoliberales, tienen un papel central en los procesos de segmentación social, de represión de las resistencias, de precarización del trabajo asalariado, de legitimación de la explotación, de refuerzo del patriarcado y de control y disciplinamiento de las poblaciones. Sobre lo último hay ejemplos bien concretos, como la imposición en Europa de normas vestimentarias a las mujeres musulmanas por parte de diversos gobiernos estatales y autonómicos; esa imposición termina creando

la idea de control para toda la población musulmana y para todas las mujeres. El único modo de eludir simbólicamente este control es separándose mentalmente de las mujeres —en el caso de los hombres musulmanes— y de las personas musulmanas —en el caso de las autóctonas—.

Por último, la hasta ahora escasa participación de inmigrantes en el 15-M obliga a llamar la atención sobre la ausencia de otros grupos que tampoco comparten el imaginario de las clases medias (asalariadas) que conforman el grueso del movimiento. La vocación inclusiva del 15-M deberá conducirnos a trabajar con otras estrategias políticas más clásicas de construcción de alianzas para seguir contribuyendo a recortar distancias entre los grupos sociales que comparten los mismos problemas y fortalecer las resistencias. Ése tiene que ser nuestro reto de cara al futuro.

CAPÍTULO 5
A VUELTAS CON EL ESTADO DEL BIENESTAR: ESPACIOS DE AUTONOMÍA Y DESMERCANTILIZACIÓN

CARLOS TAIBO[5]

En el prólogo de este libro ya he señalado que, si así se quiere, en el 15-M, y en el momento presente, se aprecian dos grandes posiciones. La primera entiende que la mayor prioridad del movimiento debe estribar en formular propuestas en la confianza de que serán escuchadas, en un grado u otro, por nuestros gobernantes. La segunda considera, en cambio, que el 15-M debe depositar el grueso de sus energías en la tarea de construir espacios de autonomía en los que procedamos a aplicar, de la mano de una activa desmercantilización, reglas del juego diferentes de las que se nos imponen.

Las dos posiciones reseñadas suelen traducirse en interpretaciones diferentes en lo relativo a lo que debemos hacer con una institución, el Estado del bienestar, que se encuentra en el núcleo de muchas de las preocupaciones del 15-M. No se olvide que en las discusiones que el movimiento mantiene se hallan comúnmente presentes materias tan sensibles como la sanidad, la

educación, el desempleo o las pensiones. La primera de las percepciones que se hace valer en relación con el Estado del bienestar señala que la prioridad del movimiento debe consistir, sin más, en apuntalar la preservación de aquél o, lo que es casi lo mismo, en oponerse a privatizaciones y recortes, y garantizar al tiempo la permanencia de los servicios correspondientes. La segunda asume, en cambio, una lectura crítica de los Estados del bienestar y plantea horizontes acaso más ambiciosos.

Tiene sentido que preste atención aquí a la segunda de las percepciones que acabo de glosar. Ya he señalado que desde esa atalaya se formula una crítica general de lo que los Estados del bienestar han supuesto en la segunda mitad del siglo XX en la Europa occidental (fuera de ese ámbito geográfico no hay, por cierto, manifestaciones del fenómeno que nos ocupa). Con esa vocación se señala que son instituciones propias, y exclusivas, del capitalismo; se subraya que acarrean mecánicas de delegación del poder, y de decisión sobre los recursos, que escapan a cualquier lógica autogestionaria y de control popular, y que colocan siempre al Estado en el centro; se llama la atención sobre su relación con formas de sumiso sindicalismo de pacto como el que han avalado entre nosotras CC OO y UGT; se anotan sus inequívocos vínculos con una economía de cuidados cuya carga negativa recae de manera abrumadora sobre las mujeres; se plantean dudas severas en lo que se refiere a su sostenibilidad ecológica, y, en suma, se recuerda que son modos de organización económica y social característicos de los países del Norte, sin que puedan identificarse rasgos que revelen una vocación de solidaridad con los habitantes de los del Sur.

Una vez que se enuncian esas críticas, salta a la vista un problema no precisamente menor: si, por un lado, no sería muy saludable que esquivásemos lo que nos dicen, por el otro hay que atender de forma cumplida las demandas, lógicas, que plantean las personas en materia de sanidad, educación o pensiones. No podemos decirle a un anciano, por ejemplo, que, como quiera que estamos empeñadas en construir un ambicioso programa de comunas libertarias, debe renunciar a su pensión y al ambulatorio

de la Seguridad Social. La principal respuesta que, dentro del 15-M como en muchos circuitos fuera de él, se ha formulado ante este problema ha consistido en la defensa de una sanidad y de una educación públicas *autogestionadas* y *socializadas*. Aunque esa respuesta implica una encomiable conciencia de que el problema existe, admitamos que no acierta a resolverlo de forma cabal. Ello es así ante todo por una razón fácil de identificar: la lógica de la autogestión y de la socialización casa muy mal con la del Estado, y ello da pie a contradicciones acaso insorteables.

Procuraré, de cualquier modo, una discusión más pegada al suelo. Hoy por hoy las demandas de preservación del Estado del bienestar chocan, entre nosotras, con dos escollos principales. El primero lo aporta lo que parece una lamentable ilusión óptica: la de que podemos volver a 2007, a la situación anterior a la del estallido de la crisis financiera, en abierta ignorancia —por eso hablo de una ilusión— de que lo que tenemos ahora es una consecuencia lineal de lo que teníamos entonces. Esto al margen, en un movimiento como el 15-M parece de razón concluir que la mayoría de las gentes piden algo más que la mera reconstrucción de un capitalismo presuntamente regulado. El segundo escollo nace de una pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo disponemos para reenderezar las cosas en el ámbito de la sanidad, la educación o las pensiones, tanto más cuanto que la reconstrucción del Estado del bienestar reclama el concurso, en lugar central, de partidos, parlamentos e instituciones que no parecen estar por la labor o, para decirlo mejor, que respaldan, con descaro o sin él, privatizaciones y recortes? Si asumimos una respuesta que no va más allá de lo que pueden aportar partidos, parlamentos e instituciones, ¿no nos veremos condenadas a aceptar un escenario en virtud del cual nuestro Estado del bienestar será, pese a nuestras buenas intenciones, aún más raquítico en sus prestaciones de lo que lo ha sido siempre?

En el escenario que se perfila alrededor de esos dos escollos, la defensa de la construcción de espacios de autonomía desmercantilizados se antoja, curiosa y paradójicamente, más hacedera, inmediata y práctica. Estoy pensando en lo que significan estructuras e iniciativas que ya existen, y de las que se ocupan, por

cierto, algunos de los textos incluidos en este libro. Hablo, por lo demás, de fórmulas en las cuales muchas de las activistas del 15-M se hallan cada vez más claramente implicadas: los grupos de consumo que han proliferado en muchos lugares; las cooperativas integrales que, con perfiles eventualmente singularizados, van surgiendo por doquier; las ecoaldeas y otros proyectos similares; las iniciativas de construcción, desde abajo, de formas de banca ética y social, o, por dejar aquí una lista que podría ser mucho más larga, el incipiente movimiento que apunta a propiciar la autogestión, por los trabajadores, de muchas de las empresas que están al borde del cierre. En todos estos casos se aprecia un esfuerzo encaminado a crear estructuras horizontales en las que los principios de socialización, autogestión y desmercantilización, vitales, atienden a la satisfacción de muchas de las prestaciones que dispensa —o dispensaba— el Estado del bienestar (y a otros muchos propósitos, naturalmente). Por detrás es fácil adivinar a menudo, claro, el ascendiente de un proyecto general que tiene presencia sólida en el 15-M: el que concibe éste como un movimiento que en todos los órdenes de la vida propone la perspectiva de la asamblea y de la autogestión para hacer frente al capitalismo desde la atalaya de la conciencia antipatriarcal, la lucha antiproductivista y la solidaridad internacionalista.

Vuelvo, con todo, al principio, y lo hago de la mano del propósito de subrayar que las dos opciones que se revelan dentro del 15-M no sólo remiten a objetivos y métodos diferentes: se materializan también, en última instancia, en proyectos organizativos distintos. Mientras en el primer caso —el de un movimiento que en sustancia aspiraría ante todo a influir sobre otros— la realidad en la que se concreta no es sino un instrumento al servicio de un proceso que debe discurrir fuera de él, en el segundo —el de los espacios de autonomía desmercantilizados— esa realidad se convierte, de la mano de la asamblea, de la democracia directa y de la autogestión, en un objeto que, con vida propia, cabal y autosuficiente, no precisa de representaciones externas. De cara al futuro, y por su condición de demostración de que es posible hacer las cosas de forma

diferente, parece que esta última es, también por su dimensión pedagógica, una apuesta más inteligente.

Aunque no son estrictamente incompatibles, las dos posiciones que acabo de mal retratar mantienen disonancias cognitivas y emocionales que no creo sean menores. Acataré sin problemas, aun con todo, que tienen un largo camino común que recorrer y que, por ello, pueden coexistir de manera llevaderamente fructífera. Valga un ejemplo de lo que quiero decir: dentro del 15-M son muchas las personas que no sienten entusiasmo alguno por una propuesta, la que reclama una reforma de la ley electoral, que con toda evidencia se sitúa en el terreno de la primera de las posiciones que he identificado. No sentir entusiasmo por ella en modo alguno supone que se cierren los ojos ante la injusticia lacerante de la ley electoral en vigor. Así las cosas, si alguien pide el apoyo de esas personas para reclamar una reforma de esa ley, no hay mayor motivo —parece— para negarlo. Ese respaldo debe tener, bien es verdad, su contrapartida: como quiera que no hay ninguna razón para concluir que quienes reivindican reformas en la ley electoral son hostiles a la creación de esos espacios de autonomía a los que me he referido con insistencia en este texto, lo suyo es que se demande de esas gentes que en modo alguno dejen de lado la tarea correspondiente. Tiempo habrá para discutir, en suma, cuál de los dos proyectos que perviven tiene más sentido.

CAPÍTULO 6
LA SANIDAD FRENTE A LAS AGRESIONES

MARTA JIMÉNEZ CARRILLO[6]

Hasta ahora el Sistema Nacional de Salud (SNS) español era reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el séptimo mejor del mundo. Se decía que nuestro sistema sanitario era *barato*, ya que el gasto público correspondiente resultaba inferior a la media de los países europeos y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ofrecía, por añadidura, una cartera de servicios de las más amplias del mundo, con cobertura universal.

En el momento actual, España se encuentra en una situación de gran endeudamiento público (cabe recordar, eso sí, que un gran porcentaje de esta deuda pública corresponde a bancos y empresas privadas): la deuda de nuestro SNS asciende a 17.000 millones de euros, aunque no hay datos oficiales por parte del Gobierno y las comunidades autónomas, ni información sobre el origen del gasto excesivo.

De ello se deduce que uno de los principales problemas y retos, no sólo para la asamblea de salud del 15-M, sino para el movimiento en conjunto, es luchar contra los efectos que la nacionalización de la deuda privada tiene en materia de recorte en servicios públicos

básicos, a la par de informar a la ciudadanía de las razones y origen de dicha nacionalización. Como dice el economista chileno Manfred Max-Neef, “la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía”.

En abril de 2012 el Gobierno español presentó, con la justificación de la crisis económica, el Real Decreto 16/2012 —cabe recordar que es una ley dictada desde el poder ejecutivo y firmada por el rey, pero que no pasa en ningún momento por el parlamento —, que modifica de raíz nuestro SNS y sus principios de universalidad, gratuidad y financiación pública, y otorga prioridad al mero ahorro económico cortoplacista. En ese real decreto se redefine el papel de asegurado, expulsando del sistema sanitario —salvo en caso de salud materno-infantil, de menores de edad o de situaciones de urgencia— a las personas inmigrantes en situación irregular y a jóvenes mayores de 26 años que no hayan cotizado a la Seguridad Social (a menos que presenten certificado de pobreza, con lo que la sanidad deja de ser un derecho recogido en la Constitución para convertirse en una forma de caridad).

El proceso de privatización que tuvo su origen en la aprobación de la Ley 15/1997 es ahora más importante que nunca. Por ofrecer un ejemplo, la Comunidad de Madrid ha aumentado un 34 por ciento el presupuesto para convenios con el sector sanitario privado, y ha disminuido un 1,5 por ciento el de los hospitales con gestión tradicional. Como quiera que parece demostrado que el coste por cama/año es más barato en los hospitales de gestión pública, esta medida no tiene justificación en términos económicos. ¿Por qué, entonces, se lleva a cabo? ¿Por qué la Comunidad Valenciana ha decidido ceder la gestión de todos sus hospitales a empresas privadas, argumentando que supondrá un ahorro económico? ¿Un ahorro para quién? ¿Cuál es el coste-oportunidad: dejar de invertir en sanidad para invertir en… Eurovegas, Bankia? ¿Qué evidencia hay de que todo esto sean soluciones basadas en la búsqueda de una sanidad más eficiente y, también, de mayor calidad?

Respecto al de siempre existente copago de los medicamentos, ahora se impone a los pensionistas un aumento del porcentaje que hay que abonar por fármaco. Las cifras estimadas, por parte del

propio Gobierno, en lo que se refiere al ahorro derivado de esta medida identifican una reducción del 1 al 1,5 por ciento del total del gasto farmacéutico anual. ¿Puede justificarse la medida para un porcentaje de ahorro irrisorio verificado a costa de los enfermos? ¿No sería más lógico impulsar campañas para un uso racional de los medicamentos al que se sumase una prescripción responsable por los médicos? El copago no consigue sus fines recaudatorios ni disuasorios, y además crea dificultades de acceso a los sistemas sanitarios para las personas más vulnerables, con un aumento de la mortalidad y la morbilidad por efecto de un retraso del momento de acceso a los servicios sanitarios, como evidencian los estudios que relacionan el nivel socioeconómico y el de salud. Por último, el establecimiento de una cartera de servicios comunes básica y otra accesoria, que está aún por definir a qué procesos afectará, implica en los hechos que por algunos tratamientos o diagnósticos, o incluso por algunas consultas, habrá que pagar.

Ante esta desoladora situación de mercantilización de la salud, y dada la gran preocupación ciudadana por el sistema sanitario que confirman el buzón de propuestas instalado durante la acampada de Sol y las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, la asamblea de salud del 15-M, lejos de hundirse en el pesimismo, la desesperación y el miedo, aboga por la unidad, la esperanza, el análisis objetivo, la equidad, la justicia y la cohesión social.

Esta llamada a la unidad se ha plasmado en una enriquecedora confluencia de luchas de diversos colectivos e individuos: estudiantes de medicina, SOSPública, plataformas de la salud, organizaciones no gubernamentales, homeópatas... Todos tienen claro que la defensa de una sanidad pública, sostenible y de calidad debe ser continua y conjunta, con organización de campañas de *desobediencia ciudadana* frente a la reforma sanitaria, enfocadas a la concienciación en lo que respecta al verdadero alcance de la reforma, así como a la articulación y visibilización de la *objeción de conciencia de los profesionales*. Otro ejemplo de lo que el 15-M quiere hacer para informar a la ciudadanía y hacerla partícipe de la lucha por la sanidad pública lo ofrecieron las jornadas que la

asamblea de barrios de Madrid montó para reflexionar colectivamente con el título “La salud que queremos”. Esas jornadas se han visto acompañadas de concentraciones frente a centros de salud y hospitales, con reparto de información sobre la reforma y sus consecuencias, y con un largo etcétera cargado de creatividad, ganas y esfuerzo.

A partir de los diversos colectivos sociosanitarios partícipes en la asamblea de salud del 15-M se defiende un SNS con *cobertura universal*, con derecho a la atención sanitaria integral de todas las personas que residen en nuestro país y con *acceso gratuito* basado en una financiación con progresividad real mediante el pago de impuestos, y no a través de fórmulas que supongan un castigo para quien más enferma. Un sistema con una *participación ciudadana real*, informada, corresponsable y con capacidad decisoria. La *salud depende consustancialmente de nuestras condiciones de vida* —vivienda, alimentación, condiciones laborales, sistema educativo y de apoyo social...—, por lo que “si los principales determinantes de la salud son sociales, sociales deben ser las soluciones”.

Se defiende un modelo sanitario eficiente, basado en la atención primaria y en la prevención y promoción de la salud, con un uso racional de medicamentos y de tecnologías sanitarias según criterios científicos y de preferencias del paciente, y no según las presiones de la industria y los mercados, evitando la sobremedicalización en problemas de origen psicológico o social. Se propone al tiempo la creación de agencias evaluadoras, totalmente independientes, para fármacos y tecnologías sanitarias (HispaNICE). Se reivindican también la despolitización de la gestión y una profesionalización de ésta, haciéndola más clínica e instaurando concursos abiertos y sistemas de evaluación periódicos que mejoren la selección de los cargos directivos. Todo ello en el marco de una cultura asistencial orientada hacia el paciente y fundamentada en el trabajo en equipo interdisciplinar, con una mayor coordinación de los distintos niveles asistenciales. Se solicita, en paralelo, la derogación de la Ley 15/1997, que permite la gestión privada de los centros públicos. Se reclama el fomento de las redes de salud mental, apoyo social y drogodependencia, y de los centros

de día y de mayores, de tal manera que se coloque en el centro la vida en comunidad. Se defiende, en suma, el derecho a una muerte digna, con respeto absoluto a la voluntad y autonomía del paciente y consideración de la familia. Por todo ello, y de resultas de la imposición por real decreto urgente de unas medidas que modifican hasta seis normas legales básicas en una materia reserva de ley como es la salud, de tal forma que se choca con el código ético de los profesionales sanitarios, se exige la derogación del Decreto 16/2012.

Es importante recordar que la defensa de una buena sanidad no debe quedarse aquí. Debe abordar también la creación paralela de espacios autónomos de autogestión de la salud que otorguen prioridad a estilos de vida saludables y decrecentistas. Esos estilos de vida producirán *per se* una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. La generación de los espacios de los que hablo debe permitir una reflexión colectiva que se interese por materias como el origen de los recortes en derechos básicos —la salud, la educación — o los mecanismos de mejora de la calidad y universalidad de nuestro sistema nacional de salud, a través de una mayor transparencia de la gestión pública, de modelos de evaluación de la calidad centrados siempre en las personas y no en la mera obtención de beneficio económico, o de consultas en las calles y las plazas, herramientas todas para desmontar mentiras y construir una sanidad más sostenible, interdisciplinar y horizontal, y, por supuesto, más pública.

CAPÍTULO 7
LA EDUCACIÓN, PUNTA DE LANZA DE LOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS

ÁNGELES DÍEZ RODRÍGUEZ[7]

El grupo de educación del 15-M de Madrid surgió casi el primer día de la concentración y acampada en la Puerta del Sol. Se creó con profesores de Secundaria. Después nos fuimos sumando los universitarios, algunas activistas de la plataforma 0-6 años, profesores vinculados a los movimientos de renovación pedagógica, padres y militantes de organizaciones defensoras de la laicidad. Durante junio y agosto de 2011, la agresión de las comunidades autónomas, especialmente la de Madrid, a la escuela pública, los fastos de la visita papal y la parálisis de los sindicatos mayoritarios prendieron el germen de lo que en septiembre fue la *marea verde*, cuya fuerza no puede entenderse sin el 15-M. Las formas de hacer, los objetivos y las propuestas que durante unos meses se fueron fraguando en asambleas, discusiones y documentos han ido contaminando, reactivando y generando movimientos asamblearios en todo el campo educativo.

El grupo de educación ha sido el más homogéneo del 15-M, el que más vínculos ha establecido con las organizaciones y activistas

del sector, y el que ha permanecido con más constancia en sus reuniones. Pero, al igual que ha pasado con el resto de los grupos, parece haberse diluido en los barrios. ¿Qué ha ocurrido? ¿Desaparecerán los grupos de educación, junto con el resto de grupos y asambleas, quedando reducidos a reuniones testimoniales? ¿Cuál es el futuro probable? ¿Y el posible?

El movimiento del 15 de mayo se alza sobre la desafección a los partidos, a las formas de organización tradicionales y al uso de la violencia. Además, comienza en positivo, como un estallido de debates, conversaciones, relaciones no mercantilizadas, solidaridad, inclusividad… Aparece como la realización de una fantasía —la utopía de otra forma de vida fuera del capitalismo—, como una satisfacción sustitutiva: nos reunimos, hablamos, proponemos, acordamos, ocupamos plazas y calles, actuamos como si viviéramos en otro mundo. Como una forma de protección contra la angustia: no estamos solos. Como una forma de compromiso: nadie obliga a nadie y cada uno aporta lo que puede. En el 15-M no se milita, se forma parte. Todos estos rasgos y la dificultad de encuadrarlos en alguna teoría me llevan a proponer un análisis psicoanalítico: *quizá el 15-M no sea un movimiento social, sino un síntoma*. Cada uno de los grupos y asambleas que le dan vida se asemeja a la conceptualización freudiana de síntoma: huella de la memoria, marca que deja un trauma. La historicidad que nos permite entender el 15-M como un síntoma que trata de construir la posibilidad revolucionaria se remonta al proceso que eclosionó al tiempo que la guerra civil y que fue cercenado por el fascismo. Este trauma marcó el inconsciente colectivo y la reparación no se produjo con la transición. Aunque ésta trató de enterrar el pasado a fuerza de torcer el brazo de la memoria, la huella de lo que pudo llegar a ser y no fue —la revolución— emerge en el momento en que confluyen crisis económica y crisis política. En tanto que síntoma, el 15-M surge negando la normalidad del sistema político español y en esa medida entiende la transición como una anomalía: sin proceso constituyente, con una jefatura del Estado hereditaria, con pactos político-económicos preconstitucionales, con la educación

subordinada a las exigencias de la Iglesia, con el acatamiento de las estructuras económicas y militares internacionales (UE, OTAN), etc.

Las asambleas del 15-M se han comportado desde el primer día *como si*. Como si legislaran, como si tomaran decisiones. Como si de ellas dependiera sentar las exigencias mínimas para un sistema democrático aún inexistente. Se ha discutido sobre la nacionalización de la banca, sobre las desigualdades sociales. Se han realizado debates sobre el estado de la nación y se han recogido miles de propuestas sobre todo lo que concierne a la vida en común. Las propuestas aprobadas por consenso han sido el punto de partida de un proceso constituyente no formalizado. Todas y cada una de ellas, desde las más concretas a las más abstractas, han trazado surcos en el camino de la reparación de deudas históricas con los desposeídos. Se inició un proceso de conexión con el pasado republicano en su vertiente revolucionaria —autoorganización, autogestión, asamblearismo, democracia…— y, como entonces, la educación es la punta de lanza, un bastión que hay que defender.

En los procesos revolucionarios la educación ha sido siempre piedra de toque. El bienio azañista de la segunda república se caracterizó en este terreno por su progresismo, que provenía de una visión ilustrada según la cual bastaba con transformar la educación para transformar la sociedad. Las propuestas pasaron por dignificar la figura del profesor, por la laicidad y por la defensa de la escuela pública gratuita como garante de la igualación de clases. La impronta anarquista otorgó al proyecto una visión revolucionaria centrada en la pedagogía y la formación obrera. Aunque el franquismo liquidó los avances de la segunda república, el de la educación fue uno de los sectores en los que las resistencias fueron mayores. Los conflictos estudiantiles antes de la muerte del dictador, durante la transición y en la década de 1980 dan cuenta de los lastres de todos los proyectos de reforma. Durante las últimas décadas la mayoría de los partidos y organizaciones sindicales han tratado de instrumentalizar la educación, conscientes de que de ella depende la formación de sus bases sociales, pero también de que la batalla por la educación ha sido un fiel reflejo de la lucha de clases.

En el recorrido del grupo de educación ha habido tres momentos clave. El primero se produjo cuando el *espíritu del 15-M* contaminó las asambleas de las escuelas de Secundaria, anticipándose a los sindicatos mayoritarios y entrando en conflicto con ellos. El segundo se verificó cuando a través del "debate sobre el estado de la educación" se hizo un diagnóstico que puso en conexión las problemáticas del sistema en todos los niveles educativos, especialmente la transferencia de fondos públicos a la educación privada. El tercero se registra ahora, cuando se plantea el problema de la identidad del grupo y del papel que debe cumplir en el 15-M y en la sociedad.

Aunque las aportaciones del grupo de educación han alimentado al 15-M y al proceso revolucionario, nos encontramos todavía en una fase inicial: la de la resistencia. Podemos sintetizar así esas aportaciones: (a) *contaminación de las luchas*: han surgido nuevas organizaciones que han recogido el testigo de nuevas formas de pensar y hacer; algunas organizaciones tradicionales se han visto obligadas a repensar sus prácticas; (b) los grupos de educación han hecho *aflorar las contradicciones* ideológicas, al plantear los debates sobre escuela privada/escuela pública y adoctrinamiento/laicidad; (c) se han *puesto en común diagnósticos* que durante años se han realizado de forma parcelada y sectorial, y se han trasladado al conjunto de la sociedad, consiguiendo una mayor implicación de padres, maestros y alumnos; (d) se han *trasladado conocimientos sobre el estado de la educación* de unos sectores educativos a otros.

La potencialidad revolucionaria del proceso abierto por el 15-M, y en concreto por los grupos de educación, pasa por: (a) la capacidad para establecer prioridades de forma que éstas sean aceptadas por todos los movimientos, plataformas y organizaciones educativas. La renovación pedagógica es importante, pero no es lo urgente en estos momentos: sólo puede ser el resultado de alcanzar el poder suficiente para instaurar un nuevo modelo educativo que pasa necesariamente por salvar la escuela pública; (b) no desvincularse del proceso inicial, es decir, retomar el vínculo con otros grupos y comisiones del movimiento, y reagruparse en los

barrios volcando a las asambleas el trabajo ya realizado; (c) primar la conexión de todos los niveles educativos en el horizonte de un modelo en el que las propuestas tengan un eje articulador; (d) nutrirse del trabajo ya hecho por grupos y movimientos que han resistido la debacle liberalizadora (grupos laicos, plataforma 0-6, movimientos de renovación pedagógica, asambleas *anti-bolonia*); (e) no quedar atrapados en la lógica del enfrentamiento sindical: la lucha no es contra los sindicatos, aunque para llevarla a cabo no quede más remedio que enfrentarse a ellos; (f) encontrar la forma de ser, como al inicio, punto de encuentro y lugar para trazar estrategias, huyendo de la tentación de convertirse en una sigla más; (g) trabajar la conexión intergeneracional: los profesores y maestros que lucharon en la transición por una educación pública, laica, universal y democrática tienen mucho que aportar a la frescura y creatividad de los jóvenes padres y maestros, y (h) continuar *desvelando mentiras* y trasladándolas al conjunto de la sociedad, asumiendo así una misión pedagógica clave de todo proceso revolucionario.

Un proceso como el abierto por el 15-M y sus asambleas ha de seguir transitando por el desvelamiento de las lógicas de dominación capitalista en todos los ámbitos, y especialmente el educativo. Y ha de ser capaz de establecer prioridades y articular resistencias. Todo ello al tiempo que sienta las bases de un nuevo modelo que, en educación, ya tiene puestos los pilares fundamentales gracias a la historia de los movimientos y luchas por la educación pública, y gracias al vínculo entre estas luchas y la historia revolucionaria.

CAPÍTULO 8
EL DERECHO A LA VIVIENDA DEL 99 POR CIENTO

ADA COLAU[8]

En una apuesta por un crecimiento fácil, rápido y cortoplacista, España se entregó durante años a la fiesta del ladrillo. Aunque se produjeron más viviendas que en Alemania, Italia y Francia juntas, esa sobreproducción no significó que la vivienda fuera más accesible: al contrario, los precios no dejaron de subir, haciendo que España fuera uno de los países de la Unión Europea donde acceder a la vivienda resultaba más caro. Dos elementos clave explican esta paradoja: por un lado, tipos de interés bajos y liberalización del crédito; por otro, la posibilidad de mantener millones de viviendas vacías esperando a especular con ellas sin penalización alguna. Fruto de este modelo, el Estado propició la confusión del derecho a la vivienda con el derecho al crédito e impulsó la propiedad privada más allá de límites razonables a través del sobreendeudamiento de buena parte de la población.

Durante años la ciudadanía escuchó un único mensaje: el precio de la vivienda nunca baja. Las ministras correspondientes lo repetían una y otra vez, y lo respaldaban con unas políticas fiscales

que desgravaban únicamente por compra, con una política de suelo que incentivaba la especulación, con una liberalización del alquiler que lo anulaba como alternativa real y con un insignificante parque de vivienda social. A pesar del mandato constitucional, España nunca se ocupó de garantizar el derecho a la vivienda; se limitó a propiciar la mercantilización como suculenta fuente de ingresos para determinados sectores privados y para la propia administración.

Pero las burbujas estallan y, con la crisis, al problema del acceso se sumó la pérdida de la vivienda para miles de personas que hasta entonces, y según las estadísticas, tenían resuelta la cuestión. En un país donde el principal gasto de los hogares es la vivienda y en el que durante años se ha impulsado la propiedad privada como forma de tenencia casi exclusiva —roza el 90 por ciento del parque total—, cuando se reducen los ingresos el primer gasto al que no se puede hacer frente es la hipoteca. Con una tasa de desempleo superior al 24 por ciento, es fácil intuir la magnitud de la tragedia: entre 2007 y el primer trimestre de 2012 se han iniciado 374.230 ejecuciones hipotecarias en España. Según los datos de 2012, se producen 275 nuevas ejecuciones cada día.

En el ámbito del alquiler la cosa no está mejor. Alquiler e hipoteca son dos caras del mismo problema: la mercantilización. No se trata sólo de que muchas personas se hipotecasen porque el alquiler no era una opción asequible ni estable: ahora todas las personas que pierden su vivienda tras una ejecución se realojan en régimen de alquiler. Así, el alquiler está destinado a aumentar a pesar de que su regulación ha empeorado. En 2012 el Gobierno del PP ha presentado una propuesta de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que prevé reducir la duración mínima de los arrendamientos de 5 a 3 años, acelerar aún más los desahucios y favorecer fiscalmente a los inversores que quieran comprar grandes paquetes de viviendas para ponerlas en alquiler. Sigue siendo una política de Estado el favorecer el negocio inmobiliario a costa de vulnerar derechos fundamentales, a pesar de que en el primer trimestre de 2012 hayamos alcanzado el récord de desahucios: 517 al día. Así, podemos afirmar, sin duda alguna, que *Spain is different*: somos de los pocos países europeos que, tras la

segunda guerra mundial, no incluyeron la vivienda en el pacto social. De resultas, somos uno de los países con menos alquiler social —alrededor de un 1 por ciento— y menos alquiler en general —alrededor de un 13 por ciento—. Tenemos además el triste honor de encabezar dos ránquines europeos: el de desahucios y el de viviendas vacías (5,6 millones según estimación de 2012).

En España, quien no tenga resuelta la vivienda por herencia familiar puede considerarse una persona afectada. Sea por alquiler o hipoteca, la vivienda se lleva en muchos casos más de la mitad de los ingresos y es el principal factor de precariedad tras el laboral. Es comprensible que en 2006 surgiera V de Vivienda, un movimiento ciudadano masivo y espontáneo que denunció la burbuja inmobiliaria cuando la administración negaba su existencia, y que tuvo en su desarrollo muchos elementos pre-15-M. Más tarde, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), nacida en Barcelona en 2009, puso sobre la mesa la emergencia habitacional generada tras el estallido de esa burbuja que oficialmente nunca había existido.

La PAH identificó como problemas principales las deudas ilegítimas generadas por los procedimientos hipotecarios y la pérdida de vivienda a través de los desahucios. En consecuencia, diseñó las campañas por la dación en pago —exigiendo que la entrega de la propiedad sea suficiente para saldar la deuda— y contra los desahucios, y propuso la reconversión de las viviendas hipotecadas en alquiler social. Para lograrlo se movió en dos niveles: acciones para cambiar una legislación injusta y, dadas las dimensiones de la tragedia y la tardanza de los cambios normativos, iniciativas de desobediencia civil que permitan hacer frente a la violencia que supone desalojar a una familia para que los bancos acumulen miles de viviendas vacías.

Esta movilización experimentó un salto con el 15-M, de tal forma que entre éste y la PAH se produjo un *encuentro perfecto*. Por un lado, la PAH ha vivido un fuerte crecimiento y ha visto cómo cientos de personas acudían a parar los desahucios, al tiempo que se creaban muchas nuevas PAH locales ligadas a asambleas del 15-M. Por el otro, el movimiento del 15 de mayo, tras la primera fase

de expresión de la indignación, quiso concretar sus objetivos y encontró en la PAH una fuente útil para señalar responsables y soluciones, al menos en el ámbito de la vivienda. Así, el movimiento adoptó en seguida como propias las campañas por la dación en pago y contra los desahucios, y la vivienda se convirtió en una de sus principales campañas a largo plazo. Si hasta el 15-M la PAH había paralizado unos setenta desahucios, a partir de aquél la campaña se extendió como la pólvora. Hasta julio de 2012 la PAH, con el apoyo de asambleas de barrio y asociaciones vecinales, ha paralizado casi cuatrocientos desahucios, a los que hay que sumar centenares de daciones y alquileres sociales negociados con los bancos.

La lucha contra los desahucios ha logrado una doble victoria. En el plano simbólico ha transformado el imaginario colectivo, rompiendo el velo de miedo y resignación que mantenía a parte de la población atenazada y convirtiendo lo que la sociedad del consumo estigmatizaba como un fracaso personal en un acto de dignidad y solidaridad. Pero en otro plano, el de las necesidades básicas, paralizar los desalojos ha sido una respuesta concreta al riesgo de quedarse en la calle. Aunque los aplazamientos y realojos en vivienda social no han resuelto el problema de los desahucios, han permitido que conserve la vivienda la mayoría de las personas que han confiado en el apoyo mutuo. Debemos demostrarnos a nosotras mismas que, frente a lo que se dice en las tribunas políticas, judiciales, financieras, mediáticas y académicas, el mundo puede funcionar con criterios más justos e igualitarios, y está en nuestras manos que así sea.

Aun así, la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de las viviendas en manos de la banca no son suficientes para resolver el problema de fondo. Son demandas de mínimos para hacer frente a la situación de emergencia. Por ello la PAH exige una auditoría social que investigue las responsabilidades de la burbuja inmobiliaria y clarifique quiénes fueron los grandes beneficiarios y adónde ha ido a parar el dinero. Esa auditoría serviría para perfilar medidas que reviertan la tendencia de los últimos años, con el fin de regular la vivienda como un bien de uso y

no de inversión. Entre esas medidas deben contarse la aprobación de controles democráticos reales del mercado hipotecario y de la banca en general; la limitación de la capacidad de endeudamiento de la población; la garantía de la función social de la vivienda como límite al derecho de propiedad; la reforma de la LAU para permitir que el alquiler sea una alternativa real, o la promoción de otras formas de tenencia como el cooperativismo en régimen de cesión de uso.

Sin perder de vista las grandes metas, el movimiento de las personas afectadas por la hipoteca ha abierto una brecha por saber distinguir objetivos a corto, medio y largo plazo. Esa visión ha permitido acumular pequeñas grandes victorias y un amplio consenso social que no ha dejado de crecer. El proceso culminará en noviembre de 2012 con la entrega de cientos de miles de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago y contra los desahucios. Si el Gobierno comete la arrogancia de ignorar las demandas ciudadanas, estará legitimando el inicio de un proceso colectivo de realización del derecho a la vivienda desde abajo: el parque de vivienda del 99 por ciento. En cualquier caso, el discurso gubernamental sobre la escasez de recursos no se sostiene. Si en España sobra algo, son viviendas. Ya no es sólo cuestión de la defensa del derecho a la vivienda como derecho fundamental; incluso en términos estrictamente económicos no tiene sentido dejar que se deterioren miles de viviendas vacías mientras miles de personas no pueden recuperarse por carecer de un hogar en el que rehacer sus vidas. Para que el país salga de la crisis será imprescindible que sus ciudadanos lo hagan: por ello es imperativo lanzar un plan de rescate ciudadano que, frente al rescate bancario impuesto por las elites, prime los derechos fundamentales y las necesidades básicas de las personas frente a la lógica especulativa de los mercados.

CAPÍTULO 9
EL SINDICALISMO QUE QUEREMOS

PALOMA MONLEÓN[9]

El 15-M presentó desde sus primeros momentos un discurso y una actitud más bien recelosa ante las organizaciones *en general*. Los numerosos esfuerzos de los medios de comunicación de masas por vincular al movimiento con las más diversas y en ocasiones extravagantes instancias justificaban en parte esta actitud precavida, que procuraba evitar cualquier intento de cooptación o manipulación por parte de las organizaciones existentes. Cargado de razón, el 15-M ha entendido además que ninguna de aquéllas ha mostrado el suficiente interés ni ha sido capaz de movilizar a esas amplias capas de la población que, víctimas de la crisis, se sienten abandonadas a su suerte. Aunque no exclusivamente, esta desconfianza se centra en partidos políticos y sindicatos.

La catastrófica situación de la clase trabajadora se atribuye en buena medida al apoltronamiento y conformismo de estos dos actores. En lo que se refiere al sindicalismo mayoritario, las cúpulas de las dos centrales sindicales de mayor tamaño, CC OO y UGT, vienen desarrollando, fundamentalmente en los últimos años, un sindicalismo institucional tan temeroso y pacato que en demasiadas ocasiones provoca vergüenza ajena. La dependencia de la

financiación estatal y el progresivo alejamiento de sus cúpulas y cuadros de la realidad cotidiana de las y los trabajadores han convertido a los sindicatos mayoritarios en compinches —sea por omisión de su obligada respuesta o por su descarada complicidad— de los sucesivos Gobiernos en la cascada interminable de medidas antisociales.

Aunque en demasiadas ocasiones esta actitud sumisa de las cúpulas ha contagiado a la afiliación, sería injusto no admitir la existencia en el seno de los sindicatos mayoritarios de posturas más beligerantes. No obstante, aparentemente resulta muy dificultoso contagiar a estas organizaciones de cualquier asomo de espíritu crítico, en la medida en que los cauces para formular propuestas alternativas parecen obstruidos desde hace tiempo.

Por otra parte, las escandalosas dimensiones que han alcanzado estos sindicatos los han convertido en verdaderos monstruos ávidos de los recursos que hasta fechas recientes les eran puntualmente suministrados por el Estado. Esta hipertrofia organizativa es incompatible con la democracia interna o con el espíritu de lucha y confrontación que debiera definir *per se* su propia existencia. Convertidas en enormes entidades que requieren grandes sumas de dinero para poder seguir funcionando tal y como lo han hecho hasta ahora —con millares de personas asalariadas a su cargo, sean éstas cuadros sindicales o técnicos—, se encuentran, en vista de los recortes perpetrados, en franca crisis.

Otro elemento que ha alimentado la desconfianza del 15-M hacia los sindicatos es el abuso que en ocasiones hacen de símbolos —siglas, banderas— poco amables para aquellas personas que se acercan por primera vez a una experiencia sindical. Con todo el respeto que merecen algunas de estas organizaciones y sus militantes, protagonistas de innumerables luchas, en estos momentos es imperdonable privilegiar lo identitario frente a lo plural, siempre que se garanticen ciertos presupuestos comunes imprescindibles.

Sin embargo, y a pesar de este desolador panorama, el sindicalismo alternativo encuentra serias dificultades para visibilizar su discurso, habida cuenta del genuino boicot que sufren en los

medios de comunicación de masas las organizaciones que plantan cara al sistema. Sólo es posible difundir la idea de que existe sindicalismo más allá del mayoritario a través del trabajo cotidiano en los centros de trabajo, en las calles, en las asambleas y en las luchas.

No obstante, y a pesar de este silencio informativo, en la medida en que muchas personas afiliadas a este otro sindicalismo, el resistente, participan además de manera activa en las diversas asambleas y grupos de trabajo del 15-M, ha sido posible establecer las primeras convergencias en experiencias y movilizaciones varias. Quizás el momento más interesante en esta confluencia ha sido hasta la fecha la jornada de lucha de la huelga general del 29 de marzo de 2012, y con ella los días previos, cuando 15-M y sindicalismo alternativo trabajaron y participaron conjuntamente tanto en los piquetes como en la gran manifestación que, en el caso de Madrid, casi igualó en número a la de los sindicatos mayoritarios.

Sin duda alguna, es imprescindible afianzar los cimientos de estas confluencias y tratar de tejer las alianzas que nos permitan seguir avanzando en las mismas. Para ello, debemos trazar unos mínimos presupuestos comunes que permitan abordar después la complicada cuestión de qué sindicalismo queremos.

En primer lugar, es necesario que en todo momento tengamos en mente cuál es la finalidad última de la organización, su razón y aspiración nuclear: ejercer la solidaridad y el apoyo mutuo del modo más activo y eficaz posible. Aunque es obvio que toda organización se complica casi de inmediato con otras tareas y responsabilidades, no deben confundirse estas herramientas al servicio de lo colectivo con fines en sí mismos que fácilmente conducen a la burocratización. Es vital mantener la coherencia entre las estrategias que hay que utilizar en las luchas cotidianas y el horizonte utópico al que aspiramos.

En cuanto al modelo sindical, es necesario prefigurar en el seno de las organizaciones el modelo de sociedad al que aspiramos. La transparencia ha de ser un fundamento de actuación en todo momento, tanto en el ámbito informativo como en lo que se refiere a nuestros métodos de trabajo. Deben fomentarse los mecanismos

que permitan el debate y la participación en la toma de decisiones mediante mecanismos de democracia directa. Se trata, además, de recuperar el carácter colectivo de las luchas frente al individualismo reinante.

Estos elementos, no obstante, si bien son imprescindibles, resultan insuficientes para el tipo de modelo sindical alternativo al que aspiramos, que pretende en suma una transformación social global. El sindicalismo que queremos actúa más allá de los muros de la fábrica, de las paredes de la oficina o de la cola del INEM, y precisamente por eso es de vital importancia la confluencia en las luchas del sindicalismo transformado y de los movimientos sociales, tanto en el plano estatal como, en la medida de lo posible, en el establecimiento de puentes con las luchas y experiencias en otros países.

Otra dificultad es el déficit de presencia sindical, tanto en pequeñas y medianas empresas —concentran en torno al 80 por ciento del total de personas asalariadas en el Estado español— como en ámbitos precarizados fuera de la norma, escenarios que dificultan la vigilancia del respeto de los derechos de las personas trabajadoras y facilitan los potenciales abusos. Qué no decir de los miles de empleos desregulados de la economía sumergida, muchos de ellos ocupados por migrantes que deben además enfrentarse con el acoso policial cotidiano que suponen los controles y redadas racistas. Es preciso que el sindicalismo alternativo y los movimientos sociales trabajen juntos para defender los derechos de estas personas y promuevan su autoorganización.

En cuanto a la composición del tejido productivo, es imperativo exigir el desmantelamiento progresivo de una parte del tejido industrial tal y como lo conocemos en la actualidad. Ciertos sectores como el del armamento o el del automóvil suponen en sí mismos una agresión directa para el medio ambiente, son un ejemplo de concentración del capital en manos de unos pocos y representan un modelo de producción de bienes materiales no sólo innecesarios: de hecho, actúan directamente en contra de la sostenibilidad de la vida.

En este mismo sentido, es imprescindible trabajar desde una perspectiva anticonsumista y decrecentista. Las luchas por los

derechos laborales deben ir de la mano de una inequívoca apuesta por el reparto del trabajo, la reducción del tiempo dedicado al mismo y la redistribución de la masa salarial. En estos trabajos deberán contabilizarse y repartirse también los trabajos de cuidados que, invisibilizados y mayoritariamente realizados por mujeres, deben formar parte del conjunto de tareas socialmente necesarias que hay que repartir entre todas las personas.

Finalmente, y con la misma vocación de recuperación de lo colectivo, los derechos sociales deben ser exigidos como derechos fundamentales, pues su existencia no debe supeditarse a intereses que les sean ajenos. La lucha por la escuela y la sanidad públicas, por la justicia social y ecológica, por los derechos de las minorías, etc., remite a derechos incuestionables que deben ejercerse por el mismo hecho de ser personas sus detentadores. En todo caso, el Estado no debe desviar ni manipular tales derechos en función de la coyuntura económica. Nuestra apuesta final, es, de hecho, su autogestión.

CAPÍTULO 10
DE LA AUTOORGANIZACIÓN A LA AUTOGESTIÓN

ANTONIO CARRETERO[10]

El movimiento del 15 de mayo mostró y demostró cómo la respuesta social enraizada en la desazón, la perplejidad y los problemas reales de la población, por muy aparentemente espontánea que sea, se origina, se construye y crece en relación directa con la capacidad de sus protagonistas para autoorganizarse. Decir 15-M es ante todo decir autoorganización. Y no cualquier autoorganización: asambleísmo en la calle, horizontalidad deliberativa y decisoria, coordinación en red, comisiones de trabajo, apoyo mutuo en acampadas y asambleas de barrio, solidaridad en las luchas, difusión y coordinación en las redes sociales de internet… Una autoorganización que en sí misma supone un proceso creciente de formación y reflexión colectiva autodidacta. Ni que decir tiene que para muchos viejos y no tan viejos militantes de la rebeldía permanente fue una grata y feliz sorpresa.

Cuando las estructuras contestatarias existentes, sociales y sindicales, no han sido capaces, a su pesar generalmente, de servir de cauce de expresión del descontento social, la autoorganización

de la rebeldía, de la crítica social y de la desobediencia emerge con renovada fuerza: creatividad e innovación de formas y modos situados en la acción, *ad hoc* al contexto y al devenir del movimiento, eminentemente flexible y procesual, democracia directa en ciernes.

Una autoorganización horizontal, sin pretensión de jerarquías ni liderazgos permanentes, es la forma correspondiente a unos contenidos y unos objetivos específicos, por muy imprecisos o ambiguos que éstos aparezcan en un principio: es la crítica en acto de la deforme y falseada democracia en la que vivimos, de las elites y de los profesionales de la política, de los intereses que defienden y del poder real que esconden y endulzan, es decir, del capitalismo depredador y rampante que padecemos.

En la medida en que objetivos y contenidos críticos se amplían, se hacen más complejos y se concretan, las propias formas autoorganizativas se modelan, adaptan y modifican. Es obvio que este proceso no es lineal ni necesariamente progresivo, que tiene y tendrá sus contradicciones y confusiones, y que genera o generará tanto complicidades como desencuentros. Sin embargo, la precocidad, la breve historia del movimiento y sus importantes logros movilizadores y de resistencia —y la mal llamada crisis de largo alcance que nos azota— alientan sin duda sus posibilidades de crecimiento, de ampliación de alianzas y, sobre todo, de profundización teórica y práctica en las luchas y en las alternativas por fraguar.

Luchas y alternativas son las dos caras de la desobediencia en gestación que se avecina. El 15-M, junto con organizaciones y colectivos sociales y sindicales de base y anticapitalistas, se configura como el espacio *liberado* y plural que puede atizar, promover y provocar el necesario salto cualitativo que va de la justa indignación a la construcción de alternativas al real des-orden existente. De hecho, son múltiples las iniciativas que al calor del movimiento están aportando reflexiones e iniciativas que se postulan confrontadas igualmente con la organización burocrática del Estado y con la maximización capitalista del beneficio.

La revista autogestionada *Rebelaos*, de marzo de 2012, aporta algunas de ellas, con el sumario titulado “Herramientas y recursos para impulsar el desarrollo de la autogestión en el ámbito local, mediante la interacción en red y la autoorganización desde abajo”. Previamente, a finales de mayo de 2011, dos semanas después del estallido del 15-M, se podía leer como documento orientativo y para el debate una “Guía rápida de dinamización de asambleas”, que aportaba importantes pistas sobre el proceso de autoorganización que se estaba desarrollando. En septiembre del mismo año la Assemblea Ciutadana d’Alzira, en un alarde de saludable utopismo, difundió el documento “La necesaria evolución del 15-M”, en el que planteó como proyecto “la construcción de un movimiento que tenga como objetivo cambiar la sociedad empezando aquí y ahora”, siendo un primer paso la conversión de la asamblea en “una institución ciudadana que sirva de contrapoder eficaz a las instituciones políticas del Estado y al sistema económico relacionado con éste”. Y mientras escribo este texto, el 29 de julio de 2012, se desarrolla en el Retiro madrileño una “Jornada asamblearia de iniciativas y proyectos de apoyo mutuo y autogestión social en barrios y pueblos”. La convocatoria de esa jornada se refiere a “la importancia del desarrollo estable de los proyectos sociales que se están generando desde la base para sustentar un proceso de cambio en la sociedad. Cómo gestionar los núcleos de autogestión local, dar volumen a todo lo que se está generando ya en los barrios y localidades como son las huertas urbanas, el trueque o banco del tiempo, la tienda gratis, otras alternativas al dinero, recogida y distribución de alimentos, energía libre y autosuficiencia energética, grupos de consumo responsable, iniciativas de autoempleo, uso de los espacios en los mercados de abastos, bancos de semillas […]”.

El movimiento está, pues, en el tránsito de la autoorganización de las luchas a la autogestión de iniciativas sociales, ecológicas y económicas. En ese tránsito, si bien la primera no implica necesariamente la segunda, la autogestión no es nada si no presupone en primera instancia la autoorganización de los y las implicados en lo que se pretende gestionar. La consolidación de la autoorganización del movimiento conduce casi naturalmente a los

planteamientos autogestionarios. Pero la autogestión es mucho más y, sobre todo, va más allá de la mera autoorganización.

En primer lugar, la autogestión es una apuesta abierta y arriesgada por otra forma de organizar la sociedad, y de gestionar colectivamente lo que consideramos propiamente social: derechos, servicios, necesidades, cultura, etc. Frente a la lógica de los mercados, del productivismo y del consumismo, y de la acumulación de beneficios en manos privadas, la autogestión se alinea en la perspectiva de la sostenibilidad de la vida, de la amplificación de los derechos y de la satisfacción de las necesidades humanas. Una apuesta por una lógica del cuidar y del ser cuidado, así como del bien vivir.

En segundo lugar, la autogestión conlleva una relación simbiótica y no contradictoria entre fines y medios, de tal modo que como medio igualitario y participativo de gestión de las cosas humanamente dignas configura en su quehacer la consecución y el desarrollo de la dignidad, de la reapropiación de la igualdad como sostén y razón de la máxima libertad individual.

En tercer lugar, la autogestión se orienta por los principios de la democracia directa, es decir: rotación de cargos y cargas, revocabilidad permanente, asamblearismo deliberativo y decisorio, búsqueda de acuerdos por consenso, respeto escrupuloso de la divergencia y de las minorías. La democracia directa, no obstante, no tiene una única forma de expresarse e instituirse. Cada proyecto autogestionario debe articularse según normas y reglas revisables para cualquier aspecto estructural: toma de decisiones, reparto de tareas, organización del trabajo, distribución de bienes y servicios.

En cuarto lugar, la autogestión se apoya y se sostiene en la propiedad colectiva y compartida de los medios técnicos, materiales y culturales que garantizan la sostenibilidad de la vida. Esto supone, entre otras cosas, que el saber experto ha de ser un saber compartido, un pensar colectivo, y, por lo tanto, debe hacerse valer sin privilegios ni prerrogativas o parcelas de poder. Y supone, por supuesto, un cortocircuito a la propiedad privada, y a su acumulación desmedida.

En quinto lugar, la autogestión se instituye local y descentralizadamente, se construye mediante el apoyo mutuo y se extiende por la libre federación de las unidades, núcleos o proyectos autogestionados, coordinándose en niveles superiores, territoriales y sectoriales, de actividad para el efectivo desenvolvimiento de la solidaridad entre los miembros federados. Se trata, por ejemplo, de crear “redes de apoyo mutuo para la autogestión social” (ramas), que irían ampliando su alcance y diversidad.

Por último, la autogestión se constituye como garantía para la gestión de una sociedad compleja, diversa, plural y libre de trabas autoritarias y económicas. La autogestión es anticapitalista y antijerárquica a partes iguales. Podemos y debemos reclamarla y desarrollarla como alternativa al caos social y económico existente. Es el reto permanente para modificar radicalmente las relaciones de poder asimétricas y desiguales actuales. Es una utopía posible y necesaria.

CAPÍTULO 11
DECRECIMIENTO Y 15-M: UN ‘FEEDBACK’ NECESARIO

MANOEL SANTOS[11]

Entre los análisis que han surgido con motivo del primer aniversario de la explosión social que supuso el movimiento del 15 de mayo podemos detectar, al menos, dos tendencias totalmente opuestas. La primera concluye que, como tal, el movimiento no ha conseguido nada y que su influencia y prestigio social son poco menos que irrelevantes. La segunda, creo que más atinada, afirma en cambio que el movimiento ha logrado algunas victorias concretas, pero sobre todo dos muy significativas y de largo alcance.

Por un lado, como ha escrito Raimundo Viejo, aquel 15 de mayo se produjo la mutación definitiva en el repertorio de acción colectiva que inaugura una fase alcista, sinérgica y empoderadora. Efectivamente, el 15-M parece haber logrado lo que el movimiento antiglobalización, y especialmente parte de su deriva altermundista, no consiguió —claro que los escenarios y los actores son sensiblemente diferentes— en su día: abrir el espectro movilizador a los más diversos estratos sociales, en buena medida sin *cultura*

activista previa, sirviendo de elemento aglutinador para toda una amalgama de protestas dispersas.

La segunda victoria, tanto o más importante aún, tiene que ver con el hecho de que lo que dimos en llamar *pensamiento único* comienza a diluirse en la historia. Cada vez más personas se abren a cuestionar el propio sistema y a tomar en consideración otras posibilidades de organización socioeconómica, otros horizontes posibles. ¿Estamos quizás en un estadio incipiente de la ansiada *descolonización del imaginario* defendida por Castoriadis o Latouche como primer paso para la construcción de una sociedad alternativa? Más que las movilizaciones en sí, intuyo que es este asalto ideológico a los cimientos del orden capitalista el que ha cambiado la percepción del 15-M por parte del poder. Si en su origen el movimiento fue leído como una realidad amable e incluso *simpática*, hoy se ha convertido en una amenaza que hay que combatir como siempre se ha hecho: con la criminalización. Algo tendrá que ver esto con lo que nos dice Santiago Alba: “Lo inesperado del 15-M fue que surgiera; pero más sorprendente aún fue que se hiciera las preguntas correctas y que atinara también, de manera más o menos abstracta, con las respuestas correctas”.

Parece un hecho que ese *movimiento amable* ha evolucionado, se ha radicalizado, tanto en sus acciones como en sus propuestas, al mismo ritmo que las agresiones del sistema contra las mayorías sociales. Si en esencia pudo surgir como una reacción de ciertas *clases medias* contra la degradación de su estatus potencial, hoy parece estar acercándose a la órbita de lo antisistémico, reclamando abiertamente un cambio radical en la manera de organizarnos socialmente, algo constatable si atendemos a las alternativas a las que el 15-M ha prestado atención. Me interesa destacar una de ellas, la propuesta o filosofía del decrecimiento en el sentido en la que la entiende Paul Ariès, no sólo como una ideología o un modelo económico de nuevo cuño, que también, sino sobre todo como una *palabra-obús* para pulverizar el pensamiento económico dominante.

Es difícil encontrar alguna acampada, asamblea de barrio o grupo de activistas que no se haya interesado por la opción del decrecimiento y no haya organizado al respecto charlas y jornadas

en algún momento durante el último año. Entre las propuestas rupturistas que van ganando cada día más espacio dentro del 15-M, la del decrecimiento se ha situado entre las más atractivas, probablemente porque en su seno entran perfectamente muchas de las vías alternativas que dentro del movimiento se están dibujando, imaginando, soñando…

A esto ha contribuido que organizaciones decrecentistas preexistentes, como Decrece Madrid, Decrecimiento Aragón o la Red Decrecimiento Sevilla, así como muchos activistas y pensadores de referencia en ese campo, hayan participado y participen del 15-M, por no hablar de otros colectivos multidisciplinares que desde hace tiempo tienen el decrecimiento entre sus consignas, como Ecologistas en Acción.

Pero dentro del propio 15-M, de sus asambleas, se han formado grupos de trabajo, casi siempre alrededor de las comisiones de medio ambiente o de economía, para desarrollar propuestas prácticas en torno al decrecimiento; es el caso de la subcomisión de decrecimiento de la acampada de Barcelona, que sigue teniendo mucha actividad. En otras ocasiones, las asambleas trabajan en cuestiones que, sin ser vistas en principio como expresamente decrecentistas, sí formarían parte del universo de acciones que sería imperioso emprender para caminar hacia una sociedad en decrecimiento: economía solidaria e informal, cooperativismo, autogestión, bancos de tiempo, redes de apoyo mutuo, mercados de trueque, banca ética y monedas sociales, grupos de consumo, agroecología, rerruralización, huertos urbanos, ecoaldeas y aldeas urbanas, educación no formal…

Hasta se han dado casos, como el de la acampada de Granada, ahora descentralizada en barrios y pueblos, en los que una asamblea general ha situado el decrecimiento como una de sus prioridades: “Decrecimiento ya: autogestionado, equitativo y feliz. Sustitución de los modelos capitalista y consumista por un vivir mejor con menos, compartir en lugar de competir. La decisión sobre el uso del territorio para lxs ciudadanxs y sus asambleas. No a las nuevas urbanizaciones y a las infraestructuras especulativas.

Reduzcamos el consumo de forma radical y creativa apostando por productos locales, ecológicos y artesanales".

Que una propuesta que hace hincapié en la necesidad de reducir drásticamente nuestra producción y nuestro consumo, y que reclama muchas medidas correctoras de cambio social que tratarían de sacar a nuestra civilización del capitalismo de forma serena, haya despertado el interés de parte del 15-M está en franca contradicción con quien sostiene que este movimiento no camina hacia posiciones antisistémicas o anticapitalistas.

Conviene en este punto ser conscientes de que en el 15-M parecen estar dándose dos líneas de trabajo muchas veces diferenciadas en sus objetivos, prioridades e incluso actores, pero no por eso incompatibles. La primera, más visible y mayoritaria, aquella que lucha por resolver las urgencias, en términos de pérdida o ausencia de derechos sociales, incluso de sustento para muchas personas, se expresa cada día con más fuerza en las movilizaciones, ya sean generalistas o por cuestiones concretas —educación, sanidad, vivienda, cuidados, empleo—, y en propuestas de corte menos rupturista o incluso reformista —auditoría de la deuda, reforma fiscal, reforma de la ley electoral, dación en pago—. La segunda, más de fondo, habla de ir construyendo paralelamente un gran movimiento autogestionario, con primacía de lo local, para responder a un más que probable colapso social futuro provocado por la insostenibilidad del sistema capitalista.

Es en esta última donde propuestas como la del decrecimiento parecen haber encontrado su sitio, no en competencia sino como agregado —importante— de muchas otras luchas que siempre, en mayor o menor medida, han tratado de contestar la barbarie del capitalismo. A riesgo de caer en el excesivo optimismo, decrecimiento y 15-M parecen llamados a retroalimentarse. De hecho, estamos en condiciones de afirmar que gracias al 15-M los objetores del crecimiento han avanzado más en la visibilización de su propuesta en el último año que en toda la década anterior. Al mismo tiempo, en la medida en que el decrecimiento —al menos como filosofía— vaya calando en el 15-M, tanto más el movimiento estará en condiciones de blindarse para desactivar el discurso

desmovilizador, tan ilusorio como interesado, que sostiene que en pocos años todo volverá a ser como antes, obviando entre otras cosas unos límites planetarios que poco entienden de sermones.

Podemos decir que el decrecimiento, en el terreno de lo conceptual, constituye hoy una teoría bastante sólida, digna de ser tomada en consideración, de cómo se podría abandonar esta barbarie basada en el consumismo patológico, la sobreproducción sin sentido, la obsolescencia planificada de los productos, el crédito y el individualismo, la violencia, el modo de vida esclavo y el dominio del imaginario colectivo. ¿Alguien está en condiciones de afirmar que el 15-M no está luchando contra todo esto? En lo práctico, su papel debería ser probablemente el de constituirse en contenedor de un sinfín de propuestas que el movimiento ya está desarrollando, construyendo o asumiendo todos los días en su búsqueda de una sociedad alternativa, para si acaso darles un mínimo orden y sentido, sin tener por eso que caer en la tentación de constituir un comité central o cualquier otra nociva jerarquía para esa nueva sociedad que cada vez más personas sueñan con alcanzar.

CAPÍTULO 12
LA ENERGÍA NI SE CREA NI SE DESTRUYE: SE DESPILFARRA

ANA JIMÉNEZ TALAVERA Y ANA VELÁZQUEZ PAREJÓN[12]

Para nosotras, el 15-M surge como respuesta a la agresividad con la que se está expresando el capitalismo salvaje, en esta parte del mundo, en estos últimos años. Aparece ante la urgencia de cambios radicales en el sistema vigente. Pero para propiciar cambios es necesario saber de dónde partimos, y al menos una orientación de hacia dónde queremos caminar. En algunos aspectos pensamos que el capitalismo se percibe como una suerte de monstruo mitológico. No se vislumbra de manera clara cómo se materializa en todas las posibilidades que *ofrece* o impone para resolver lo que precisamos en nuestra supervivencia como personas. Esta abstracción del ente que hay que transformar provoca que, ante la urgencia de la situación, en ocasiones intentemos atajar los síntomas y olvidemos cuestiones de fondo, o las dejemos en un segundo plano. Una de estas cuestiones es el modelo energético en el que se sustenta el sistema. Debemos hacer visible el funcionamiento y repercusiones del modelo energético que nutre al monstruo y que permite y potencia su supervivencia y ferocidad. Y

debemos poner en evidencia las relaciones entre ese modelo y el modo de vida impuesto. Esto podría ayudarnos a trabajar colectivamente por cambios más radicales, sistémicos e integrales.

El origen y el uso de la energía son dos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta. Más del 85 por ciento de la energía —la destinada a hogares, comercio, industria, alimentación, construcción, transporte, etc.— procede de fuentes fósiles, principalmente petróleo y derivados. Respecto al uso, podemos afirmar que nuestro modelo de sociedad es *petrodependiente*. Los combustibles fósiles suponen hasta el momento el motor imprescindible y barato que ha permitido el desarrollo capitalista. La lógica ilógica de funcionamiento del sistema obliga a un crecimiento económico continuo que sólo se concibe a expensas del consumo indiscriminado de recursos energéticos, materiales y humanos, por otro lado finitos. Esto es: que se agotan. ¿Tendrá ello algo que ver con la crisis?

El bajo precio de las fuentes fósiles —merced entre otras razones a que no se internalizan los costes sociales y ecológicos de su extracción y producción— ha permitido procesos económicos que han propiciado que el monstruo alcance dimensiones globales; ejemplos son la deslocalización del sistema productivo, el movimiento constante de mercancías, el sistema agroindustrial, muy dependiente del petróleo, que nos alimenta o el crecimiento urbanístico insensato y acompañado de la especulación inmobiliaria que se ha dado, entre otros, en nuestro país.

Una de las consecuencias inmediatas de este despilfarro de energía fósil es el llamado *pico del petróleo*, y el de otros combustibles como el carbón o el gas, que ratifica la inviabilidad del sistema económico tal y como lo conocemos. El pico del petróleo, ya sobrepasado o a punto de estarlo, acarrea una menor calidad y cantidad del crudo disponible, la necesidad de una mayor inversión energética para la extracción, la subida de precios y, en suma, un acceso desigual según la posición social.

En cualquier caso, el orden actual de las cosas está en entredicho. Y esto se debe fundamentalmente a que sigue unas reglas diferentes a la lógica de funcionamiento del propio sistema

ecológico en el que, guste o no, está inserta la humanidad. En apenas doscientos años hemos quemado, pastoreados por el monstruo, lo que la Tierra ha tardado millones en producir, ignorando que en el metabolismo natural se utilizan los recursos en función de su tasa de regeneración. Se han alterado ciclos naturales como el del carbono, y se ha producido una ingente cantidad de residuos gaseosos, de CO_2, muy por encima de lo que el sistema Tierra-atmósfera puede digerir. Esto se ha traducido en una serie de problemas sociales y ecológicos —externalidades— de tal magnitud que nos sitúan ante un panorama de dramático cambio global. El cambio climático con todas sus repercusiones, la pérdida de la biodiversidad que alberga la información necesaria para la supervivencia, la desaparición de modos de vida originarios por el simple motivo de haber cobrado cuerpo en posibles yacimientos o las invasiones brutales de países para mantener el monopolio del crudo son algunas de las situaciones derivadas del modelo energético dominante. Y cada vez son mayores las certezas que nos permiten afirmar que la crisis económico-financiera de esta parte del mundo está relacionada con la crisis de este modelo energético, inviable de manera global y continua.

Nuestra profesión nos permite comprobar la ausencia de estas ideas en el ideario colectivo. Para explicarla hay que invocar la falta de información al respecto y la perversión a la que está sometida por los medios (tanto por los in-comunicativos, como la televisión o la radio, como por el sistema educativo y el tratamiento incompleto y engañoso que propone). Por otro lado, resulta difícil que las personas nos hagamos una idea de la gravedad del asunto de manera inmediata y por propia experiencia. Gran parte de la energía que necesitamos la obtenemos con el simple clic de un interruptor, por el surtidor de una gasolinera, o abriendo un grifo. Difícilmente se transmitirá la idea del origen y naturaleza finita de la energía. Los costos energéticos asociados a todos los bienes y servicios de que disponemos están totalmente invisibilizados. De las externalidades, ni hablamos. Y más en la cohorte social a la que pertenecemos, caracterizada por el tránsito de la austeridad a la abundancia en unos pocos lustros.

Así las cosas, parece lógico que las personas no tengamos incorporado en nuestros esquemas mentales lo que significa la dependencia total con respecto a la energía fósil, y cuáles son sus repercusiones. Y que no valoremos lo que supone para el mantenimiento del estilo de vida que hasta hace muy poco hemos estado desarrollando, y al que —mucho nos tememos— anhelamos volver.

La situación en el 15-M es un poco diferente. Es cierto que el debate energético no ha constituido ni constituye, a nuestro modo de entender, un elemento vertebrador del movimiento. De hecho, sigue planteando incomodidades, e incluso incomprensión, simultanear en la misma discusión el apoyo incondicional a la resistencia minera y el necesario cuestionamiento del modelo energético. Aun así, se percibe una incipiente actitud crítica y proactiva al respecto. El carácter plural propio de este movimiento ha provocado que se aproximen cabezas que ya traían estas cuestiones más o menos integradas, y que otras las hayan asumido por contagio. Esto hace que se desarrollen propuestas que de una manera u otra están incorporando el debate sobre todo en el terreno práctico. Comisiones de movilidad y medio ambiente que trabajan por ciudades para y por las personas en oposición a la tiranía del automóvil, huertos autogestionados y ecológicos, bancos de tiempo, o mercados de trueque, *okupaciones* y realojos, son algunas de las iniciativas planteadas por las diferentes asambleas. Aunque en pequeña escala, promueven la reducción del consumo y de la dependencia energética tal y como se concibe hoy en día.

Aun así, queda mucho por pensar y por hacer. Estos problemas, de primer orden, precisan una respuesta social que ponga en cuestión las propias causas que los han generado y que tire del hilo visibilizando lo invisibilizado. Tal respuesta debe hacer frente a las reacciones institucionales que, apoyadas en un *tecnoentusiasmo* desmedido, evitan afrontar una solución integral del problema. Debe rechazar la energía nuclear, que depende de un recurso limitado y genera residuos de alto riesgo, sobre todo para las poblaciones que los albergan. Debe proponer el desarrollo de renovables pero asumiendo sus limitaciones, y por supuesto no bajo

el mismo modelo de despilfarro. Y debe seguir favoreciendo la creación de espacios de libertad para promover modos de satisfacer las necesidades humanas que minimicen el consumo y la dependencia energética, y posibiliten la democratización del sistema correspondiente. En los actuales escenarios de debate horizontal, en el 15-M y en donde quiera que surja una contestación del sistema dominante, debemos introducir el debate energético por la incidencia y responsabilidad que tiene sobre la forma de vida impuesta. Nos encontramos en un momento histórico importante, por el carácter alarmante y global que han adquirido los problemas socioambientales, un momento crucial para idear y sacar adelante respuestas que nos hagan transitar hacia un nuevo modelo energético y social. Esas respuestas deben ser capaces de conectar los elementos clásicos de lucha social —vivienda, trabajo digno, habitabilidad de las ciudades o democracia real— con un modelo energético que reduzca radicalmente el uso y la dependencia energética. En definitiva, debemos permitir el desarrollo de la vida en todo el planeta con criterios de justicia socioecológica para quienes estamos ahora y para quienes quedan por venir. ¡Salud!

CAPÍTULO 13
RECORTAR EL GASTO MILITAR

JORDI CALVO RUFANGES[13]

En las asambleas del 15-M, aun sin estar muy presente, nunca ha faltado el debate sobre la militarización y el gasto militar. En el contexto de crisis en que ha surgido el movimiento de indignación, la dedicación de elevados presupuestos públicos a la compra de sofisticados armamentos o a la participación en lejanas guerras ha suscitado la demanda, también en el 15-M, de la reducción del gasto militar, que supera los 1,5 billones de euros anuales en todo el mundo. Además, si tenemos en cuenta que Naciones Unidas estima que con una pequeña parte de ese gasto alcanzaríamos en tan sólo un año los Objetivos del Milenio, ¿por qué dedicamos tanto dinero a armas, guerras y ejércitos, y tan poco a las necesidades básicas de la humanidad?

Una de las razones que explican lo elevado del gasto que me ocupa es el enorme poder del complejo militar-industrial. Veamos su incidencia en el gasto militar español y algunas propuestas para su reducción. El verdadero gasto militar en España es más del doble del que indica la cifra oficial del Gobierno (7.600 millones de euros). En 2011, según el criterio de la OTAN, el gasto militar español fue de 14.600 millones de euros. Si a esta cifra sumamos la parte

correspondiente de la deuda pública y el aumento que con regularidad se produce al final de cada ejercicio presupuestario, el verdadero gasto militar se situó en 17.000 millones de euros. Con lo que la reducción respecto al año anterior fue en realidad del 6,33 por ciento, lejos del 16 por ciento de reducción media del resto de partidas presupuestarias. Además, el Gobierno español tenía contratados nuevos armamentos con un coste estimado en 32.800 millones de euros. Incluso el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, afirmó que no se deberían haber adquirido armas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora. Este despilfarro militar ha dado lugar a la *burbuja armamentística*, que ha hecho que España haya comprado 87 aviones de guerra Eurofighter, 27 aviones de transporte militar A-400, 4 submarinos y una nueva fragata, entre una larga lista de nuevos armamentos que parecen indicar que vamos a conquistar el mundo. Pero el agujero del gasto militar no acaba aquí. La industria militar española ha recibido créditos blandos para investigación y desarrollo por un valor total de 19.500 millones de euros. En 2008 la información obtenida de una pregunta parlamentaria al Gobierno sacó a la luz que hasta entonces se habían concedido más de 13.000 millones de euros en créditos a investigación y desarrollo militar, y que tan sólo habían sido devueltos 87 de esos millones, el 0,6 por ciento del total.

El complejo militar-industrial está compuesto por militares, políticos, empresarios y banqueros que financian. Los militares ejercen su particular presión —tienen las armas— por preservar e incluso aumentar sus recursos. Hay militares, por lo demás, que dejan el ejército para disfrutar de altos cargos en empresas armamentísticas. La teoría de las *puertas giratorias* identifica un fluido tránsito del sector militar privado al público y viceversa. Entre otros casos destaca el del general Carlos Villar, que pasó de ser jefe del Estado Mayor de Tierra a vicedirector de Negocios de Santa Bárbara, una de las principales empresas españolas de armas (el ejecutivo de Aznar la vendió a General Dynamics en 2001 por el irrisorio precio de cinco millones de euros pero, eso sí, con pedidos firmados por el Gobierno español por unos 3.000 millones de euros).

Otro ejemplo es el del almirante Sebastián Zaragoza, quien tras abandonar su cargo de jefe del Estado Mayor de la Armada se convirtió en asesor comercial de Navantia (empresa pública que construye buques de guerra). Destaca también lo ocurrido con Francisco Torrente, quien de secretario general de Política de Defensa pasó a ser presidente de Expal (Explosivos Alaveses, SA), una de las empresas de armas más terribles de España, que fabricaba minas antipersona y bombas de racimo hasta que se lo prohibieron; de ellas consiguió además el contrato de destrucción de los remanentes, un negocio redondo. En relación con los políticos, sirva de ejemplo el caso de Pedro Morenés, ministro de Defensa desde diciembre de 2011, quien fue en el anterior Gobierno del PP secretario de Estado de varias carteras, pero que con la llegada de los socialistas al poder en 2004 comenzó una fructífera carrera en la empresa privada militar, llegando a acumular hasta su entrada en el Gobierno actual el cargo de director en España de MBDA —la segunda empresa de misiles más importante del mundo—, consejero de Sapa Placencia —una de las mayores empresas españolas de armas ligeras y municiones—, director de Segur Ibérica —empresa de seguridad privada que custodia con armas pesadas a los atuneros españoles en Somalia— y consejero de Instalaza —empresa zaragozana que fabricaba bombas de racimo hasta que fueron prohibidas por ley en julio de 2008 y que poco antes de la prohibición consiguió la venta de su modelo de bomba de racimo MAT-120 a la Libia de Gaddafi—. Morenés no podía imaginar que tres años más tarde Gaddafi bombardearía a la población civil en Misrata, como consecuencia de los enfrentamientos de la guerra civil libia de 2011, y que un delegado de Human Rights Watch encontraría el casquillo de una MAT-120. Cabe decir que Instalaza, asesorada por el actual ministro de Defensa, demandó al Gobierno español 40 millones de euros de indemnización por el lucro cesante producido por la prohibición de las bombas de racimo. Ahora Morenés deberá dar respuesta a esta demanda.

En un contexto de larga crisis económica como el actual, son cada vez más las voces que exigen, para poder hacer frente a las

verdaderas necesidades sociales, una reducción del gasto militar. Pero, ¿qué reducción en el gasto militar español podría realizarse? Hay cuatro partidas que acumulan gran parte del gasto al final de cada año. Con la voluntad política necesaria, podrían ver reducida o eliminada su cuantía, sin que ello supusiera un cambio en el paradigma actual de seguridad. Recordemos al respecto que cada año se destinan 850 millones de euros a las misiones en el exterior; esta partida es una de las principales culpables de que se produzca una enorme diferencia entre el presupuesto militar inicial y el liquidado, ya que en los presupuestos el Gobierno sólo prevé 15 millones anuales para la participación del ejército en operaciones militares fuera del territorio español. Además, y en segundo lugar, cada año son destinados a investigación y desarrollo militar alrededor de 1.000 millones de euros de fondos públicos; su eliminación de los presupuestos debería ir seguida de la exigencia de devolución de los correspondientes créditos recibidos hasta la fecha por la industria militar. También se deberían cancelar, en tercer lugar, los contratos de armas que, como corroboraba el anterior secretario de Estado de Defensa, no necesitamos; cada año se destinan 2.000 millones de euros al pago de los nuevos armamentos a los que se han comprometido los sucesivos Gobiernos.

Finalmente, y en cuarto término, ha llegado el momento de hacer una profunda reflexión sobre el volumen de fuerzas armadas que es necesario en el contexto actual. Teniendo en cuenta que formamos parte de un espacio supranacional como la Unión Europea, que cuenta con más de dos millones de militares, ¿qué necesidad hay de destinar tantos recursos a mantener semejante volumen de soldados? ¿Para qué necesita España un ejército de 140.000 efectivos, en el que además un tercio son mandos? Con unas fuerzas armadas de la mitad o de un tercio del volumen de las actuales se conseguirían los mismos objetivos de defensa. Esta reducción liberaría 3.000 millones de euros más de las arcas del Estado. De este modo se podría conseguir de un año para el otro, sólo con la reducción del gasto militar, un ahorro de entre seis y siete mil millones de euros.

El argumento económico ha sido el principal desarrollado en este artículo, pero emprender una profunda reflexión sobre una reducción del gasto militar podría suponer la elección de una estrategia de país responsable con la paz mundial, que se aleje de ocupaciones militares de lejanas tierras y mares, que no participe en la irresponsable promoción de la carrera armamentística y, en definitiva, que no vuelva a aparecer en otra foto de las Azores, que tan cara hemos pagado.

CAPÍTULO 14
LOS PUEBLOS DEL SUR: ¿OLVIDADOS POR EL 15-M?

IOLANDA FRESNILLO[14]

El 30 de noviembre de 1999 los noticiarios de medio mundo abrieron con lo que se conoció años más tarde como la batalla de Seattle, una masiva movilización contra las intenciones de liberalización de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aquél fue el estallido inicial de lo que se conoció como movimiento *antiglobalización*. En aquellos primeros años del siglo XXI numerosos activistas en todo el mundo se rebelaron contra los impactos de la globalización neoliberal y sus responsables, focalizando las protestas en las políticas impuestas en los países del Sur por organismos como el grupo de los ocho (G8), la OMC, el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El pago de la deuda, y los planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el BM para garantizar dicho pago, incluyendo privatizaciones de servicios sociales y empresas públicas estratégicas, desregulaciones comerciales y financieras, y otras duras medidas económicas y sociales, suponían, y siguen suponiendo, un duro ataque a la soberanía y los derechos de los

pueblos del Sur. Ante ello, activistas de todo el mundo se rebelaron contra estas instituciones y sus políticas. De resultas se establecieron espacios de coordinación internacional y se vincularon movimientos del Norte y del Sur, a través de eventos como el Foro Social Mundial o de redes como Acción Global de los Pueblos. A pesar de ser un movimiento que cobró especial fuerza en el Norte, tenía puesta su mirada en garantizar los derechos de los pueblos del Sur frente a la ola de la globalización neoliberal.

Poco más de una década después, y en buena medida inspiradas en las revoluciones de la *primavera árabe* en Túnez y Egipto, miles de personas tomaron calles y plazas, primero en el Estado español, y más tarde en ciudades como Londres, París, Roma o Nueva York, para protestar por los excesos de un capitalismo salvaje que genera distancias cada vez más insalvables entre el 1 por ciento rico y el 99 por ciento empobrecido.

El movimiento 15-M surgió en nuestro país como respuesta a la crisis económica que afecta a la periferia europea. Bajo el lema de "no nos representan", el 15-M ha centrado sus protestas en la indignación por la situación a la que se ha llegado y en la inoperancia de las instituciones para hacerle frente, mostrando solidaridad con países de la periferia europea como Grecia o Portugal, y mirándose en casos como el islandés. Pero en un inicio poca atención se prestó a lo que ocurría más allá del continente europeo (con la excepción de la *primavera árabe* y del salto del movimiento a Wall Street). El 15-M nació pues como un movimiento de ámbito eminentemente estatal, centrado en los impactos locales de una crisis global que tiene muchas similitudes con las que vienen arrasando las economías de América Latina, Asia y África desde hace décadas.

En el caso de la crisis de la deuda europea, las similitudes con la problemática del endeudamiento en los países del Sur resultan evidentes. La deuda ha constituido durante décadas, y sigue siendo hoy en día, un mecanismo de neocolonización de los países del Sur. El endeudamiento ha sido la herramienta que ha permitido el expolio de recursos, tanto económicos como naturales, así como la explotación de los recursos humanos. Los programas de ajuste

estructural impuestos durante los decenios de 1980 y 1990, y hasta la actualidad, por el FMI y el BM en los países endeudados distan muy poco de las medidas de austeridad que hoy día se aplican en Grecia, Portugal o España, y han supuesto en los países del Sur décadas de empobrecimiento, violación de los derechos humanos y aumento de las desigualdades.

Los movimientos y organizaciones sociales que luchan por la anulación de la deuda de los países del Sur han ido construyendo desde hace años una narrativa alrededor del concepto de *deuda ilegítima* y de la propuesta de realización de auditorías ciudadanas de la deuda. Entendidas, no como un fin en sí mismas, sino como un medio para evidenciar las irregularidades, irresponsabilidades e ilegalidades que se esconden bajo los procesos de endeudamiento, las auditorías deben permitir que se avance en el camino hacia el reconocimiento de la ilegitimidad de la deuda.

Desde sus inicios se han revelado en el 15-M voces que recogen esa narrativa, proponen la denuncia de la deuda por ilegítima y defienden la realización de una auditoría ciudadana en nuestro país. Ya en octubre de 2011 se celebró en Madrid el encuentro “Viviendo en deudocracia”, en el que movimientos que tradicionalmente trabajaban alrededor de los derechos de los pueblos del Sur, como ¿Quién debe a Quién?, y el propio 15-M se unieron para proponer una auditoría. Un camino que asumieron también movimientos similares en Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, Francia, Bélgica o el Reino Unido. El 15-M optó así, de forma casi natural, por aprender de las experiencias de los movimientos sociales en el Sur, incorporando sus propuestas y siguiendo sus pasos. Sin embargo, no resulta tan fácil incorporar a la dialéctica y las demandas del movimiento que aquello que exigimos para nosotras lo demandemos también de forma sistemática para los pueblos del Sur.

Se denuncia pues la injerencia de instituciones como el FMI en nuestra economía y nuestro sistema político, pero poco se habla de cómo esas instituciones han estado arrebatando la soberanía de los pueblos en el Sur durante décadas. En las demandas de una democracia real y participativa, de un retorno de la soberanía para el

pueblo, y del fin de la dictadura de los mercados, es importante agregar esta dimensión global, pues estamos luchando contra instituciones y mercados que actúan de forma idéntica en los diferentes rincones del planeta.

Otro de los ejes de protesta del movimiento del 15 de mayo ha sido inevitablemente la lucha por los derechos laborales. Aun así, el 15-M, al igual que el movimiento sindical, raramente ha abordado la cuestión de las reformas laborales desde una dimensión global. En muchas ocasiones, aquellas empresas que denunciamos en nuestro país por explotación laboral deslocalizan su producción o servicios a países del Sur en los que las sucesivas olas de reformas han arrasado con los pocos derechos laborales existentes. La denuncia no se puede quedar en reclamar una serie de derechos para nosotras —una protesta por derechos perdidos—, sino que tiene que contemplar los derechos laborales desde una perspectiva global. Aquellas empresas, bancos y mercados que denunciamos por tener secuestrada nuestra democracia suelen ser las mismas que denunciamos por sus acciones irresponsables y criminales en los países del Sur. Para luchar contra estos poderes fácticos, no sólo es necesario establecer estrategias de colaboración y trabajo en red en el ámbito internacional: hay que incorporar a nuestro análisis y a nuestras demandas la dimensión internacional de los impactos de esos actores.

Más allá de denuncias concretas o sectoriales, el análisis del 15-M sobre la crisis no debe dejar de lado la dimensión sistémica y multidimensional de ésta. Como repetimos a menudo, no se trata tan sólo de una crisis financiera y económica: la crisis es sistémica, con dimensiones políticas, sociales, energéticas y ambientales. Nos repiten constantemente el mantra de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” para retratar la connivencia de la población con las burbujas inmobiliaria y de crédito. Pero pocas veces se hace hincapié en la dimensión socioambiental de esa expresión. Si nos fijamos en los impactos sociales y ambientales que nuestro modelo de consumo y producción tiene sobre los pueblos del Sur, llegaremos a la conclusión de que, efectivamente, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades —y de las de

nuestros ecosistemas— y hemos adquirido una deuda ecológica y social con esos pueblos.

Si el 15-M pretende dar respuestas y plantear alternativas sistémicas a la crisis, no puede olvidar estas deudas. Sólo caminando hacia un nuevo modelo productivo, comercial y de consumo podemos asegurar que no estaremos violando la soberanía alimentaria y energética de los pueblos del Sur, o acumulando una mayor deuda con ellos. Además, si aspiramos a que esta ola de indignación vaya más allá de los países occidentales y sea realmente global, debemos ser capaces de ampliar nuestro discurso hacia una dimensión más general, aprendiendo del Sur y defendiendo al Sur, porque sus derechos son los nuestros. Para ello, es imprescindible construir verdaderas alianzas de cooperación sin repetir pautas eurocéntricas. Éste es un reto clave si queremos superar el recelo de la mayoría de movimientos del Sur hacia unas movilizaciones que de momento perciben como simples luchas en defensa de los privilegios perdidos.

CAPÍTULO 15
EN DEFENSA DE LA BANCA ÉTICA

RAÚL ASEGURADO PÉREZ[15]

En el contexto de surgimiento de la indignación, que se plasmó con el movimiento 15-M, uno de los vectores determinantes fue la constatación de la usurpación por parte de los intereses privados —de ese fantasma que recorre el capitalismo y que se llama *mercados*— de los espacios de poder políticos que deberían ser expresión de la soberanía civil. Esto se percibió de forma muy clara en lo relativo a los mercados financieros y a los excesos —por no llamarlos canalladas— que cometieron para aumentar su lucro a costa de lo que fuese, sin ética ni moral, y ni siquiera con el disimulo de la legalidad.

Todo esto favoreció un conocimiento más real de cómo funciona el sistema financiero convencional. Por un lado, poco a poco fuimos aprendiendo cómo incluso los Estados-nación son parte de la carnaza que la especulación financiera, cual parásito, es capaz de reducir a la mínima expresión de cuerpos anoréxicos. Por otro, empezamos a conocer cuáles eran las prácticas en materia hipotecaria, en la de inversiones, en lo que hace a las políticas salariales que afectan a los directivos e incluso en lo que se refiere a la implicación en el tráfico de armas.

Esta toma de conciencia favoreció el interés por lo que se viene a conocer como finanzas éticas o banca ética. Poco a poco se facilitó la visualización de distintas y complementarias iniciativas sociales, que con una sinergia creciente van englobando un proyecto amplio y plural en relación con las finanzas dentro de la lógica de la economía social; con sus valores y sus compromisos. En este sentido podemos explicar de forma breve y sencilla —y, por tanto, y con certeza, insuficiente— que en Europa se han dado dos modelos de finanzas alternativas. Si bien coinciden en la necesidad de reorientar la financiación hacia un modelo económico socioambientalmente responsable, exhiben diferencias grandes en su ADN. Esos dos modelos se conocen como el anglosajón y el mediterráneo o participativo. El anglosajón es aquel que, con diferentes fórmulas jurídicas, hace que una empresa o fundación sea la propietaria de la herramienta financiera, que ofrece a sus clientes la posibilidad de que sus ahorros estén al servicio de una sociedad más justa; se establece entonces una relación exclusiva de clientela, y no de base social. El modelo participativo, asumiendo los valores de la economía social, decide poner en marcha, en cambio, una herramienta financiera que sea propiedad de la sociedad civil, de personas y movimientos sociales, y que atienda a las necesidades que el compromiso por la regeneración de nuestra sociedad reclama.

En este segundo modelo, el participativo, pueden distinguirse tres niveles de intervención: el micro, el meso y el macro. El nivel micro lo configuran pequeñas o medianas asociaciones sin ánimo de lucro. Este nivel se conoce también como parabancario, ya que no está regulado por el sistema financiero. En la mayoría de los casos se trata de asociaciones autogestionadas en las que sus socios y socias aportan, por medio de participaciones, un dinero para su uso como fondo solidario. Con ese dinero se realizan préstamos a proyectos que necesiten financiación y que aportan un valor positivo en la sociedad (organizaciones no gubernamentales, cooperativas de producción agroecológicas, proyectos culturales, etc.). En muchos casos se asume un alto riesgo, ya que por medio de pequeños préstamos se potencian proyectos de autoempleo que

la banca convencional ha denegado; pensemos en parados o paradas de larga duración, en inmigrantes que no tienen aval económico ni patrimonial… De esta forma se realzan el compromiso de la sociedad civil por el derecho al crédito y la autogestión militante… Y se crea una relación de corresponsabilidad y cercanía entre las asociaciones.

El segundo nivel, el meso o intermedio, lo aportan asociaciones o cooperativas en las que los miembros son, o suelen ser, entidades jurídicas del mundo de la economía social que lo que hacen es asociarse para establecer una red de financiación sin tener que acudir a la banca convencional, dotándose al efecto de un mayor grado de autonomía y libertad. Así se crean sinergias entre estos colectivos y se fortalece su modelo económico.

Por último tenemos el nivel macro, o institucional, que dota a todo este modelo de finanzas alternativas de una estructura bancaria con capacidad real. El nivel macro, estrictamente de banca ética, se sustenta fundamentalmente en una estructura de participación y propiedad en la que participan los otros niveles de los que acabamos de hablar.

Los tres modelos mencionados han estado, unas veces en forma de declaraciones, otras a través de la construcción de sinergias organizadas, en esos espacios de autonomía que han sido las plazas y las asambleas de barrio o ciudad en el 15-M. Y es que en el proceso de crecimiento de la conciencia crítica, una de las mayores aportaciones del 15-M, la banca ética ha estado presente en los debates y propuestas de la gente del común. Desde la crítica al sistema financiero convencional hasta la cada vez mayor demanda de conocimiento sobre los modelos de banca alternativa. Poco a poco se ha ido *verificando* una doble relación. Por un lado se ha hecho valer la apuesta por la responsabilidad del ejercicio de la ciudadanía, en términos gramscianos, de conciencia y protagonismo: se trata de ser protagonistas de nuestras sociedades y de articular los mecanismos liberadores sin esperar a que alguien los cree. Por otro se ha revelado el entusiasmo de verse capaz de constituir una herramienta en un campo que siempre había sido cedido, en una u otra medida, a la lógica capitalista (sobre todo tras

la certificación del drama de las cajas de ahorro, que en vez de ser patrimonio del movimiento obrero se convirtieron —no se sabe cuándo— en herencia de la oligarquía capitalista). Estos dos elementos, la concepción teórica y la acción práctica, se han dado mientras personas y colectivos se sumaban a estas alternativas, al tiempo que éstas se han nutrido de nuevos desafíos que los colectivos han demandado de ellas.

Si atendemos al modelo participativo de banca ética en el Estado español, y en concreto al proyecto FIARE, podemos ver cómo las sinergias entre demandas reivindicativas y modelos participativos de construcción social armónica se cohesionan y fortalecen. La concepción propia del modelo participativo —a mi modo de entender único modelo real de banca ética— responde a esta cohesión: la banca ética la configuran proyectos de intermediación financiera que ofrecen los servicios bancarios habituales a personas y organizaciones. Unas y otras quieren atender a las consecuencias sociales de la actividad de crédito que se desarrolla con su dinero y reclaman que dicha actividad beneficie exclusivamente a los proyectos que contribuyen a la regeneración de nuestras sociedades. Se trata de ir mucho más allá del designio de no invertir en la industria militar, en actividades denigrantes con la biosfera o discriminatorias por género: se trata de potenciar la sociedad que queremos.

Así pues, de forma convergente con las demandas emanadas de las plazas, los proyectos de banca ética son propuestas de reocupación de la esfera pública por parte de personas y organizaciones que reclaman su derecho —y reconocen su deber— a articular sistemas de intermediación de acuerdo con una lógica alternativa a la propia del capitalismo neoliberal. Se vinculan con otras propuestas de la economía social en la búsqueda de la transformación desde la perspectiva de la igualdad, la libertad y la fraternidad. En definitiva, perfilan una respuesta bancaria que antepone el valor de la persona y de lo social —lo colectivo, el bien común— a la primacía del capital; invierten esta lógica en la construcción de valores sociales y ponen el acento en la cuestión social entendida en el sentido más amplio.

Es por esto por lo que el 15-M, en la construcción de su discurso —un proceso vivo y dinámico que no puede estar exento de contradicciones, pluralidad y heterogeneidad—, debe apostar por los espacios de autonomía de la sociedad civil, por la construcción de modelos autogestionados y por la visibilización de proyectos que nazcan del ejercicio de la soberanía ciudadana. La banca ética tiene que estar en manos de aquellas personas y entidades comprometidas con la regeneración de nuestras sociedades injustas, y ésta es una de las banderas del 15-M. Como quiera que esas personas y entidades saben de las necesidades de la sociedad, el movimiento debe alinearse, como una herramienta más, con ellas, dotándose al respecto de una estructura de propiedad y desarrollando una estrategia de crecimiento respetuosa en manos del músculo asociativo que se vaya perfilando.

Como movimientos cívicos, el 15-M y la banca que nos ocupa, partiendo de una mirada ética de la intermediación financiera, se encuentran con un horizonte irrenunciable: el del derecho al crédito como derecho de ciudadanía. La banca ética llega a una conclusión paradójica: no puede limitarse a desarrollar una intermediación financiera garantizada, pues, como ocurre en muchas otras propuestas de alternativas, es necesario tejer circuitos solidarios de producción-distribución-consumo que impliquen redes ciudadanas en una acción colectiva *contra corriente*. Por sí sola la banca ética no da respuesta a todas las injusticias. Es una herramienta al servicio de muchas otras respuestas que se están dando. Y que se recogen en este libro.

CAPÍTULO 16
LO QUE SIGNIFICAN LAS COOPERATIVAS INTEGRALES

ENRIC DURAN[16]

Las cooperativas integrales abren un proceso para subvertir la salvaje realidad que padecemos como sociedad y como parte implicada de un sistema, el de dominación capitalista, gestionado por unos pocos y apoyado y mantenido por el aparato estatal, que es quien le da de comer. Son, por tanto, una herramienta para construir contrapoder, contrapoder desde la base, partiendo de la autogestión, la autoorganización y la democracia asamblearia y directa. Nos ofrecen un camino para transitar desde la actual dependencia con respecto a las estructuras del sistema hacia un escenario de consciencia plena, libre de autoridad y en el que todos y todas nos podamos desarrollar de forma cabal y en igualdad de derechos y posibilidades.

Se trata de una propuesta constructiva de desobediencia y autogestión generalizada para reconstruir la sociedad desde abajo —en todos sus ámbitos y de manera integral—, recuperando las relaciones humanas y afectivas, de proximidad y basadas en la confianza.

Una de sus líneas de trabajo, que las diferencia de otras propuestas de transición, es la práctica de la desobediencia económica ante las estructuras del Estado —impuestos, Seguridad Social, etc.— como uno de sus ejes básicos de acción cotidiana. Esta línea de acción está impulsando la construcción de un nuevo modelo productivo apoyado en un emergente sistema público cooperativo y está consolidando a la vez la estructura operativa de la propia cooperativa integral.

Tras el inicio de la Cooperativa Integral Catalana, en mayo de 2010, y después de la eclosión del 15-M el año siguiente, a partir de septiembre de 2011 hemos asistido al despliegue de múltiples procesos embrionarios de cooperativas integrales en diversos territorios. Es el caso de las cooperativas integrales valenciana, madrileña, riojana, aragonesa, granadina, asturiana, gallega, y también el de Auzolan, un proceso similar en Euskalherría.

La cuestión estratégica es esencial para poder asegurar la recuperación del 15-M —o como quiera que llamemos al movimiento unitario de oposición social y popular al *statu quo* en el Estado español— con la misma fuerza o mayor de cuando se creó. Cuando reflexionamos sobre las estrategias de acción para transformar la sociedad en el ámbito político, a menudo vemos que se llega a un callejón sin salida, al darnos cuenta de que ninguna de las propuestas nos parece suficientemente aplicable, ya que las movilizaciones ante los grandes temas de la agenda política actual, por mayoritario que sea su apoyo, siempre se encuentran ante sí con la cuestión del poder: las decisiones las acaban tomando quienes tienen el poder de hacerlo, por minoritario que sea el apoyo que reciben.

Ese poder emana de distintas fuentes: el control de las grandes empresas, el del dinero, el de los medios de comunicación masivos, el de la violencia mediante la policía y el ejército.... Así pues, cuentan, entre otros, con los bancos, los *lobbies* y las instituciones internacionales para dirigir las políticas públicas, de modo que las reformas —o las movilizaciones de autodefensa— planteadas en ámbitos como la economía, la ecología, la educación y la salud, son casi inalcanzables si no transformamos previamente el propio

sistema político o generamos un contrapoder desde el que construir una nueva soberanía popular.

En el momento en que se escribe este artículo está circulando por internet la propuesta de tomar el congreso el 25 de septiembre de 2012. De alguna forma ésta es una de las últimas estrategias posibles basadas en la movilización. Aunque para muchos pretende ser la estrategia definitiva, ¿qué ocurrirá en el supuesto de que tenga éxito y se disuelvan las cortes? ¿Qué sucedería si una organización política empezase a actuar en beneficio de la población? Entonces, y para que el cambio social fuera real y de largo alcance, habría que generar experiencia organizativa en gestión económica, en políticas de educación, de salud, de vivienda, del pueblo para el pueblo... Pero ¿vamos a esperar al día siguiente de la revolución para aprender todo ello, o vamos a generar una experiencia de construcción de sociedad que sea válida para cualquier situación que se pueda dar en el incierto futuro que se nos presenta?

En muchos espacios sigue vivo el debate sobre qué estrategia hay que seguir para reforzar el movimiento social ante lo que se avecina. Muchas de las propuestas, basadas en la reivindicación de reformas que den base legal a un sistema basado en una democracia directa y participativa, son incapaces de responder a esta pregunta: ¿qué haremos nosotros si el poder no acepta nuestras reivindicaciones (la opción más probable, por otro lado)? Las cooperativas integrales aportan al 15-M una de las pocas respuestas vivas, que se van ganando un lugar en el imaginario colectivo. De ahí seguramente la multiplicación de iniciativas de cooperativas integrales que, tras la referencia de la cooperativa catalana, han germinado desde personas y grupos en buena parte vinculados al 15-M.

La autogestión aplicada en el terreno político tiene mucho que ver con lo que se vivió con la generación de reuniones en las plazas y con la constitución de asambleas populares. Pero a esto último le ha faltado una visión estratégica, una especie de plan que permitiera imaginar, paso por paso, todo lo que es necesario hacer para el

desarrollo exitoso de una asamblea popular y, más allá de ella, de un sistema de organización basado en asambleas populares.

La estrategia del autogobierno consistiría en dedicarnos desde el movimiento organizado a ir creando y ampliando mecanismos presenciales de participación directa, como asambleas y consultas populares, para al mismo tiempo ir asumiendo la capacidad de contrapoder suficiente para hacer que sean vinculantes como lo son ya, por ejemplo, y en muchos casos, las decisiones/acciones de detener los desahucios.

Cuando hablamos de construir un nuevo sistema desde la autogestión, es importante reseñar que el objetivo debe ser cubrir las necesidades básicas de todos y todas mediante la acción colectiva. Algunas de estas necesidades serían la alimentación, la educación —y la cultura popular—, la salud, la vivienda, el transporte y la energía, por citar las más relevantes. Una labor de la cooperativa integral, a la que sería importante que cada vez más grupos del entorno del 15-M se sumaran, consiste en recuperar lo público, entendido como bien colectivo, no estatal ni privado, forma originaria de gestión emanada de la cooperación entre humanos.

No podemos seguir defendiendo el mantenimiento de lo público estatal a cualquier precio. Los servicios correspondientes deben existir para dar satisfacción de lo que se espera de ellos, y no para mostrarse contradictorios con su objetivo, como sucede en el momento actual (la sanidad mata, la educación nos hace esclavos). Así las cosas, necesitamos cambiar nuestro prisma de visión y recuperar esos servicios en un formato que realmente revierta en beneficio de las personas.

Una línea de acción tangencial a todos los proyectos autogestionados es la de alentar la colectivización de bienes, terrenos y viviendas; otra línea de trabajo clave consiste en promover la salud, la educación pública y el derecho a la vivienda como servicios autogestionados al margen del monopolio doctrinario establecido por el Estado y el mercado capitalista.

Puede parecer utópico, pero se trata de una realidad en construcción que está creciendo a buen ritmo. Para que las cooperativas integrales puedan consolidarse y responder cada vez

mejor a mayores retos, lo que se necesita es que cada vez más personas comprometidas con el cambio social participen de ellas y sean capaces de dedicar energías y confianza en un proceso que, a diferencia de muchas otras cosas, depende sobre todo de nosotras mismas.

CAPÍTULO 17
EL PARO: UN DISPARATE CRUEL Y EVITABLE

BIBIANA MEDIALDEA[17]

Si un ser de otro planeta aterrizara en el nuestro, una de las cosas que más le costaría entender es el papel que desempeña el desempleo en nuestra sociedad. Al sistema capitalista prácticamente siempre le sobra gente dispuesta a trabajar. Y no es porque las principales necesidades sociales ya estén cubiertas. En realidad, lo habitual es que la insuficiencia de ciertos bienes y servicios conviva con un *excedente* de fuerza de trabajo en esos mismos sectores.

Cualquiera sabe, por ejemplo, que nos faltan escuelas infantiles. Y, sin embargo, nos *sobran* educadores. Carecemos de servicios de atención a la dependencia, pero acumulamos *excedente* de personal cualificado en la materia. Precisamos avanzar en áreas de conocimiento claves para el progreso social, pero resulta que tenemos *demasiados* investigadores. De hecho, nos permitimos exportarlos. Cualquier ser, extraterrestre o no, capaz de dar un paso atrás y analizar con cierta objetividad la lógica de este nuestro sistema capitalista se quedaría de piedra.

Pero así son las reglas con las que permitimos que se organice nuestra sociedad: no es la disponibilidad de personas capacitadas y

dispuestas a desarrollar una tarea, ni la necesidad social de que se lleve a cabo, sino su rentabilidad, lo que determina que dicha actividad se realice o no. El problema es que la rentabilidad privada a corto plazo como criterio supremo para la toma de decisiones suele obtener resultados disparatados, si se analizan desde el sentido común más elemental. Y el disparate alcanza cotas demenciales en situaciones de crisis como la actual.

¿Cómo explicar que es precisamente cuando la sociedad tiene mayores problemas económicos cuando más gente capaz y dispuesta a trabajar nos *sobra*? No hace falta ser de otro planeta: cualquiera con dos dedos de frente detecta el sinsentido de la situación.

Puede que los datos estén perdiendo ya la capacidad de impresionarnos, pero no debiéramos dejar de dimensionar el despropósito. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el segundo trimestre de 2012 el número de personas en situación legal de desempleo se acercaba a los seis millones, lo que significa que de cada cuatro personas que pueden y quieren trabajar, hay al menos una que no puede hacerlo. Casi la mitad de la población en paro lleva más de un año sin trabajo, y ésa es aproximadamente la proporción de desempleados que no accede a ninguna prestación ni subsidio. Nadie, ni el Gobierno, ni el FMI, ni el BCE, ni el más osado de los tertulianos, se atreve a negarnos que la situación no sólo no va a mejorar en el corto plazo, sino que empeorará. Como siempre, tras los promedios se esconden realidades aún más insoportables. Por ejemplo, entre la juventud ya hay más personas en desempleo que trabajando. Y tengamos en cuenta que la gente joven es el espejo en el que se anticipa nuestro futuro colectivo: una juventud sin futuro es una sociedad desahuciada. Un último dato demoledor: actualmente hay casi 1.800.000 familias en las que ningún miembro tiene un empleo legal, por precario que sea.

Además, hay que considerar que el desempleo coexiste con otros rasgos también típicos de nuestra economía y que ahora se agudizan: precariedad, bajos sueldos, derechos sociales y económicos incompletos, servicios públicos insuficientes, parte importante de la población desvinculada del mercado laboral formal

por razones *ajenas a su voluntad* —que por tanto no *sale* en las estadísticas— y un desgraciadamente largo etcétera. Y, como sabemos, la catastrófica situación laboral desencadena múltiples procesos de exclusión económica y social. El caso de las familias desahuciadas de sus viviendas habituales, o el de las personas que no pueden financiar el coste de los medicamentos que necesitan, sería suficiente para convencer a nuestro visitante marciano de que la lógica que rige nuestra sociedad no sólo es disparatada: también es muy peligrosa.

Seguramente el 15 de mayo de 2011 la mayoría de nosotras no éramos capaces de imaginarnos la velocidad con que seguirían sucediéndose los ataques en el terreno del empleo y los derechos laborales. Sin embargo, cuando en uno de sus primeros encuentros en la plaza del Carmen de Madrid la nutrida asamblea de economía de Sol decidió dividirse en subgrupos temáticos, todo el mundo vio con naturalidad que uno de los primeros en formarse fuera el de *laboral*. Al poco de acomodarnos en la esquina de la plaza que nos fue asignada, fuimos conscientes de la dificultad del ámbito delimitado. ¿Laboral? El listado de problemáticas que nos sentíamos obligadas a tratar era amplio y complejo. Inabarcable, llegamos a pensar. Pero rápidamente vislumbramos que el paro, como problema en sí mismo y como manifestación de una determinada forma de entender la organización social del trabajo y la riqueza, ocuparía un lugar central.

En efecto, las discusiones de aquel subgrupo de laboral, que luego iban siendo socializadas en la asamblea de economía, se estructuraron en gran medida en torno al paro y sus problemáticas asociadas. Visto con perspectiva, y teniendo en cuenta la improvisación reinante y la enorme heterogeneidad de las asistentes, cabe felicitarse por no pocas de las cuestiones analizadas. No tardamos, por ejemplo, en detectar las trampas del discurso productivista, que utiliza la creación de empleo como mantra que pretende justificar cualquier iniciativa generadora de puestos de trabajo, por muy insensata que sea desde el punto de vista medioambiental. El grupo concluyó sin mayor dilación que el desempleo es un problema gravísimo, pero que la insostenibilidad

ecológica del actual modelo también lo es, por lo que las alternativas propuestas deberían ser coherentes con ese diagnóstico.

Las reflexiones en torno a la consideración del trabajo reproductivo también ocuparon un tiempo importante. La necesaria equiparación completa del estatus laboral de las trabajadoras domésticas pareció una cuestión obvia, pero el tratamiento de aquellas tareas reproductivas que se llevan a cabo al margen del mercado fue más complejo. Las trampas de la mal llamada *conciliación*, la importancia de reivindicar unos servicios de educación infantil y atención a la dependencia que fuesen públicos, de calidad y gratuitos, o el papel crucial de los horarios y los permisos de maternidad/paternidad fueron aspectos ampliamente debatidos.

La discusión sobre éstos y otros temas puso al descubierto cómo el hecho de imaginar alternativas en torno a la problemática del (des)empleo nos obligaba a conectar con propuestas de otros ámbitos, avanzando de esta forma hacia fórmulas cada vez más globales y coherentes. Elementos como una fiscalidad potente y muy progresiva, una red de servicios públicos amplia y de calidad, o un sistema de pensiones justo y suficiente se descubrieron piezas necesarias dentro de un esquema amplio en el que el desempleo podría dejar de ser un problema.

Quizás sea anecdótico, pero en todo caso resulta muy significativo que entre las dos propuestas de *laboral* que tuvimos que elegir para incluir en el documento consensuado por la asamblea de economía de Sol (http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/06/propuestas-abiertas-de-la-comision-de-economia-sol/) estuviera la “reducción efectiva de la jornada y la vida laboral”. Explícitamente, el texto consensuado señalaba el reparto del empleo como instrumento para “la redistribución de la riqueza y de todos los trabajos (también de los que se realizan en el ámbito doméstico)”.

Con la que está cayendo puede parecer una ingenuidad mayúscula. Sin embargo, lo cierto es que la alternativa de repartir el empleo es una fórmula sencilla y eficaz, no sólo para acabar con el paro, sino también para conseguir un reparto más equitativo de la

riqueza y caminar hacia una mayor racionalización de la producción, del consumo y de nuestro tiempo. En nuestra sociedad el empleo es el mecanismo básico que permite el acceso a los ingresos, los derechos y el espacio público. Lo más lógico, por tanto, es organizarlo de forma que ningún colectivo quede excluido. Por otra parte, vidas y jornadas laborales demasiado largas son causa de múltiples problemas, tanto de orden personal como social.

Aunque partidos y sindicatos mayoritarios obvien la evidencia, la idea de repartir el empleo es de una lógica aplastante: nuestra sociedad se lo puede permitir y las ventajas asociadas saltan a la vista. El problema, como sabemos, es que la rentabilidad cortoplacista que rige el sistema y el sentido común que puede salvarnos del desastre apuntan en direcciones opuestas. Pero ése es, precisamente, el mayor logro del movimiento hasta el momento: construir y difundir un sentido común colectivo que apele a nuestra inteligencia y a nuestro sentido de la justicia. Aunque desafíe, qué le vamos a hacer, las reglas de este disparatado sistema.

CAPÍTULO 18
LA RECUPERACIÓN DE LA VIDA RURAL

ENRIQUE DEL RÍO, RAQUEL RAMÍREZ Y JEROMO AGUADO[18]

Desde hace muchas décadas se está produciendo un deterioro constante en el medio de vida rural, provocando la desaparición de muchos miles de agricultores y agricultoras, y con ellas de sus formas de vida, su cultura, su organización social y sus prácticas agroecológicas, que daban respuesta de forma duradera a las necesidades de la gente, sin poner en riesgo los derechos de las generaciones futuras.

La sociedad necesita pueblos con vida, campesinos y campesinas que produzcan alimentos para sus comunidades y que gestionen los recursos naturales que permiten mantener los ecosistemas que nos dan sostén en el planeta: la tierra, los bosques, las semillas, el agua… Sin embargo, se ha roto la alianza con la naturaleza —utilizando productos químicos nocivos, contaminando grandes áreas de tierra y de acuíferos, perdiendo miles de especies vegetales…— y los pueblos y sus pobladores no interesan en la lógica productivista de crecimiento y consumismo sin límites, de enriquecimiento de una minoría de conglomerados económicos y financieros que promueven un modelo de desarrollo que sólo sirve a ellos, pero no a la población.

La Política Agraria Común (PAC) ha sido la mejor herramienta para poner la puntilla a la muerte anunciada del medio rural, integrando a la gente del campo —excepto raras excepciones— en las lógicas del capital internacional y convirtiendo a los campesinos en empresarios agrícolas al servicio de la industria agroalimentaria. La PAC está boicoteando los procesos de incorporación de jóvenes a la agricultura, tanto más si estos últimos desean desarrollar una agricultura de pequeña escala y ecológica. Todos los apoyos económicos para la vuelta al campo están diseñados con el propósito de afianzar la agricultura industrializada, dejando desplazados a muchos jóvenes que desearían volver al medio rural. La falta de políticas públicas que acompañen estos procesos de regreso y las dificultades para acceder a la tierra, a la vivienda o a los servicios públicos son algunas de las barreras que hay que superar.

Con el falso pretexto de que los pueblos pequeños no son rentables financieramente, se reducen constantemente los servicios dispensados a la población rural. Y ello aunque se puede demostrar con datos oficiales que los pueblos pequeños no son deficitarios, porque sólo gastan los recursos que tienen. Son las grandes urbes las que acumulan casi toda la deuda de los ayuntamientos: 48 ciudades deben mucho más de la mitad de toda la deuda del territorio español.

Al mismo tiempo, la vida y la cultura del campo, de los pueblos, ha sido minusvalorada. Se ha creado una conciencia ciudadana de que vivir en los pueblos es algo muy difícil —aquéllos sólo sirven como lugar de esparcimiento de los ciudadanos de las urbes—, de tal suerte que lo mejor es emigrar a las ciudades, consolidando un modelo de economía, de vida y de pensamiento único. Las pocas personas que residen en los pueblos han vivido estos procesos soportando los valores del modelo que los excluía, pero integrando los valores de la cultura del consumo y del tener... A esas personas, aunque llenas de contradicciones con las nuevas prácticas productivas impuestas por el modelo agroalimentario industrial, les debemos lo poco o mucho que nos queda de la cultura rural.

Aunque las importantes minorías que durante muchos años llevan trabajando por defender las tierras, la educación, la atención sanitaria, el agua, el empleo, los mayores, la infancia, la juventud, la memoria colectiva, el medio ambiente, la agroecología, etc., han seguido y siguen haciéndolo antes, durante y después del 15-M, el estallido de este movimiento ha servido de impulso favorable para llegar a más gentes.

En los pueblos hay muchas experiencias que promueven el cuidado de los unos por los otros, organizan servicios de transporte para responder a las deficiencias de los servicios públicos, planifican la ayuda mutua en provecho de las personas que precisan de apoyos para ir al médico, al "practicante"… en un intento de ser más comunidad. Hay lugares donde los vecinos y vecinas ceden sus tierras para que la gente las siga trabajando y se mantengan empleos, ingresos y trueques con personas y entidades de sus pueblos y del entorno. Incluso algún ayuntamiento ha cedido tierras para ayudar a sus vecinos a salir adelante… La apuesta por recuperar las plazas y lugares públicos es permanente…

De hecho, en la última década se aprecia un nuevo impulso por parte de las generaciones más jóvenes, tanto de los que nunca se fueron como de los nuevos pobladores que retornan a sus orígenes campesinos, convencidos de que no hay futuro sin tierra, sin agua, sin alimentos naturales y sin medio ambiente sano. Retoman la antorcha junto a los agricultores y agricultoras mayores, que defienden sus semillas autóctonas para garantizar nuestra soberanía alimentaria, que son los que producen agricultura y ganadería ecológica, con el objetivo de favorecer nuestra alimentación saludable, a pesar de los cientos de trabas burocráticas que se les impone para dificultar su existencia…

El impulso del 15-M ha servido para generar un medio favorable a muchos nuevos pobladores que en los últimos años han aportado sus inquietudes y sus formas de abordar nuevas alternativas en el mundo rural, y que han promovido de resultas muchas experiencias de bancos de tiempo, trueques o monedas sociales que están permitiendo responder a problemas diarios que tiene la población. Sobre todo la más afectada por la reciente crisis, que puede

beneficiarse de muchos servicios gracias al uso de la moneda social que adquieren merced a los propios servicios intercambiados. Se están produciendo acuerdos entre campo y ciudad, y relaciones entre productores ecológicos y consumidores, al tiempo que se están sentando las bases para fortalecer mercados sociales más justos y equitativos…

A pesar de algunas reuniones entre organizaciones rurales, la problemática rural apenas ha sido recogida, sin embargo, en el conjunto del 15-M del territorio español, que ha movilizado sobre todo a la población joven de las ciudades. El 15-M ha tenido, eso sí, un efecto mediático en los pueblos, de manera que estas minorías rurales se han sumado solidariamente a las reivindicaciones más urgentes levantadas en el mundo urbano, como, por ejemplo, a través del apoyo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Pero no ha habido un debate generalizado sobre los graves problemas que el mundo rural viene sufriendo y arrastrando.

Desde el mundo rural apostamos por la compenetración con la naturaleza, tratando de reducir significativamente la huella ecológica humana, avanzando hacia formas equitativas de producción y consumo que garanticen la sostenibilidad del desarrollo de nuestra tierra y su población, y evitando la dependencia con respecto a las semillas transgénicas de las empresas multinacionales. No podemos apoyar una economía que sobreexplota la naturaleza como si ésta fuera inagotable, con el pretexto de sacar beneficios que son únicamente económicos…

Necesitamos producir y comer de lo nuestro, aplicando estrategias de producción y consumo interno en las que participemos todos y en las que planifiquemos lo que hace falta producir, promoviendo así una ética de la suficiencia. Produciendo sólo lo que verdaderamente se necesite y asumiendo todos los mismos riesgos. Desarrollando el territorio en beneficio de nuestra población para frenar el aumento de la dependencia con respecto a intereses ajenos.

Queremos recuperar la vida en el medio rural como una alternativa al modelo de desarrollo capitalista, apostando por otros modelos sustentables, con rostro humano, locales y campesinos.

Mientras en las ciudades la población se hacina, a lo largo y ancho de nuestra geografía hay muchos espacios vacíos. Creemos que el mundo rural es una oportunidad para gente joven que quiera volver al campo con el propósito de aplicar otros principios y valores más humanos, de aprender a vivir con lo suficiente y de relacionarse con la madre Tierra. Hablamos de jóvenes que quieran sumarse a la lucha por la autonomía de nuestras vidas y de nuestros pueblos, cooperando entre todos los territorios para construir modelos de desarrollo más humanos. En definitiva, queremos autogestionar nuestras vidas por nosotros mismos.

Para ello son necesarias plataformas que faciliten el encuentro entre las personas que a trancas y barrancas seguimos manteniendo vivo el mundo rural y los grupos de personas de procedencia urbana que anhelan vivir en el campo. En este terreno desempeñan un papel muy importante redes que, como la Plataforma Rural, han facilitado a lo largo de los últimos veinte años las alianzas entre el campo y la ciudad.

CAPÍTULO 19
NECESITAMOS MEDIOS RADICALMENTE DEMOCRÁTICOS

PATRICIA MANRIQUE[19]

En esta atmósfera de despertar, participación y aprendizaje colectivo que vivimos desde el 15 de mayo de 2011, el hecho de consumir, compartir y generar información ha desempeñado un papel esencial en la aparición de un horizonte crítico anteriormente habitado sólo por minorías. En la medida en que nos íbamos dando cuenta de nuestra capacidad para generar, seleccionar y difundir noticias relevantes, antes ocultas u obviadas, se ha ido cuestionando la legitimidad de los medios convencionales, obscenamente serviles con los grupos políticos y mediáticos que los financian. Sin embargo, no es éste su único condicionante: el modo de producción vertical de dichos medios y su carácter esencialmente unidireccional son también elementos claves para analizar qué produce esa depauperada legitimidad.

Frente a ese modelo, el 15-M ha abogado, y no sólo en el ámbito de la comunicación y la información, por la cooperación, la producción colaborativa, la horizontalidad y la bidireccionalidad, empoderando un paradigma alternativo que ya estaba en marcha en

medios surgidos de los movimientos sociales. Ese paradigma se ha materializado en medios y proyectos propios —periódico 15-M, *tomalatele*, Ágora Sol Radio, 15-M.cc...—, además de en las propias asambleas, a su vez nutridas y nutrientes de blogs, webs y boletines locales, y en los intercambios en unas redes sociales incendiadas de actualidad. Tanto el flujo de la información como su proceso productivo son factores esenciales para actuar con claves adecuadas que faciliten la agregación de quienes, aun sin consciencia de ello, pertenecen al pueblo, al 99 por ciento, a la inmensa mayoría.

La información, el relato sobre cómo operamos, la descripción real y en detalle, cuantificada y/o encarnada, de cómo funcionan la política, la sociedad, la economía y la cultura, es el espejo en el que se refleja buena parte de nuestra existencia en comunidad y, por ende, el lugar donde nos reconocemos nosotros y nosotras mismas. De cómo se exponga esto depende aquello que se denomina *opinión pública*, algo que, si afecta a todas y todos, debería construirse colectivamente también. Una información desvirtuada, constantemente mediatizada por el poder, no sólo falta interesadamente a la verdad y oculta las fallas, coyunturales o estructurales, del sistema, sino que genera sumisión e infelicidad, convirtiendo lo comunicado en *real*, robándonos el contexto e invisibilizando los detalles incómodos, cuando no condenando nuestras vidas a la anomia por no adecuarse a lo supuestamente mayoritario. Obligadas a una lectura monolítica y sesgada, carecemos de la posibilidad de insertar la situación de cada cual en un contexto que la haga inteligible: se impide así el desarrollo de la capacidad crítica y de transformación de todo aquello que no funcione. Por todo ello, es necesario un cambio integral y profundo del proceso de producción, difusión y, por supuesto, recepción de la información. No será suficiente llevar a cabo un lavado de cara, regenerar o sustituir grupos mediáticos o plantillas. Necesitamos medios radicalmente democráticos.

Debemos y podemos tomar las riendas, como lectoras y lectores, del terreno en el que operan los medios de comunicación, un terreno hasta ahora reservado a grandes grupos económicos y a

expertos seleccionados por el sistema. Podemos hoy más que ayer, dado que, de la mano de la web 2.0, los canales por los que la información fluye se han ido abriendo, en mayor o menor medida, a la participación y la validación distribuidas. La multiplicación de las vías de comunicación dificulta que la información se manipule sin que la operación se evidencie.

Ahora bien, no se trata sólo de eso. No se trata únicamente de un cambio de actitud ante medios que, adaptados al nuevo formato, hagan posible la interacción desarrollando la bidireccionalidad. El verdadero desafío estriba en la propia construcción de esos medios radicalmente democráticos que necesitamos. Y debiéramos hacerlo cuanto antes, porque la información es un procomún, algo que circula entre nosotras y que, siempre haciéndose, exige y funda un compromiso con los demás, tanto en su producción como en su gestión, porque forma parte de ese patrimonio valioso que marca nuestro destino común, que sirve de base a nuestro devenir colectivo. Por ello, no debemos pedir a la información únicamente veracidad, sino también responsabilidad, consciencia de que se trata de un bien colectivo, que pertenece a lo común. Sólo así podremos cortocircuitar el paradigma privatizador e individualista, el que inmuniza ante lo común, y abogar, en esto como en todo, por un universo de reciprocidades y cuidados de lo que, no perteneciendo a nada ni a nadie, sino a todas y todos, compartimos, y del cual debemos hacernos cargo, protegiéndolo y mejorándolo.

Desde el punto de vista económico, disponemos de herramientas, desde el *crowdfunding* a las cooperativas, pasando por el sistema de accionariado popular mediante suscripciones, que permiten que seamos nosotras y nosotros, el pueblo, el 99 por ciento, la inmensa mayoría, quienes estemos detrás de las noticias, análisis, reportajes, programas... En el escenario actual no sólo no es posible la objetividad, sino que lo que se instaura como objetividad es el discurso del poder. Por ello, si somos todos y todas quienes estamos detrás de los medios, podremos velar, y exigir que esos medios, rigurosos, honestos y veraces, no ofrezcan una imagen interesadamente distorsionada de la realidad.

Por lo que se refiere a la producción, podemos y debemos poner en marcha proyectos horizontales y colaborativos en los que la información sea rigurosa, honesta y veraz. La horizontalidad no sólo mejora el ambiente de trabajo allá donde la información se produce, sino que posibilita que en el proceso productivo se aúnen y desarrollen, compartidos, los saberes de quienes participan en él, y que aumente la calidad de las informaciones, generadas mediante inteligencia colectiva. Nuevos modos de producción distribuidos, en red, como el diseño de *software* libre, nos han mostrado una forma diferente de hacer las cosas con un gran nivel de operatividad que, alejada de una cultura privativa, incide en lo colaborativo. Si de producción de información tratamos, es más completa la visión de un colectivo que la de una sola persona. Ésta es en sí misma una primera validación: el hecho de que todas las personas que trabajen, por ejemplo, en una redacción, tengan voz y voto en la organización y tratamiento de los contenidos.

Ahora bien, una cosa es que apostemos por la horizontalidad y otra que neguemos la mediación. Podríamos reconocer sin rubor que, a menudo, en ese intenso proceso de aprendizaje que se vive en las plazas, han surgido problemas por entender la horizontalidad de forma poco operativa. Temiendo —en exceso— caer en la verticalidad, se ha pecado en ocasiones de extrema dispersión. Parece que, con el tiempo, hemos ido aceptando que la facilitación es una labor para el bien común y acompaña el proceso de decisión sin restarle horizontalidad. Con la producción y difusión de información puede suceder algo parecido. Lo cuestionable no es la mediación en sí, sino la mala mediación, la vertical, la unidireccional, la no distribuida. Es razonable y conveniente que algunas personas con experiencia profesional, esto es, con saberes artesanos, se hagan cargo de la verificación y edición de los contenidos, de su selección y jerarquización. Que así sea no significa en absoluto que se produzca de arriba abajo: se trata de que esas personas hagan de facilitadoras, de que vehiculen adecuadamente las inquietudes e informaciones que vienen de la comunidad a la que ellas mismas pertenecen. Y esas personas, por supuesto, tienen que desempeñar su trabajo desde la responsabilidad para con el procomún: formarse

constantemente, amar la verdad y amar comunicarla de un modo inteligible para todas y todos.

Medios con estas características no necesitamos sólo uno, sino muchos. Descentralizar, colaborar, dejar de competir. Nada de *el definitivo* o *el mejor*, sino muchos. Olvidar el afán por las exclusivas, porque la verdad no pertenece a nadie: forma parte del procomún. La información es de todas y todos, de cosas que nos afectan, de cosas que compartimos, y cuanta más información, mejores informaciones vendrán detrás. La información así concebida podría y debería poder copiarse, dejando atrás ese modelo tan caduco como inviable que es el *copyright* y abriendo paso, sin ambages, a las licencias libres, al *copyleft*.

Si nos mean y los medios —corporativos— dicen que llueve, tomemos los medios con todo el bagaje recogido en las plazas. Y embarquemos en ésta, como en tantas otras empresas emocionantes, a todos aquellos profesionales que puedan poner su saber hacer al servicio de lo común.

CAPÍTULO 20
15-M Y MUNICIPALISMO ALTERNATIVO: OTRA POLÍTICA ES POSIBLE

GEMMA UBASART-GONZÀLEZ[20]

Ni las más optimistas podían imaginar que tras las marchas que llenaron las calles de más de sesenta ciudades del Estado español el 15 de mayo de 2011 seguiría una irrupción masiva de movilización. El 15-M tenía razones objetivas para surgir, pero la expresión del disenso no puede provocarse —ni explicarse— con lógicas mecanicistas. Y en aquel momento, como si de magia se tratara, una conjunción de fenómenos coyunturales y estructurales posibilitó la explosión. Las calles y plazas se llenaron de color, de ilusión, de denuncia y de política, de mucha política. Académicos, periodistas y tertulianos obsesionados en dibujar una sociedad impregnada por la *desafección política* se quedaron sin esquemas. Una vez más se ponía sobre la mesa, como apunta Jordi Bonet, que lo que existía era desafección frente a una clase política o, mejor dicho, frente a un tipo de política.

El 15-M enunciaba de forma masiva cuestiones sustantivas pero también procedimentales. Las plazas y las redes sociales nos decían que debe hacerse una política al servicio de la ciudadanía,

pero también con la ciudadanía. Se exigía una respuesta real —no simplemente retórica— a la crisis económica desde posiciones transformadoras, pero también se recordaba que los aparatos de los actores políticos clásicos —partidos, sindicatos y organizaciones sociales— ya no tienen, y es bueno que así sea, el monopolio de la acción. Además, aquella irrupción movimentista supuso amplios procesos de socialización política de jóvenes y no tan jóvenes. Así pues, la ruptura masiva del consenso neoliberal, y la salida del silencio y la pasividad, fueron las grandes aportaciones del 15-M.

Vivimos un momento de cambio de época. Y los movimientos sociales —que, como nos ha enseñado la historia, siempre van por delante— intuyen y muestran respuestas emancipadoras a las modificaciones regresivas de modelo. Es lo que ha hecho el 15-M. Pero también lo que están haciendo otras experiencias innovadoras, como el municipalismo alternativo y popular que apuntaré a continuación. Para comprender el surgimiento de ambas realidades políticas debemos ir un poco más allá en el análisis. Debemos considerar que, además del clásico *cleavage* ideológico —y el nacional en el caso de los Països Catalans, Euskalherría y Galiza—, el nuevo milenio ha venido acompañado del surgimiento de un nuevo eje de fractura: el que enfrenta formalismo político institucional y acción política no exclusivamente institucional (como lo bautizaba Joan Subirats en un artículo de opinión). Lo que decíamos: otra política en contenido, pero sobre todo en forma.

Llegadas aquí, toca explicar qué es esto del municipalismo alternativo y popular. En la última década, y sobre todo tras las elecciones locales de 2007, en Catalunya se han creado candidaturas alternativas y populares a partir de la confluencia de diversos actores locales del tejido y los movimientos sociales. En la actualidad ya podemos contar un centenar de ellas. Se trata de espacios de agregación política que también participan en el juego electoral, de experiencias municipalistas de movimiento. Desde el mundo local trabajan para construir la unidad popular. Tienen un modelo de municipio como apuesta —inclusivo, sostenible, participativo—, pero también defienden otra manera de hacer política, tanto en la institución como en la propia organización. En

ellas adquieren una centralidad relevante conceptos como los de participación, transparencia y trabajo de proximidad.

Respecto a los partidos de izquierdas y soberanistas, presentan como valor añadido su forma de hacer política, por la vinculación que establecen con los movimientos, el tejido social y las entidades culturales, juveniles y de ocio, por la idea que tienen de la política al servicio a la comunidad y por la búsqueda de instrumentos para acercar la política a la ciudadanía, fomentando la participación y la transparencia tanto en la institución como en la propia candidatura. Respecto a los movimientos sociales clásicos, no abandonan la calle pero luchan por hacer suyo, de la ciudadanía organizada, un pedacito de Estado, de institución, por tener voz directa en los plenos del ayuntamiento, y en algunos casos en el gobierno de los municipios, y por influenciar desde dentro la gestión y las políticas públicas.

Traemos a colación estas experiencias en este libro porque, aparte de encontrar las mismas razones de surgimiento que el 15-M, en bastantes casos se relacionan de manera productiva con las iniciativas indignadas (debe reconocerse, aun así, que en unos pocos se han dado relaciones complejas y/o conflictuales). En pueblos y ciudades, el sujeto político que ha evolucionado a partir de los núcleos de agregación del 15-M se vincula con estas candidaturas, compartiendo local y espacios de trabajo, objetivos, luchas y campañas. De una manera similar a lo que ha sucedido con las asociaciones vecinales en distintos barrios de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. El 15-M se territorializa en asambleas de barrio y en luchas en contra de los recortes sociales y en favor de los servicios públicos, paralizando desalojos de viviendas y fomentando la participación política; también encuentra en algunas experiencias municipalistas espacios con los que colaborar y, a veces, hibridarse.

Un año después de la irrupción del 15-M quedan aún muchos interrogantes abiertos sobre cómo interpretar aquellos días de primavera. También se hace difícil predecir evoluciones de acciones y subjetividades. Pero como aviso a navegantes y para aquellas que quieren dar por finiquitada la experiencia, las modificaciones

introducidas son de gran calado. Posiblemente sin la irrupción indignada no serían imaginables movilizaciones masivas y plurales como las que hemos visto estos últimos meses, y que han vuelto a llenar calles y plazas: desde las marchas en solidaridad con los mineros hasta las concentraciones de denuncia de los *rescates* y de los planes de ajuste que éstos comportan, pasando por las masivas paralizaciones de desahucios o las movilizaciones en favor de la educación y la sanidad públicas. Todas estas expresiones no son 15-M, pero son 15-M. Más política para cambiar el mundo y construir futuro. Más participación y menos miedo de salir a la calle.

Y sí, quizás en parte por la existencia de aquella irrupción de hace un año hoy podemos decir que la resistencia está en las calles. Que el cambio de modelo que están planeando las elites no se va a llevar a cabo sin protesta social. La ciudadanía ya no está dispuesta a creer los cuentos de hadas de las elites económicas y políticas mientras sus condiciones de vida materiales van degradándose. Ahora bien, la cuestión que hay que tomar en consideración es la relativa a si vamos a ser capaces de construir una alternativa. Y no sólo teórica —que de éstas ya tenemos muchas—, sino organizativa y materializable: provocar una nueva estructura de oportunidad política para darle la vuelta a una situación que se muestra apocalíptica. Ser capaces de dibujar grietas de futuro en este muro de cemento que ahora parece inamovible.

Pero el nuevo escenario no nacerá, o no sólo, de lo *viejo*, de actores, acciones y demandas que han estado presentes desde la transición política en el Estado español. Quizás a lo *nuevo* aún le quede camino para recorrer, y no puede hacerse el camino de manera autónoma. El municipalismo alternativo, éste que tiene un pie en la calle y otro en la institución, puede ser un buen punto de partida para empezar a pensar en cómo transformar la realidad, para trabar una senda de cambio real. Y no tanto desde una perspectiva orgánica —es decir, la relativa a los sujetos que lo conforman, ya que un proyecto transformador amplio tiene que abarcar más actores—, sino como invención de nuevas dinámicas y lógicas políticas, de nuevas formas y contenidos de trabajo para la cosa pública, en la protesta y en la propuesta, en la calle y en la

institución. Atrevámonos a desear, soñar, y transformar... dice Doctor Deseo en su último disco. Aunque sepamos que el reto no será fácil.

CAPÍTULO 21
LAS ASAMBLEAS: LA MÉDULA DEL MOVIMIENTO

ÁNGEL CALLE COLLADO[21]

Las asambleas han constituido la médula de organización y de acción del 15-M. El protagonismo social ha tomado cuerpo en plazas físicas y virtuales: foros, micrófonos abiertos, espacios de decisión en las calles, dinámicas de autoorganización en barrios y comisiones… El protagonismo social constituye la bandera de enganche y de motivación del 15-M, su ADN, podríamos decir. Frente a las democracias autoritarias, estas expresiones nutren aires de renovadas formas de entender la política.

¿Por qué ese *boom* asambleario? La necesidad de expresión de la juventud, la hipersensibilidad de los nuevos movimientos globales, las tradiciones localistas en la cultura política de este país y, finalmente, la reivindicación de espacios públicos y comunes llevaron al 15-M a enarbolar asambleas y micrófonos abiertos como puerta de entrada a la red de ágoras que empezó a consolidarse tras la convocatoria del 15 de mayo de 2011. Un veterano militante y un joven con experiencia organizativa pertenecientes a la asamblea de Córdoba del 15-M destacan con fuerza algunos de estos

elementos: “El desarrollo de este movimiento asambleario es un objetivo en sí mismo; para mí, de los fundamentales. Esto es una escuela de participación. Aquí tenemos un micrófono abierto, tenemos una asamblea, o sea, cualquier persona puede expresarse libremente. Creo que eso a los jóvenes les atrae, porque en muchos aspectos a la voz joven no se le está teniendo en cuenta y en estos espacios es en donde está encontrando su sitio”.

Los conceptos de *escuela política*, *escuela de calle* o *escuela de activismo* han sido repetidos frecuentemente en entrevistas y en talleres a los que he asistido. La asamblea tiene un carácter político en lo que respecta a la toma de decisiones, un carácter horizontal. Pero las tomas de plazas constituyen también una reivindicación y una apuesta por la proximidad como instrumento expresivo característico del espacio de movilización del 15-M. “A partir de las asambleas, y sobre todo de ir a los barrios, están saliendo contactos con movimientos asociativos, con gente quemada de esos ámbitos y sobre todo con gente que no ha estado metida en política antes. Para mí lo más importante es que todo se vincula más a lo local, a lo más cotidiano.”

Por supuesto que este marcado acento asambleario no ha sido *inventado* por el 15-M. Pero sí es remarcable que, explícitamente en el 15-M, la opción asamblearia busque crear una catarsis emocional colectiva, salir de la atomización o de la sociedad dócil hacia la exploración de otras formas de entender y practicar la política: de abajo hacia arriba, de lo singular a lo procesual, de lo político a la política. Frente a la democracia autoritaria se ponen en marcha expresiones de democracia radical, en una apuesta que facilita y promueve el encuentro social desde la diversidad y procura la legitimación desde abajo de nuevas formas de entender la acción.

La asamblea, por otro lado, se revela como un instrumento complejo: como inercia necesaria, pero también como elemento que demandó, a la vez que alentó, muchas energías personales. Las inercias vienen de largo. Remiten a la década de movilización que en este país iniciaron sectores más jóvenes ligados a los nuevos movimientos globales que empezaron a consolidarse en la década de 1990. Se reflejó en la participación en días de acción global

frente a la OMC o el FMI, en el desarrollo de la consulta sobre la deuda externa en 2000 o en los foros locales. Esas experiencias sirvieron de acicate de la apuesta política y del trabajo pedagógico a través de las asambleas desde las que emanaban grupos de trabajo, comisiones específicas e iniciativas de acción.

Esta memoria de prácticas contribuyó a difundir y dinamizar con cierta homogeneidad patrones de funcionamiento que están en las señas de identidad del gobierno de los muchos: rotación en tareas de portavocía y dinamización, política de gestos con las manos para facilitar entendimientos y participaciones, búsqueda de posiciones que tengan más consenso sin perder unos aires de crítica y contestación en la calle, posibilidad de reformular y replantear todo tipo de consignas o propuestas —algo fuera del alcance de muchas organizaciones tradicionales—, reivindicación de otra democracia a través de una práctica de radicalización de aquélla, reproducción de comisiones a escala local y en grupos de trabajo más amplios —lo que ha facilitado la adhesión a iniciativas estatales—, cultura de facilitar la llegada de nuevas personas y de respetar posiciones diversas, entre otras. Son nuevos tiempos que demandan nuevos códigos, como me comentaba una participante de la asamblea de Lavapiés en Madrid: “Evidentemente no esperas que allí se llegue a una decisión muy compleja porque falta estudiar y analizar las cuestiones mucho más. Pero sí me parece que la dinámica es un avance del respeto de la palabra, de no salirse del tema, de intentar aprender nuevos códigos”.

En ocasiones este asamblearismo se ha traducido también en *cansancio* y en cierto sentimiento de *ineficiencia*. Críticas que provienen, en algunos casos, de militantes y organizaciones más estructuradas, más renuentes a las formas de hacer del gobierno de los muchos. Y es que este asamblearismo no es, en contra de lo que pueda apuntarse desde algunos detractores, una concatenación de experiencias de participación líquidas, porosas, una moda entre amantes del *Facebook*. Subrepticia y sutilmente, sin ningún proyecto *a priori*, esta red de ágoras, retroalimentada entre lo virtual y lo físico, ha conseguido constituir un sujeto político. Eso sí: no con las características de las formas de acción colectiva de los siglos

precedentes, y sí con las pautas de radicalización de la democracia, que beben, en primer lugar, de la hipersensibilidad frente al poder y, en segundo término, del despegue de herramientas y nuevas tecnologías de información que alimentan el hacer en red, contextualizado, según un protagonismo social de unos muchos. Protagonismo social e inteligencia colectiva que se expresan en clave de *ejercicio público de comunicación.* En palabras de un activista de Democracia Real Ya en Madrid: “Toda la plaza era un ejercicio público de comunicación de una situación que se hace insostenible, ¿no? Para mí eso era de una emotividad y de una contundencia brutales”.

El gobierno de los muchos es posible por la *cultura del y* —agregativa *y* que busca la diversidad, con una cultura más basada en desarrollar tramas y sinergias sociales que en la idea de un proyecto político cerrado— subyacente. Internet es su arma, pero no su alma, ya que el descontento con el autoritarismo y la falta de derechos empuja a la expresión directa y a la búsqueda de nuevos vínculos sociales marcados por la horizontalidad y el protagonismo social.

CAPÍTULO 22
SIMPATÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL 15-M

SONIA CAMPO MACHO[22]

Ha pasado más de un año desde la eclosión del 15-M y el movimiento continúa activo mientras las simpatías hacia él se renuevan. Prueba de ello son, por un lado, las manifestaciones, asambleas, grupos de trabajo y comisiones, y la articulación de un buen número de redes de solidaridad y apoyo mutuo que durante estos meses se han ido creando y continúan funcionando. Y, por otro, lo que dicen las encuestas de opinión. Según el IOP (índice de opinión pública) elaborado por Simple Lógica escasos veinte días después del surgimiento del 15-M, el 73 por ciento de la población española aprobaba las *manifestaciones* que en esos momentos se estaban produciendo. Un año más tarde sigue siendo una mayoría de ciudadanos y ciudadanas la que comparte sus quejas y demandas (el 64 por ciento). Si nos hacemos eco de las encuestas del diario *El País*, la defensa del ideario tampoco ha resultado muy erosionada por el paso del tiempo. Hace un año el 15-M era bien recibido por 8 de cada 10 personas, que afirmaban que quienes participaban en el movimiento tenían razón en las cosas por las que protestaban. En mayo de 2012 el 78 por ciento de la población lo seguía pensando.

Respecto al futuro del 15-M, aunque las expectativas mostradas eran y son relativamente bajas si se comparan con el nivel de aceptación y defensa de todo lo que subyace al movimiento, no resultan nada desdeñables. El tiempo no ha variado el panorama sustancialmente. En 2011, según el IOP, el 39 por ciento de la población depositaba sus confianzas en que este movimiento contribuiría a la mejora de la situación de España; hoy lo sigue creyendo el 35 por ciento.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en su barómetro de junio de 2011, preguntaba por posibles escenarios de futuro del movimiento a quienes habían seguido con interés las movilizaciones. El 38 por ciento de las personas entrevistadas otorgaba al 15-M continuidad por otras vías (asambleas, etc.), el 28 por ciento creía que tendería progresivamente a desaparecer y, por último, el 22 por ciento consideraba que el movimiento terminaría, pero volvería a reaparecer en el futuro.

La evolución de la simpatía también se ha mantenido constante durante el año transcurrido. En las encuestas del diario *El País* podemos constatar no sólo su ausente disminución, sino un incremento al cumplirse el primer aniversario del 15-M. Si en junio de 2011 el 66 por ciento de la población manifestaba su simpatía hacia el movimiento, en octubre de ese año el porcentaje se reducía hasta el 54 por ciento para volver a subir hasta un 68 por ciento en mayo de 2012.

El apoyo, la defensa del ideario y la evolución de la simpatía no han variado en exceso desde la irrupción del 15-M en la esfera política, como tampoco lo ha hecho el perfil de la gente más cercana al movimiento. La edad aparece como factor importante a la hora de establecer diferencias. A medida que se incrementa, disminuye el apoyo al 15-M en cualquiera de sus versiones (manifestaciones, ideario y simpatía). Cuanto mayor es la edad, más grande es el escepticismo que entre la gente causa el movimiento. Un elevado nivel educativo y un perfil de izquierda son lugares desde donde el 15-M cosecha las mayores cercanías.

Pero, ¿qué pasa con la participación? En noviembre de 2011 el CIS mostraba que el 11 por ciento de la población había participado

en alguna de las manifestaciones, acampadas, marchas o protestas del 15-M. La gente más joven —menor de 34 años—, la que mostraba un perfil de izquierda y los estudiantes y técnicos eran los que adquirían un carácter más participativo. Ocho meses después, en julio de 2012, y con datos del IOP, la participación había llegado hasta el 17 por ciento. A pesar del incremento, no dejaba de suscitar interrogantes la falta de correspondencia entre los datos de simpatía y los de participación. Por condición socioeconómica, eran los obreros cualificados y los parados los que mostraban las distancias más grandes entre simpatía y participación. Por el contrario, los directores y los jubilados eran los que contaban con las distancias más pequeñas. De este modo, y a la vista de los datos, la edad, el tiempo libre y la inseguridad económica emergían como factores que condicionaban la participación. Por comunidades autónomas, ambos estudios coincidían en que las mayores participaciones se habían hecho valer en Madrid. Además, el IOP destacaba una elevada participación en Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras el CIS lo hacía en Cataluña, Baleares y Navarra. El resto de comunidades resultaban devaluadas en participación, con porcentajes que no superaban el 10 por ciento.

Aunque antes de mayo de 2011 no se apreciaba tal percepción, con datos del estudio cualitativo “Representaciones políticas y 15-M”, realizado por el CIS, a finales de ese año se identificaba una generalizada sensación de que el movimiento era “algo necesario”. Resulta evidente que las simpatías que suscitaba el 15-M le otorgaban gran legitimidad social entre la población: “Yo veo con simpatía que haya alguien que por lo menos proteste contra esto que nos están haciendo”. Sin embargo, la identificación con el 15-M tenía un carácter ambivalente. Sucedía algo que podría describirse como una *indignación nominal*. La gente se identificaba con el ideario y con el discurso de queja, protesta, demanda y reivindicación: “Yo me siento identificada con las cosas que ellos reivindican”. Pero esa identificación no se traducía necesariamente en participación: “Hasta el momento no me he sentido parte más que en lo ideológico”. “Es como que eres católica y no vas a misa; es casi lo mismo.” A la hora de actuar hay un trayecto que separa la

actitud —la simpatía— del comportamiento —la participación—: "¿Por qué digo 'ellos'? Porque están comprometidos. Yo no me he implicado".

En ese trayecto se encuentran diversos factores que obstaculizan la participación. Entre ellos aparecen algunos elementos, citados con anterioridad, como condicionantes. El primero es la existencia de tiempo libre: "Yo no he estado en esa situación de en ese momento estar libre de todo, de no tener obligaciones a lo largo del día…". El segundo lo configura la edad: "Yo creo que llegado a ciertas edades de cansancio, de hastío, de falta de fe, incluso la edad que te da una evolución personal que está, ya no tanto en el pleno político, que está en otros aspectos, hace que tú no entregues toda esa energía". Un tercer aspecto lo aporta la existencia de responsabilidades que determinado ciclo vital lleva asociadas: "Lo que no voy a hacer es estar en una asamblea y estar mi hija sola en casa o meter a una persona". Además, como sospechaban los datos de encuesta, la inseguridad económica que está generando la crisis tampoco anima a sumar participantes entre las simpatías del 15-M: "Es un momento en el que la gente tiene problemas reales y cree que manifestándose no le van a pagar la hipoteca".

Hay otros elementos que actúan de freno a la participación en el 15-M. Uno de ellos es una especie de *desidia* que inmoviliza cualquier intento de acción: "Estamos indignados pero lo vemos desde la barrera". "Estamos al tanto de lo que convocan, pero no en primera línea." Otro lo constituyen dos dimensiones que en cierta medida se perciben como configuradoras de la propia naturaleza del movimiento y que en algunas ocasiones se consideran impedimentos a la hora de participar: el carácter utópico que se atribuye al 15-M —"Algunas reivindicaciones son un poco, son un poco utópicas, ¿no? O sea, como que nos administremos las asambleas, que gestionemos todas las asambleas… Las bases que proponían eran cosas utópicas, decían que los bancos tenían que suprimir…"— y el modelo asambleario y horizontal de toma de decisiones. Este modelo, que conlleva un proceso lento y dificultoso que en algunas ocasiones es criticado, opera como contención a la

hora de participar: “Pero, claro, ciertamente, esa experiencia de la búsqueda del consenso, es muy larga, muy cansada y, cansada y cansina…”. “Como se ha organizado ahora, no sé el futuro que puede tener porque hay gente que se puede desenganchar de lo que ya está, de la red que ya está creada, ¿no? Porque puede generar aburrimiento, es decir, y otra asamblea, más de lo mismo.”

Pese a los obstáculos que frenan una mayor participación en el movimiento, todas las voces que concedían corta vida al 15-M tendrán que comprobar un año después que éste sigue vivo. Con mayor o menor participación durante doce meses de movilizaciones a las espaldas, asambleas en las calles, reapropiación del espacio público, establecimiento de estructuras, redes de confianza y apoyo mutuo, visibilidad y actuación contra las injusticias y numerosos frentes más, todos estos datos avalan su salud y el balance resulta positivo. Además, los estudios de opinión y toda la legitimación social que amparan respaldan también ese balance: “El 15-M nos sigue cayendo simpático, nos gusta lo que defiende, aunque sólo tengamos algunas, no todas, expectativas de que contribuya a mejorar la situación española”.

CAPÍTULO 23
LA REPRESIÓN DEL 15-M: LA CONCIENCIA POR ENCIMA DE LA LEY

SARA LÓPEZ MARTÍN Y JAVIER GARCÍA RABOSO[23]

El 15-M surgió en Madrid a partir de una práctica de desobediencia civil y de la reacción represiva ante ella. La carga policial que siguió al *reclama las calles* tras la manifestación del 15 de mayo de 2011, germen del movimiento, se saldó con 24 detenciones y decenas de personas lesionadas. Fueron varias de las personas afectadas las que decidieron permanecer en la Puerta del Sol "hasta que los compañeros sean puestos en libertad". Dos días más tarde, el desalojo de los primeros acampados —que se saldó con un detenido y varios lesionados— dio lugar a una nueva concentración no comunicada que, esta vez masiva, inició la acampada que durante un mes se instaló en el centro de la ciudad.

A lo largo de su corta pero intensa andadura, la práctica política que antepone la legitimidad a la legalidad ha sido una de las señas de identidad de este movimiento. Desde la premisa de que los derechos fundamentales no pueden estar limitados por *autorizaciones encubiertas*, ni una sola de las movilizaciones convocadas por el 15-M en la ciudad de Madrid ha seguido los

trámites oficiales de comunicación que la ley exige para el ejercicio del derecho de reunión.

La respuesta de las autoridades no se hizo esperar, con distintas modulaciones según los momentos políticos. Es posible determinar, con todo, una clasificación de las vías represivas padecidas por el 15-M. Entre ellas cabe destacar dos modalidades de represión: la una de alta intensidad y la otra de baja intensidad.

La represión de alta intensidad se ha asentado ante todo en cargas policiales en el transcurso de las cuales se han producido:

- Lesiones a los manifestantes: según cálculos de la comisión legal de Sol, cerca de 300 personas han denunciado lesiones en el último año en Madrid. Todas las denuncias presentadas, salvo una, han sido archivadas por ser causadas por *autor desconocido*, en la medida en que las unidades policiales no portan el número de placa identificativo que regula la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior. A pesar de que se ha interpuesto una queja ante la defensora del Pueblo y una denuncia contra el Ministerio exigiendo el cumplimiento de la instrucción, la respuesta institucional ha sido precisamente la ausencia de respuesta, en tanto las reiteradas declaraciones de la delegada del Gobierno negaban la mayor.

- Detenciones: según datos de la misma comisión, 178 personas han sido detenidas en Madrid entre el 15 de mayo de 2011 y el 19 de julio de 2012. Estas personas se enfrentan a procesos judiciales a dos años vista por distintas combinaciones de un mismo paquete de delitos: desórdenes públicos —art. 557 y ss. del Código Penal (CP)—, desobediencia y resistencia —art. 556 del CP—, atentado a la autoridad —art. 550 y ss. del CP—, lesiones —art. 147 y ss. del CP— y delitos contra los derechos de los trabajadores —art. 315 del CP—; sólo diez de los procesos han sido archivados a día de hoy. Además, cerca de una decena de

manifestantes se han visto abocados a juicios de faltas, en los que han sido absueltos en todos los casos.

La situación es más dramática, si cabe, en ciudades como Barcelona, donde fueron 113 los detenidos por la jornada de huelga general del 29 de marzo de 2012; a ellos cabe sumar otro centenar de detenciones en distintas movilizaciones convocadas por el 15-M. La cifra disminuye en ciudades como Valencia o Sevilla, donde no alcanzan la decena, y es menor en otras capitales. En conjunto, podemos decir que el saldo represivo afecta ya a cerca de 400 activistas. Cabe señalar, además, en el caso catalán, la aplicación de medidas cautelares que han enviado a cuatro personas a prisión preventiva durante un mes, y que en el de Madrid han supuesto órdenes de alejamiento del metro para los detenidos por la acción de tomaelmetro del 25 de abril de 2012.

Por lo que se refiere a la represión de baja intensidad, se manifiesta a través de sanciones administrativas, por un importe medio de 300 euros, por desobediencia (26h de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana), resistencia (26i), alteración del orden público (art. 23n y l) o convocatoria de concentración no comunicada (23c), como consecuencia de las identificaciones por parte de la policía en el transcurso de las movilizaciones. En la ciudad de Madrid han sido 726 las personas sancionadas hasta la fecha, lo que supone una recaudación de 217.200 euros, dos veces el sueldo anual de Ana Botella.

La oleada de sanciones se ha hecho más intensa desde la llegada a la Delegación de Gobierno en Madrid de Cristina Cifuentes: una media de cincuenta sanciones por movilización desde enero de 2012. La represión de baja intensidad es, si cabe, más efectiva que la anterior, en la medida en que individualiza los efectos —opera contra el propio patrimonio— y es invisible —llega simplemente una carta a casa—, por lo que el impacto desmovilizador sobre las personas afectadas es potencialmente mayor.

Junto con las dos modalidades represivas mencionadas, conviene señalar la existencia de irregularidades en el transcurso de

las detenciones. Entre ellas pueden destacarse:

- La presencia de policías encapuchados en la comisaría de Moratalaz, constatada en las detenciones del 4 de agosto de 2011 y el 10 de febrero de 2012. Fue denunciada ante el Colegio de Abogados de Madrid y ante la defensora del Pueblo, sin que tengamos constancia de que se haya abierto una investigación interna al respecto. Lo cierto es que la denuncia mediática ha conseguido que estos hechos no se vuelvan a repetir.

- Dificultades para la designación de abogados de confianza en la misma comisaría. Las presiones recurrentes para que se designen otros abogados o del turno de oficio han llevado, en al menos uno de los casos, a la admisión a trámite de una denuncia por denegación del derecho a la asistencia letrada.

- En al menos dos ocasiones las personas detenidas han denunciado tratos degradantes en comisaría. En un comunicado hecho público tras su puesta en libertad, varios de los detenidos el 15 de mayo de 2011 señalaron haber sido objeto de humillaciones y haberse visto obligados a permanecer varias horas arrodillados. En el mismo sentido, varios detenidos el 12 de mayo de 2012 denunciaron haber permanecido varias horas esposados cara a la pared y una persona en concreto declaró haber recibido bofetadas; por estos hechos se interpusieron cuatro denuncias en el juzgado de guardia.

Por si no fuera suficiente, cabe añadir la dinámica de criminalización mediática, en la que es posible distinguir una secuencia que va desde la imagen del *perroflauta* que siembra el caos y la suciedad —Esperanza Aguirre llegó a entregar, en junio de 2012, el “Premio a la Tolerancia” de la Comunidad de Madrid a los comerciantes de Sol por su “entereza admirable” durante la acampada— a la del *antisistema violento* de los últimos tiempos,

ilustrada con secuencias de las cargas contra los estudiantes valencianos o las de la huelga general en Barcelona.

Además, se ha empezado a percibir el asedio a periodistas y cámaras en las movilizaciones, de la mano de la cada vez más habitual existencia de periodistas detenidos —en el caso de la Comunidad de Madrid, dos en agosto de 2011, uno dos días más tarde, uno en un desahucio en Leganés en diciembre de ese año, dos en mayo de 2012 y uno en las movilizaciones contra los recortes de julio de este año—, sancionados —al menos tres— y golpeados —siete en agosto de 2011, tres en febrero de 2012 y cinco más en movilizaciones posteriores—.

Los objetivos de todo este proceso se pueden resumir en dos: desmovilización de los manifestantes por el viejo y clásico procedimiento de *que cunda el ejemplo* y criminalización para evitar adhesiones tardías. Aunque no ha dado frutos —las movilizaciones siguen y se hacen masivas al hilo de la propia situación socioeconómica—, hemos de preguntarnos cuán sostenible es a medio plazo para un movimiento tener una generación entera procesada en los tribunales y asfixiada por el pago de sanciones inasequibles para bolsillos precarizados. La anunciada reforma del Código Penal se cierne como una espada de Damocles sobre la práctica política del 15-M en la calle, caracterizada en gran medida por el impulso de la espontaneidad.

Frente a esto, tenemos pendiente una reflexión profunda sobre repertorios de movilización. El conocimiento de los propios derechos —qué es legal y qué no, para determinar qué es legítimo; cuánto cuesta lo que se hace en cada momento— es básico para una práctica desobediente que quiera denominarse así. La asunción consciente de las consecuencias —no hemos decidido que queríamos ser detenidas— y el hecho de estar preparado para ello —el hecho de saber cuánto estamos dispuestos a asumir— son imprescindibles para el triunfo de una opción que pretende visibilizar legitimidades. Porque si *la conciencia está por encima de la ley*, debemos estar preparadas para hacer realidad ese principio.

CAPÍTULO 24
EL 15-M Y LA CUESTIÓN NACIONAL

RAIMUNDO VIEJO VIÑAS[24]

La cuestión nacional ha sido sin duda uno de los asuntos más controvertidos que han sacudido las improvisadas ágoras del 15-M. Las asimetrías inherentes a la política del movimiento en el Reino de España —por lo general más y mejor organizada en las naciones sin Estado, aunque no siempre necesariamente gracias a los nacionalismos— no podían dejar de presentarse en unas movilizaciones que pugnan por la democratización. Pero al tiempo que la cuestión nacional nos interpela sobre las limitaciones democráticas del régimen —definición plural del *demos*, políticas de reconocimiento, federalización del poder…—, nos pregunta también por la actualidad del nacionalismo como agencia, por su configuración como proyecto político capaz de dar respuesta a los desafíos de la democratización en un mundo posmoderno.

Para tratar esta cuestión articularemos nuestro argumento en tres preguntas: (a) cómo se plantea la cuestión nacional el 15-M; (b) qué está cambiando, de forma tan precipitada, tras el movimiento, y (c) hacia dónde debería orientarse el debate para que fuese posible enunciar una alternativa que bloquee, a su vez, las declinaciones reaccionarias de la ruptura constituyente.

El 15-M no se produjo en un vacío. Como expresión de antagonismo que es, su desarrollo ha obedecido a los cambiantes alineamientos de poder en el régimen (la llamada *estructura de oportunidad*). No es casual, pues, que el 15-M arrancase en un contexto electoral y se prolongase hasta hoy teniendo que readaptarse al resultado de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. La mayoría absoluta del PP marcó en este sentido un antes y un después para el 15-M y la cuestión nacional. En la legislatura en curso, el escenario político se definirá por el refuerzo del proyecto centralista, resimetrizador y nacionalista español (no necesariamente del PP).

Pero si es importante no perder de vista este horizonte temporal inmediato, no lo es menos tener presentes otros dos. A saber: el horizonte del propio régimen (desde 1978) y el de la construcción del Estado nacional (desde 1808-1812). El primero nos apunta una clave fundamental como es el agotamiento del Estado de las autonomías y el segundo otra de relevancia mayor si cabe: la obsolescencia del propio Estado nacional. Mientras que la crisis del Estado de las autonomías apunta hacia abajo —al fracaso de una descentralización del poder—, la crisis del Estado nacional apunta hacia arriba —al fracaso de la construcción europea—. Así las cosas, analizar la cuestión nacional en el marco del 15-M partiendo únicamente de referentes previos puede abocar a notorios errores de comprensión. El más destacado de ellos se deriva de las implicaciones que tiene una movilización que pivota sobre las redes sociales. Piénsese si no en el salto cualitativo que separa los repertorios tradicionales de los nacionalismos y el 15-M.

En el caso catalán, de hecho, el 15-M emergió en un momento en que el catalanismo había entrado en crisis: tras varios años de movilización sin precedentes y la concatenación de tres ciclos sinérgicos —PDD, consultas y 10-J—, la capitalización electoral de Convergència i Unió (CiU) colisionó con un PP autosuficiente en su mayoría absoluta tras el 20-N. La opción del *cartel-party* catalanista, otrora útil a Pujol, ya no era operativa. La fragmentación electoral independentista, por su parte, puso de manifiesto la eficacia del

diseño centrípeto del régimen y sus instituciones a la hora de bloquear la secesión.

En el caso vasco, la refundación de la izquierda *abertzale* en el marco del cese de la lucha armada ha revelado, una vez más, que la excepción vasca sigue siendo fiel a su condición. A diferencia de otros territorios, el 15-M tuvo en el País Vasco una influencia bastante menor, muy probablemente debida a la mayor estructuración organizativa tradicional de una sociedad que ha vivido décadas de conflicto. Queda por ver, no obstante, qué viene tras este modelo repertorial de transición que ha sucedido al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y que protagoniza de momento con gran éxito la izquierda *abertzale*.

En el caso gallego, destaca la implosión del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y su modelo frentista que, desde finales del decenio de 1980, dominaba con incuestionada hegemonía el panorama galleguista. Aunque no es muy razonable acusar al 15-M de una implosión que se venía advirtiendo desde el Gobierno bipartito —si no antes—, parece claro que el favorable contexto de movilización en esta nueva ola ha catalizado la crisis del BNG. No parece, empero, que el panorama político de las alternativas al BNG aporte soluciones novedosas y permeables al desafío que plantea el 15-M.

¿Qué es, entonces, lo que se está precipitando tras el movimiento del 15 de mayo? Con el 15-M llega al Reino de España una ola global de democratización que ya había conocido episodios anteriores como las luchas griegas o las revueltas en el norte de África y Oriente Medio. Responde esta ola a la ofensiva del neoliberalismo por alimentarse de sus propias crisis, una ofensiva que ha avanzado, al mismo tiempo, la reconfiguración de un mando que subvierte las propias bases en que se funda el Estado nacional. Se trata de una etapa más en la mutación del soberano moderno que deja atrás su conjugación liberal como Estado nacional, de derecho, democrático y social, para constituirse ahora en un desplazamiento que subordina el poder estatal a las lógicas de los llamados *mercados*.

Como resulta evidente, la mutación en curso de la soberanía moderna y la subordinación subsiguiente del Estado nacional a una

modalidad *mando disociado* afecta de manera decisiva a los nacionalismos. Y no sólo a los nacionalismos sin Estado, sino también a los de referencia estatal. El fenómeno más destacado en este sentido es la aparición de un genuino populismo de corte españolista, con un discurso que comparte una matriz identitaria con el conservadurismo del PP. A diferencia de éste, sin embargo, se presenta como agencia de la regeneración política.

Pocos ejemplos pueden ilustrar mejor este fenómeno que el de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Sabido es que la genealogía de esta fuerza política nos remite a una respuesta españolista al conflicto vasco organizada con el concurso de medios, figuras públicas y otros actores. El nacimiento del 15-M ha representado para el populismo en general —y para UPyD más en particular— la posibilidad de articular el discurso resistencialista del Estado nacional ante su propia crisis. Más aún: allí donde el nacionalismo del PP no puede llegar por su centralidad en el régimen, el discurso del populismo se repliega sin miedo sobre el Estado nacional, cuestionando el diseño institucional del régimen adoptado en la transición. De esta suerte, el populismo se presenta ante una generación joven, despolitizada y sin futuro como alternativa a la crisis por medio de soluciones simplistas que comparten, empero, una común voluntad de restituir el Estado centralista: erradicación del Estado de las autonomías —y no del de las diputaciones— como solución al déficit público, modificación de la ley electoral para asegurar una proporcionalidad de referente nacional español…

¿Hacia dónde debería orientarse el debate para enunciar una alternativa capaz de bloquear las derivas reaccionarias del populismo? La relación entre el 15-M y los nacionalismos sin Estado realmente existentes ha sido cuando menos controvertida. Por la naturaleza reticular de las redes sociales sobre las que se sostiene, el 15-M es, para quien no acepte las reglas que impone el cambio estructural de las sociedades contemporáneas, un perverso juego de espejos deformados cuya lógica consiste en devolver a cada cual la imagen de sus propios miedos identitarios, la aparente omnipresencia de un enemigo exterior que, en realidad, sólo mora en su interior.

No pocos entre los nacionalistas han querido ver en el 15-M la expresión de su peor pesadilla: el peligro españolista. Por las propias características del 15-M, esto sólo ha facilitado el éxito de UPyD y su prédica populista. Basta con observar la progresión de este partido en las encuestas para constatar quién está capitalizando la crisis.

Si queremos comprender la cuestión nacional en toda su complejidad, parece aconsejable comenzar por cuestionar/se, por someter a un enjuiciamiento autocrítico, los límites de lo que hasta ahora podíamos considerar identidades colectivas predeterminadas e inmutables. La política emancipatoria no es tanto la política de la constitución del *sujeto* como la de la ruptura de las ataduras que lo *sujetan* al mando. Por ello mismo, en el 15-M no se encuentra el problema del nacionalismo, sino la respuesta a la cuestión nacional.

CAPÍTULO 25
UN NODO MÁS DE LA PROTESTA GLOBAL

SALVADOR MARTÍ I PUIG[25]

El 15-M ha sido uno de los fenómenos sociales que mayor relevancia y atención internacional ha tenido en la última década. Lo fue, en gran medida, porque —a pesar de la gran cantidad de agravios que sufrían muchos ciudadanos— la movilización fue una sorpresa. No se trató, sin embargo, de un movimiento casual ni aislado. Nada más lejos: el 15-M también fue fruto de un estado de ánimo internacional vinculado a la crisis económica europea, a la *primavera árabe* y a las recurrentes movilizaciones latinoamericanas.

Cuando el *milagro español* —en el que había mucho de espejismo y demasiado de burbuja inmobiliaria— se derrumbó, la economía frenó en seco, se recortaron presupuestos y salarios, y el desempleo juvenil llegó a rebasar el 50 por ciento. Pero anteriormente países cercanos como Portugal, Grecia e Islandia ya habían experimentando los rigores de la crisis y las reacciones de sus ciudadanos. En Portugal, el 12 de marzo de 2011 unos 300.000 jóvenes se manifestaron en Lisboa bajo el lema *Geração à rasca* (generación en apuros) para evidenciar su malestar y denunciar las medidas de un Gobierno que los convertía en los *paganos de la*

crisis. En Grecia, desde las primeras medidas de ajuste aplicadas en el otoño de 2008, estallaron centenares de manifestaciones donde se denunciaba la actitud de los políticos y se protestaba contra unas medidas que habían ido empobreciendo a los ciudadanos. En Islandia, la crisis financiera de 2008-2009, que supuso la quiebra fiscal del país y la ruina de muchos de sus ciudadanos, generó un interesante movimiento que combinó la protesta —cada sábado durante un año unas diez mil personas se reunieron frente al parlamento— con la exigencia real de responsabilidades a políticos y financieros que terminaron enjuiciados.

Pero además del precedente expuesto cabe señalar el impacto simbólico que tuvo la *primavera árabe*, casi coincidente en el tiempo. Este fenómeno ejerció sin duda una intensa impronta simbólica en algunos colectivos militantes del Estado español. La protesta contra los regímenes autocráticos del mundo árabe y la capacidad de derrocar a los tiranos en Túnez y Egipto se interpretaron como el nacimiento de una nueva era donde *casi todo* era posible. Las movilizaciones impulsadas por la generación Raï-Rap tunecina y egipcia, educada en Facebook y liderada por jóvenes líderes *hacktivistas*, galvanizaron a los activistas de la otra orilla del Mediterráneo. Finalmente, otra fuente de inspiración fueron las protestas de los estudiantes chilenos, herederas de la *revolución de los pingüinos* —así llaman a los estudiantes de Secundaria a raíz del uniforme que visten— de 2006. Dicho movimiento, que apareció al mismo tiempo que el 15-M, paralizó el sistema educativo, cuestionó las medidas económicas promercado y denunció la progresiva residualización de las prestaciones del Estado, que han ido empobreciendo a las clases medias y populares del país.

En el Estado español todos estos acontecimientos dieron vigor a diversos colectivos militantes ya presentes en muchas ciudades, como el movimiento V de Vivienda o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que luchaban a favor del acceso a una vivienda digna; el colectivo Juventud sin Futuro, que agrupaba a jóvenes contra la precariedad y la mercantilización de la educación, o los movimientos No les Votes y Democracia Real Ya, que denunciaban a los partidos

mayoritarios. En este contexto, el día 15 de mayo de 2011 el último de esos colectivos organizó una concentración de protesta en el centro de Madrid y la respuesta de las autoridades fue —como es habitual— la represión. Sin embargo, esa vez la reacción de muchos simpatizantes fue la de protestar concentrándose al cabo de pocas horas en el epicentro de la ciudad: en la Puerta del Sol.

¿Por qué fue ésa la reacción? Los estudiosos que pretenden averiguar las razones por las cuales la gente se rebela se preguntan por qué en un momento dado las personas gritan, protestan y se enfrentan al poder. La respuesta no es sencilla. Sin embargo, algunos analistas apuntan que el *cuándo* explica en gran medida el *por qué* y el *cómo*. Y ese cuándo se refiere a la coyuntura que facilita la aparición de los movimientos.

Esa coyuntura se refiere a las dimensiones consistentes del entorno político que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre las gentes. Siguiendo esta línea argumental podría afirmarse que hubo 15-M porque pocos días más tarde —el 22 de mayo— había una contienda electoral: los comicios para elegir a las autoridades locales en toda España y a las autonómicas en 13 de las 17 comunidades autónomas. ¿Qué relación tuvo la inminencia de unos comicios en la dinámica movilizadora del 15-M? Hay que referirse a la inhibición de las autoridades a la hora de utilizar la represión para desalojar a los manifestantes y, con ello, a la percepción de los ciudadanos en el sentido de que salir a la calle para expresar su frustración y malestar en el espacio público era posible, gratificante y poco costoso. Aunque esto no significa que el 15-M fuese fruto del 22-M, posiblemente sin las elecciones del 22 de mayo el 15-M no hubiera sido lo que fue.

En el contexto mediático en el que se situó el movimiento, el desalojo violento de las plazas hubiera sido, sin duda, un duro golpe para la imagen de un país democrático que basa parte de su economía en el turismo y pertenece al *selecto club* de la Unión Europea. Así las cosas, la imagen de España en el exterior estaba en juego y las autoridades lo sabían. Los movilizados también. En esta dirección es posible señalar que las autoridades españolas contuvieron su pulsión represora por dos razones: las inminentes

elecciones y el evidente deterioro que hubiera sufrido la llamada *marca España* en el contexto internacional.

Pero más allá de las razones contextuales, también es preciso señalar que el 15-M mostró una fuerte capacidad de atracción y de simpatía, y una excelente habilidad comunicativa y organizativa. Tuvo la virtud de poner de acuerdo a un nutrido y heterogéneo número de personas alrededor de determinadas denuncias que se articularon en tres grandes ejes expresivos: el repudio a los partidos del *establishment*, la denuncia de que mercados e instituciones financieras dicten las políticas de los Gobiernos, y el rechazo de la precarización laboral y del despido en nombre de la competitividad.

En cuanto a la base del 15-M, sus participantes fueron mayoritariamente jóvenes —que no adolescentes— que tuvieron una exitosa capacidad de comunicar lo que acontecía *en tiempo real* gracias al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, generando un efecto *bola de nieve*. Se produjo entonces un *cambio de escala* del movimiento: se pasó de una protesta en Madrid a la eclosión de múltiples manifestaciones a lo largo de la geografía del país, y más allá de éste. Por ello lo más llamativo del 15-M fue su permanencia a lo largo del tiempo, su capacidad de extenderse y de resistir en su voluntad de ocupar el espacio público.

En este sentido es necesario señalar la naturaleza de la convocatoria y la movilización, que fue mucho más allá de la clásica *mediación militante*, pues la convocatoria del 15-M se nutrió sobre todo de la conectividad virtual, reemplazando las redes de microconfianza, de *cara a cara*, del mundo asociativo. Este fenómeno hizo que la movilización fuera instantánea, sorprendente y geográficamente muy extendida: empezó en Madrid pero rápidamente las protestas se extendieron a más de cincuenta ciudades del Estado español y a una quincena de ciudades del resto del mundo, entre ellas Berlín, Londres, París, Managua, México o Buenos Aires.

La extensión de la convocatoria significó que las movilizaciones tuvieran un carácter diferente en cada ciudad, a la vez que puso en la calle a jóvenes y mayores que no tenían antecedentes en la tarea de la protesta. Aunque este fenómeno supuso una débil cohesión y

un menor potencial de amenaza hacia las autoridades, también otorgó al movimiento frescura, novedad y espontaneidad.

A raíz de esta *frescura* muchos colectivos militantes del planeta se hicieron eco de los *indignados* y los replicaron. La ocupación de Zuccotti Park en Nueva York y la aparición de movimientos como *99,9%* y *Occupy Wall Street* —y muchos otros *Occupy* que se multiplicaron en Estados Unidos— difícilmente se comprenderían sin el antecedente del 15-M. Otro tanto sucede con los *indignados* mexicanos y con el movimiento #Yosoy132. Ahora, sin embargo, la cuestión radica en saber cómo poder conectar esta red para luchar con efectividad contra la impunidad de los mercados y la actitud pusilánime de los Gobiernos.

NOTAS

[1]María Rodríguez Bajo es periodista y escritora. Actualmente escribe en *Números Rojos*, revista de análisis político y social de la que es cofundadora.

[2]Yayo Herrero es cocoordinadora de Ecologistas en Acción y miembro del grupo de trabajo de economía feminista del 15-M de Madrid.

[3]Mariano Aragonés García es periodista, jubilado de TVE pero no del oficio. Coordinador de Comunicación de Attac Madrid y senderista, participa en la asamblea UAM-CSIC del 15-M.

[4]Ángeles Ramírez es profesora de Antropología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) e integrante de 15-M Escorial y de la asamblea de la UAM-CSIC.

[5]Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la UAM y autor de *El 15-M en sesenta preguntas.*

[6]Marta Jiménez Carrillo es licenciada en Medicina por la UAM. El texto lo ha escrito en colaboración con la asamblea de salud del 15-M de Madrid.

[7] Ángeles Díez Rodríguez es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Participa en el grupo de educación del 15-M y es miembro de la Plataforma de Trabajadores de la UCM.

[8]Ada Colau es investigadora y activista del derecho a la vivienda. Trabaja en el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y es impulsora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. También es coautora del libro *Vidas Hipotecadas*.

[9]Paloma Monleón es licenciada en Ciencias Políticas y afiliada a la CGT, organización en la que ocupó la Secretaría de Acción Social del Comité Confederal entre 2009 y 2011. Participa en colectivos y movimientos sociales en Madrid.

[10]Antonio Carretero, activista social y sindical, ha sido entre 2009 y 2012 director de *Rojo y Negro*, revista mensual y *web* informativa de la CGT.

[11]Manoel Santos es biólogo y productor editorial. Militante ecologista y altermundista, es fundador y director de Altermundo y uno de los promotores del Foro Social Galego y de la Rede Galega Anticapitalista.

[12]Ana Jiménez Talavera es educadora ambiental de vocación y profesión en Ecotono S. Coop. And. Es miembro de la Asamblea Centro del 15-M de Sevilla. Ana Velázquez Parejón es educadora ambiental de vocación y profesión en Argos S. L. Miembro de Ecologistas en Acción Ciudad de Sevilla.

[13]Jordi Calvo Rufanges es técnico e investigador del Centre Delàs de estudios por la paz, y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la UJI de Castelló y del Centro de Estudios de Movimientos Sociales de la UPF de Barcelona.

[14]Iolanda Fresnillo es investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización, y activista en la red ¿Quién debe a Quién? y en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. ¡No debemos! ¡No pagamos!

[15]Raúl Asegurado Pérez es trabajador social y sociólogo. Altermundista, activista social y político, es presidente de FIARE Galiza y socio fundador de AIS O Peto.

[16]Enric Duran es impulsor y miembro de la Cooperativa Integral Catalana.

[17]Bibiana Medialdea es profesora de Economía Aplicada en la UCM. Colabora con la comisión de economía de Sol y con el colectivo Econonuestra. Forma parte del Consejo Asesor de la revista *VientoSur.*

[18]Enrique del Río es miembro de REAS, FIARE y PROEMPLEO Rural. Raquel Ramírez es miembro de REAS, El Colletero y El Panal. Jeromo Aguado es miembro de Plataforma Rural y Vía Campesina.

[19]Patricia Manrique es filósofa y activista. Participa en diversos proyectos de economía alternativa y escribe en el periódico *Diagonal*, de cuyo colectivo editor forma parte.

[20]Gemma Ubasart-Gonzàlez es doctora en Ciencia Política, profesora de la UAM e investigadora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB. Participa en L'Altraveu per Castellar, integrante de las Candidatures Alternatives del Vallès.

[21]Ángel Calle Collado es profesor en la Universidad de Córdoba. Ha publicado *Nuevos Movimientos Globales* y editado el libro colectivo *Democracia Radical*. Es autor de poemarios como *Utopistas y desutópatas y Deseos a la calle*.

[22]Sonia Campo Macho es socióloga y politóloga, técnica de investigación social en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Se ha interesado ante todo por la participación y es desde las metodologías participativas desde donde se acerca al 15-M.

[23]Sara López Martín es miembro de la comisión legal Sol del 15-M de Madrid. Javier García Raboso es miembro de la comisión legal Sol del 15-M de Madrid.

[24]Raimundo Viejo Viñas es editor para Artefakte y profesor en la Universitat de Girona. Su último libro, *La dansa de Medusa*, repasa cuestiones candentes de teoría política suscitadas por el 15-M.

[25]Salvador Martí i Puig es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca y miembro del CIDOB-Barcelona. Ha investigado y publicado sobre movimientos sociales y otras formas de acción colectiva, y sobre política latinoamericana.

Table of Content

CRÉDITOS
PRÓLOGO
CAPÍTULO 1 LOS JÓVENES: LA GENERACIÓN PERDIDA
CAPÍTULO 2 MUJERES, FEMINISMO Y 15-M
CAPÍTULO 3 LOS MAYORES Y EL 15-M
CAPÍTULO 4 AUSENCIAS SILENCIOSAS: LA INMIGRACIÓN EN EL 15-M
CAPÍTULO 5 A VUELTAS CON EL ESTADO DEL BIENESTAR: ESPACIOS DE AUTONOMÍA Y DESMERCANTILIZACIÓN
CAPÍTULO 6 LA SANIDAD FRENTE A LAS AGRESIONES
CAPÍTULO 7 LA EDUCACIÓN, PUNTA DE LANZA DE LOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS
CAPÍTULO 8 EL DERECHO A LA VIVIENDA DEL 99 POR CIENTO
CAPÍTULO 9 EL SINDICALISMO QUE QUEREMOS
CAPÍTULO 10 DE LA AUTOORGANIZACIÓN A LA AUTOGESTIÓN
CAPÍTULO 11 DECRECIMIENTO Y 15-M: UN ‘FEEDBACK’ NECESARIO
CAPÍTULO 12 LA ENERGÍA NI SE CREA NI SE DESTRUYE: SE DESPILFARRA

CAPÍTULO 13 RECORTAR EL GASTO MILITAR
CAPÍTULO 14 LOS PUEBLOS DEL SUR: ¿OLVIDADOS POR EL 15-M?
CAPÍTULO 15 EN DEFENSA DE LA BANCA ÉTICA
CAPÍTULO 16 LO QUE SIGNIFICAN LAS COOPERATIVAS INTEGRALES
CAPÍTULO 17 EL PARO: UN DISPARATE CRUEL Y EVITABLE
CAPÍTULO 18 LA RECUPERACIÓN DE LA VIDA RURAL
CAPÍTULO 19 NECESITAMOS MEDIOS RADICALMENTE DEMOCRÁTICOS
CAPÍTULO 20 15-M Y MUNICIPALISMO ALTERNATIVO: OTRA POLÍTICA ES POSIBLE
CAPÍTULO 21 LAS ASAMBLEAS: LA MÉDULA DEL MOVIMIENTO
CAPÍTULO 22 SIMPATÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL 15-M
CAPÍTULO 23 LA REPRESIÓN DEL 15-M: LA CONCIENCIA POR ENCIMA DE LA LEY
CAPÍTULO 24 EL 15-M Y LA CUESTIÓN NACIONAL
CAPÍTULO 25 UN NODO MÁS DE LA PROTESTA GLOBAL
NOTAS